

PREFACIO

En este libro hemos esbozado un «modelo de propaganda» y lo hemos aplicado a la actuación de los medios de comunicación de los Estados Unidos. El empeño refleja nuestra creencia, basada en muchos años de estudio de los medios de comunicación y su forma de operar, de que éstos sirven para movilizar el apoyo en favor de los intereses especiales que dominan la actividad estatal y privada;¹ creemos también que sus opciones, énfasis y omisiones pueden entenderse mejor, y en ocasiones con una claridad y penetración sorprendentes, si las analizamos en estos términos.

Tal cosa quizá sea obvia; sin embargo, lo cierto es que según el postulado democrático los medios de comunicación son independientes y tienen la obligación de descubrir la verdad e informar de ella, y no reflejar pura y simplemente la percepción del mundo que desearían los grupos de poder. Los responsables de los medios de comunicación afirman que su forma de seleccionar noticias se basa en criterios objetivos e imparciales y que para ello cuentan con el apoyo de la comunidad intelectual.² No obstante, de ser cierto que

1. Utilizamos el término «intereses especiales» en su acepción común, no con el sentido orwelliano que se le ha dado en la era Reagan, en la que designa a los obreros, los granjeros, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los inválidos y los desempleados —en resumen, a la población en general—. Sólo un grupo no mereció esta apelación: las empresas, y sus propietarios y directores. Estos no son «intereses especiales», representan el «interés nacional». Esta terminología representa la realidad de la dominación y el uso operacional de «interés nacional» por los dos partidos políticos principales. Para una opinión similar, con evidencia de la relevancia de este uso en ambos partidos políticos principales, véase Thomas Ferguson y Joel Rogers, *Right Turn: The Decline of the Democrats and the Future of American Politics*, Hill and Wang, Nueva York, pp. 37-39 y *passim*.

2. Herbert Gans, por ejemplo, afirma que «las creencias que realmente prevalecen en las noticias son valores *profesionales* intrínsecos del periodismo nacional y

quienes ostentan el poder tienen capacidad para fijar los términos del discurso, para decidir qué es lo que el público en general puede ver, oír y pensar, y para «dirigir» la opinión pública por medio de campañas de propaganda regulares, la opinión generalizada acerca de cómo trabaja el sistema bien poco tiene que ver con la realidad.³

La especial pertinencia de la propaganda para lo que Walter Lippmann denominó «fabricación del consenso» ha sido admitida desde hace tiempo por quienes escriben acerca de la opinión pública, la propaganda y los requerimientos políticos del orden social.⁴

que los periodistas aprenden trabajando ... Las reglas para juzgar una noticia exigen que se ignoren las implicaciones del artículo ...» («Are U.S. Journalists Dangerously Liberal?», *Columbia Journalism Review*, noviembre-diciembre 1985, pp. 32-33). En su libro *Deciding What's News* (Vintage, Nueva York, 1980), Gans sostiene que los reporteros de los medios de comunicación en general son «objetivos», pero en el marco de la creencia en una serie de «valores perdurables» que incluyen el «etnocentrismo» y el «capitalismo responsable», entre otros. A nuestro entender, si se comprobara que los reporteros de *Pravda* trabajan coaccionados por la creencia en la justicia esencial del Estado soviético y en el «comunismo responsable», toda discusión sobre su objetividad carecería de sentido. Además, tal como probaremos más adelante, Gans subestima mucho hasta qué punto los reporteros de los medios de comunicación trabajan dentro de un marco limitado de suposiciones.

3. Las críticas neoconservadoras contra los medios de comunicación generalmente los describen como bastiones de los ataques liberales contra el sistema. Ignoran el hecho de que los medios de comunicación son grandes empresas controladas por individuos muy ricos o por otras empresas, y que los miembros de lo que los neoconservadores describen como «cultura liberal» de los medios de comunicación son empleados a sueldo. Asimismo hacen caso omiso del hecho de que los miembros de esta cultura liberal generalmente aceptan las premisas básicas del sistema y no están de acuerdo con otros miembros del sistema en las tácticas apropiadas para alcanzar los mismos objetivos. Los neoconservadores simplemente no están preparados para permitir divergencias de sus propios puntos de vista. En nuestro análisis del capítulo 1, los describimos como quienes desempeñan el importante cometido de ser «reforzadores de opinión», tratando de obligar a los medios de comunicación a omitir incluso el poco disenso tolerado en la actualidad. Para un análisis del enfoque neoconservador de los medios de comunicación, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, «Ledeon on the Media», en *The Rise and Fall of the Bulgarian Connection*, Sheridan Square Publications, Nueva York, 1986, pp. 166-170; George Gerbner, «Television: The Mainstreaming of America», en *Business and the Media*, informe Yankelovich, Skelly and White, 19 de noviembre de 1981; Gans, «Are U.S. Journalists Dangerously Liberal?».

4. Véase Walter Lippmann, *Public Opinion*, Allen & Unwin, Londres, 1932; Harold Lasswell, «Propaganda», en *Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillan, Nueva York, 1933; Edward Bernays, *Propaganda*, H. Liveright, Nueva York, 1928; M. J. Crozier, S. P. Huntington y J. Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report*

El propio Lippmann sostuvo a principios de los años veinte que la propaganda se había convertido ya en «un órgano regular del gobierno popular» y que su sofisticación e importancia aumentaban sin cesar.⁵ No es nuestra intención afirmar aquí que los medios de comunicación tan sólo se ocupan de la propaganda, pero creemos que la actividad propagandística es uno de los aspectos más relevantes de su cometido. En el primer capítulo del libro esbozamos un modelo de propaganda, que describe las fuerzas que hacen que los medios de comunicación desempeñen un papel propagandístico, así como los procesos mediante los que activan los sesgos y prejuicios, y la selección de noticias que se derivan de ellos. En los capítulos siguientes tratamos de demostrar que ese modelo de propaganda se puede aplicar a la actuación real de los medios de comunicación.

Las críticas institucionales como la que contiene este libro suelen ser rechazadas por los comentaristas del establishment aduciendo que son «teorías conspirativas»; tal argumento no es otra cosa que una simple evasiva. En realidad no utilizamos ningún tipo de hipótesis «conspirativa» para explicar la actuación de los medios de comunicación, sino que nuestro tratamiento se asemeja mucho más a un análisis del «mercado libre», cuyos resultados son en gran manera un producto del trabajo de las fuerzas de mercado. La mayoría de elecciones sesgadas de los medios de comunicación surgen de la criba previa de gente que piensa lo que hay que pensar, de

on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, Nueva York, 1975. Para una discusión más amplia, véase Noam Chomsky, *Towards a New Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982, capítulo 1 (hay traducción castellana: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1984) y las referencias citadas, especialmente Alex Carey, «Reshaping the Truth: Pragmatists and Propagandists in America», *Meanjin Quarterly*, vol. 35, n. 4 (Australia, 1976).

5. *Public Opinion*, p. 248. Para Lippmann, esto no era censurable, puesto que los «intereses comunes en gran parte eluden a toda la opinión pública, y sólo pueden ser dirigidos por una clase especializada cuyos intereses personales trasciendan lo meramente local» (p. 310). Le angustiaba que el incorregible sesgo de la prensa pudiera engañar tanto a la «clase especializada» como al público. El problema, por consiguiente, era cómo hacer llegar la información adecuada a las elites que toman las decisiones (pp. 31-32). Lippmann creía que esto podría conseguirse mediante el desarrollo de un cuerpo de expertos independientes que pudieran ofrecer consejo no tendencioso a los líderes. No planteó la cuestión sobre los posibles intereses de clase o personales de la «clase especializada» o de los «expertos» en cuya capacidad o equidad se confiaría para articular «el interés común».

preconcepciones interiorizadas, y de la adaptación del personal a las limitaciones de la propiedad, la organización, el mercado y el poder político. La censura es en gran medida autocensura, por un lado de periodistas y comentaristas que se ajustan a la realidad de los requerimientos organizativos de las fuentes y de los medios de comunicación, y por otro de los responsables de alto nivel de dichos medios, que fueron elegidos para poner en práctica las constricciones —que en muchos casos han interiorizado— impuestas por los propietarios y por otros centros de poder, tanto del mercado como gubernamentales.

Existen personajes importantes que toman iniciativas reales para definir y dar forma a las noticias, así como para mantener en línea a los medios de comunicación. Lo que aquí describimos es un «sistema de mercado dirigido», cuya dirección corre a cargo del gobierno, de los líderes de la comunidad, los propietarios y los ejecutivos de los principales medios de comunicación y los diversos individuos o grupos a quienes se ha asignado o permitido emprender iniciativas constructivas.⁶ El número de estos promotores es suficientemente reducido para que actúen al unísono si la ocasión lo requiere, tal como hacen los vendedores en mercados donde existe una fuerte competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos los dirigentes de los medios hacen cosas parecidas porque ven el mundo desde la misma perspectiva, están sometidos a limitaciones y a incentivos similares, de manera que presentan historias o guardan silencio todos a una, en una acción colectiva tácita y con una conducta de seguimiento del líder.

6. Por ejemplo, Claire Sterling y los expertos del Georgetown Center for Strategic and International Studies —Walter Laqueur, Michael Ledeen y Robert Kupperman— constituyen la máxima autoridad sobre el terrorismo de los medios de comunicación; sobre el papel que tuvieron Sterling y Paul Henze en el desarrollo de la Conexión Búlgara en el complot contra el papa, véase el capítulo 4. En el caso de América Latina, los medios de comunicación han sido obligados a evitar el recurso a la profesión académica para expresar opiniones aprobadas, ya que en este caso la profesión rechaza en gran parte el marco de la propaganda del Estado. Además ha sido necesario crear un nuevo cuadro de «expertos» (Robert Leiken, Ronald Radosh, Mark Falcoff, Susan Kaufman Purcell, etc.) a quienes poder recurrir para satisfacer sus necesidades doctrinales. Véanse ejemplos en Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988. Sobre el proceso de creación de expertos para satisfacer las exigencias del sistema, véase «El suministro de noticias a los medios de comunicación» en el capítulo 1 de esta obra (pp. 50-62).

Pero los medios de comunicación no se presentan como un sólido monolito en todos los temas. Cuando existe algún desacuerdo entre quienes ostentan el poder se produce una cierta diversidad de juicios tácticos acerca de cómo lograr los objetivos que suelen compartir, lo que se refleja en el debate entre los medios. Pero incluso cuando la controversia de las elites acerca de cuestiones tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas fundamentales o sugieren que los modos de ejercicio del poder del Estado al uso están basados en factores sistémicos.

A medida que vayamos avanzando estudiaremos una serie de casos aunque, de hecho, el modelo es básicamente el mismo. Por emplear un ejemplo que estaba presente en los medios de comunicación mientras escribíamos este libro, consideremos la descripción que éstos hacen de Nicaragua, objeto del ataque de los Estados Unidos. En este caso, la división de opiniones entre la elite es suficientemente grande como para poner en cuestión si el patrocinio de un ejército terrorista resulta efectivo para hacer que Nicaragua sea «más democrática» y «menos amenazadora para sus vecinos». Sin embargo esos medios de comunicación raramente consideran, si lo hacen alguna vez, la opinión, o permiten que en sus columnas de noticias aparezcan materiales que la sugieran, de que Nicaragua es más democrática que El Salvador y Guatemala, en cualquier acepción no orwelliana del término.⁷ Buena prueba de ello es que el gobierno de ese país no tiene por rutina asesinar a sus ciudadanos, como hacen los gobiernos de El Salvador y Guatemala;⁸ que ha

7. Como otros términos del discurso político, la palabra «democracia» tiene un significado técnico orwelliano cuando se usa en exaltaciones retóricas, o en el «periodismo» habitual, para referirse a los esfuerzos estadounidenses para establecer la «democracia». El término hace referencia a sistemas en los cuales el control de los recursos y los medios violentos aseguran el mando a elementos que servirán a los intereses del poder estadounidense. De esta manera los estados terroristas de El Salvador y Guatemala son «democráticos», así como Honduras bajo el dominio de los militares y la oligarquía, y al grupo de adinerados hombres de negocios, banqueros, etc., organizado por los Estados Unidos como una tapadera del ejército mercenario somocista creado por los Estados Unidos se le llama «la resistencia democrática». Para más información, véase el capítulo 3.

8. De los ochenta y cinco artículos de opinión que aparecieron en el *New York Times* y el *Washington Post* en los tres primeros meses de 1986, durante el «debate nacional» que precedió a la votación del Congreso sobre las ayudas a la contra, ni

llevado a cabo reformas socioeconómicas importantes para la mayoría, que los otros dos gobiernos de ninguna manera pueden emprender,⁹ que Nicaragua no representa ninguna amenaza militar para sus vecinos y que, en realidad, está sometida a continuos ataques por parte de los Estados Unidos y sus clientes y secuaces; y que el temor de Estados Unidos por Nicaragua se debe más a las virtudes de ésta que a sus defectos.¹⁰ Los medios de comunicación también evitan cuidadosamente cualquier referencia a los antecedentes y al resultado de otra tentativa similar de los Estados Unidos para restaurar la «democracia» en Guatemala, llevada a cabo en 1954, mediante una invasión auspiciada por la CIA que puso fin a la democracia guatemalteca por un período indefinido. Y aunque durante décadas los Estados Unidos apoyaron al gobierno elitista y ayudaron a organizar el estado del terror en Guatemala (entre muchos otros países), y pese a que en la actualidad subvierte —o aprueba la subversión— de la democracia en Brasil, Chile y Filipinas (entre otros, también en este caso), a pesar de que mantiene una «vinculación constructiva» con regímenes que hacen del terror su base fundamental, y con independencia de no haberse preocupado por la democracia en Nicaragua mientras el brutal régimen de Somoza se mantuvo en el poder, los medios de comunicación consideran dignas de todo crédito las afirmaciones del gobierno acerca de su preocupación por la «democracia» en Nicaragua.¹¹

siquiera una mencionó este hecho elemental. Para un análisis más detallado, véase Noam Chomsky, «Introduction», en Morris Morley y James Petras, *The Reagan Administration and Nicaragua*, Monografía I, Institute for Media Analysis, Nueva York, 1987.

9. Sólo dos frases de los ochenta y cinco artículos de opinión citados en la nota anterior mencionaron que el gobierno de Nicaragua había llevado a cabo reformas; ninguno de ellos comparó Nicaragua con El Salvador y Guatemala en esta importante cuestión.

10. Véase Diana Melrose, *Nicaragua: The Threat of a Good Example?*, Oxford, 1985; véanse también los capítulos 3 y 6 de esta obra.

11. En un artículo muy crítico con el «plan de paz» de Reagan para Nicaragua de agosto de 1987, Tom Wicker dice: «Cualquiera que sea su doctrina, los Estados Unidos no tienen ningún derecho histórico o divino para llevar la democracia a otras naciones; y un propósito semejante tampoco justifica el derrocamiento de los gobiernos que no le gustan» («That Dog Won't Hunt», *New York Times*, 6 de agosto de 1987). Wicker no rebate la pretensión de que Reagan intenta conseguir la democracia para Nicaragua; sólo dice que sus medios son dudosos y que su plan no funcionará. Debemos señalar que Wicker está en el límite más extremo de la opinión

El desacuerdo táctico de la elite acerca de cómo tratar el tema de Nicaragua queda reflejado en el debate público, pero los medios de comunicación, en conformidad con las prioridades de dicha elite, han coincidido en elaborar las noticias de manera que resulta imposible enmarcar la política de los Estados Unidos en un contexto significativo; suprime sistemáticamente cualquier evidencia de violencia o agresión estadounidense y presenta a los sandinistas desde una perspectiva extremadamente desfavorable.¹² Por el contrario, El Salvador y Guatemala, con unos antecedentes bastante peores, se presentan como países en lucha por la democracia bajo unos líderes «moderados», gozando así de una benévola aprobación. Estas prácticas no sólo han distorsionado la percepción pública de la realidad de América Central, sino que también han tergiversado seriamente los objetivos políticos de Estados Unidos, lo que por otra parte es una característica esencial de la propaganda, como señaló Jacques Ellul:

El propagandista no puede revelar evidentemente las auténticas intenciones de aquel a cuyas órdenes trabaja ... Ello supondría someter los proyectos a discusión pública, al escrutinio de la opinión pública, evitando así su triunfo ... Por el contrario, la propaganda debe velar esos proyectos, enmascarando su auténtica intención.¹³

El poder del gobierno para establecer los marcos contextuales y el orden del día, y para excluir de la inspección pública los hechos inconvenientes, queda también de manifiesto de una manera impresionante en la cobertura de las elecciones en América Central (tema

disidente expresable en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Más información en el capítulo 3. Para referencias adicionales, véase Chomsky, *Culture of Terrorism*.

12. Por ejemplo, en respuesta a los acuerdos de paz de Guatemala de agosto de 1987, los Estados Unidos inmediatamente aumentaron el número de vuelos de abastecimiento requeridos para mantener en campaña a sus fuerzas en Nicaragua al fenomenal nivel de dos o tres por día. El propósito era socavar los acuerdos mediante una intensificación de la lucha, e impedir que Nicaragua relajara la guardia, de modo que pudiera ser acusada de incumplir los acuerdos. Estas iniciativas estadounidenses eran con mucho las mayores violaciones de los acuerdos, pero virtualmente no fueron mencionadas en los medios de comunicación. Para un análisis detallado, véase Noam Chomsky, «Is Peace at Hand?», *Z magazine* (enero de 1988).

13. Jacques Ellul, *Propaganda*, Knopf, Nueva York, 1965, pp. 58-59.

que examinaremos en el capítulo tercero y mediante el análisis de casos particulares en los capítulos siguientes).

Aun cuando la discrepancia de la elite con respecto a la política del gobierno es prácticamente imperceptible o inexistente, se pueden producir algunos deslices en los medios de comunicación. Así, hechos que socavarían la línea del gobierno si se tratasen correctamente se pueden encontrar normalmente en las últimas páginas de los periódicos. Aquí radica parte del vigor del sistema de los Estados Unidos.

Es posible que el volumen de los hechos inconvenientes aumente, como sucedió durante la guerra del Vietnam en virtud del crecimiento de un segmento de población crítico, que desde 1968 incluía algunos elementos de la elite. Sin embargo, aun en ese caso excepcional era raro que noticias y comentarios llegasen a ocupar un lugar en los medios de comunicación de no ajustarse al marco del dogma establecido (que postulaba los buenos propósitos de los Estados Unidos, que su conducta respondía a la agresión y al terror, etc.). Durante y después de la guerra del Vietnam los apologetas de la política del Estado solían aludir a los hechos inconvenientes, al «pesimismo» periódico de los expertos de los medios de comunicación, y a los debates tácticos para mostrar que los medios de comunicación eran «desfavorables» a la guerra e incluso los «culpables» de que se perdiera. Tales aseveraciones eran ridículas, pero de hecho lograron la doble ventaja de disfrazar el papel real de los medios de comunicación de masas y, al propio tiempo, de presionarlos para que se atuviesen aún más estrechamente a los presupuestos propagandísticos de la política estatal. Hemos argumentado extensamente la «naturalidad» de estos procesos, por los que los hechos inconvenientes apenas aparecen o, cuando lo hacen, se someten convenientemente a las asunciones del modelo; ello excluye en la práctica de los medios de comunicación cualquier disidencia fundamental (aunque se permita en la prensa marginal), y da pie a un sistema de propaganda que resulta bastante más creíble y efectivo, al articularse en torno a unos motivos patrióticos, que otro que se basara en la censura oficial.

En nuestra crítica de las prioridades y el sesgo de los medios de comunicación a menudo nos inspiramos en esos propios medios, al menos respecto de algunos hechos y casos. Ello proporciona la oportunidad para un clásico non sequitur, en el que las citas que un

crítico de la prensa extrae de las principales publicaciones periódicas se ofrecen como una «prueba» inequívoca de que la crítica se refuta a sí misma y de que la cobertura que los medios dan de los temas en cuestión es adecuada. No obstante, que los medios de comunicación den cuenta de algunos hechos acerca de una cuestión no prueba en absoluto la exactitud o la suficiencia de tal información. En realidad, dichos medios suprimen materialmente gran parte de ella, como mostraremos en los siguientes capítulos. Pero en este contexto todavía es más importante la atención que se dispensa a un hecho: su ubicación en el medio, el tono con que se trata, las repeticiones, la estructura de análisis bajo el que se presenta, así como los hechos conexos que lo acompañan y le dan significado (o impiden su comprensión). Que un lector metódico en busca de un hecho, dé a veces con él con diligencia y mirada escéptica, nada nos dice acerca de si ese hecho ha recibido la atención que merecía y ha sido debidamente contextualizado, de si ha resultado inteligible para el lector o si en realidad ha sido distorsionado o suprimido. El nivel de atención que se le dispense puede ser discutible, pero ello no añade mérito alguno a la pretensión de que si un investigador diligente y escéptico puede encontrar ciertos hechos en la prensa, quedan así demostradas la ausencia de sesgos radicales y las supresiones de facto.¹⁴

Una de las tesis centrales de este libro es que el perceptible modelo de indignantes campañas y supresiones, de matizaciones y de énfasis, de selección del contexto, las premisas y el orden del día general, resulta altamente funcional para el poder establecido y sensible a las necesidades del gobierno y de los principales grupos de poder. Una atención constante hacia las víctimas del comunismo ayuda a convencer al público de la maldad del enemigo y prepara el terreno para la intervención, la subversión, el apoyo a estados terroristas, una interminable carrera de armamentos y el conflicto militar, todo ello por una noble causa. Al mismo tiempo, la devoción de nuestros dirigentes y medios de comunicación por este restringido grupo de víctimas aumenta la autoestima y el patriotismo públi-

14. Un lector metódico de la prensa soviética podía enterarse de algunos hechos sobre la guerra de Afganistán que contradecían la línea del gobierno, pero estos hechos inoportunos no se tomarían en consideración en Occidente para demostrar la objetividad de la prensa soviética y la exactitud de la cobertura informativa de la cuestión.

cos, en la medida que demuestra la humanidad esencial del país y de sus habitantes.

La opinión pública no se da cuenta del silencio que se cierne sobre las víctimas de los estados clientes, lo que es tan importante para el apoyo de la política del Estado como la concentrada atención sobre las víctimas del enemigo. Al gobierno de Guatemala le hubiera resultado muy difícil asesinar a cientos de miles de ciudadanos durante la pasada década si la prensa de los Estados Unidos hubiese prestado la misma cobertura informativa a ese hecho que la que ha dedicado a las dificultades de Andrei Sajarov o al asesinato de Jerzy Popieluszko en Polonia (véase el capítulo segundo). Hubiera sido imposible sufragar una guerra brutal contra Vietnam del Sur y el resto de Indochina, que ha dejado un legado de miseria y destrucción que quizá jamás pueda superarse, si los medios de comunicación no se hubieran sumado a la causa, describiendo una agresión homicida como la defensa de la libertad, abriendo las puertas a las discrepancias tácticas sólo cuando los costes de tal agresión empezaron a ser demasiado altos para los intereses que representaban.

Lo mismo puede decirse de otros de los casos que trataremos y de muchos otros que no mencionaremos.

Desearíamos expresar nuestro agradecimiento por su ayuda en la preparación de este libro a las siguientes personas: James Aronson, Phillip Berryman, Larry Birns, Frank Brodhead, Holly Burkhalter, Donna Cooper, Carol Fouke, Eva Gold, Carol Goslant, Roy Head, Mary Herman, Rob Kirsch, Robert Krinsky, Alfred McClung Lee, Kent MacDougall, Nejat Ozyegin, Nancy Peters, Ellen Ray, William Schaap, Karin Wilkins, Warren Witte y Jamie Young. No obstante, sólo a los autores puede hacerse responsables de su contenido.

1. UN MODELO DE PROPAGANDA

Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática.¹

En los países donde los resortes del poder están en manos de la burocracia estatal —mediante el control monopolístico sobre los medios de comunicación, a menudo complementado por la censura oficial— resulta obvio que dichos medios están al servicio de los fines de una determinada elite. Resulta mucho más difícil advertir la actuación de un sistema propagandístico cuando los medios de comunicación son privados y no existe censura formal; en particular cuando tales medios compiten activamente, atacan y exponen con cierta periodicidad los errores del gobierno y de las corporaciones, y se autocalifican enérgicamente de portavoces de la libertad de expresión y de los intereses generales de la comunidad. Lo que ya no es tan evidente (y sigue sin discutirse en los medios de comunicación), es la naturaleza limitada de tales críticas, así como la inmensa desigualdad de los recursos de que disponen y el efecto que tal desigualdad produce tanto en el acceso a una organización de medios de comunicación privada como en su funcionamiento y actuación.

Un modelo de propaganda pone el énfasis en esta desigualdad

1. Véase nota 4 del prefacio.

de riqueza y poder, así como en los efectos que ésta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas. Se ocupa también de trazar los vericuetos a través de los cuales el dinero y el poder tamizarán las noticias hasta dejarlas listas para su publicación, marginarán las discrepancias y permitirán que el gobierno y los intereses privados dominantes difundan un mensaje adecuado para el público. Los ingredientes esenciales de ese modelo propagandístico o conjunto de nuevos «filtros» se engloban en los siguientes epígrafes: 1) La envergadura, la concentración de propiedad, la riqueza del propietario, y la orientación de los beneficios de las empresas dominantes en el ámbito de los medios de comunicación; 2) la publicidad como fuente principal de ingresos de dichos medios; 3) la dependencia de los medios de la información proporcionada por el gobierno, las empresas y los «expertos», información, por lo demás, financiada y aprobada por esos proveedores principales y por otros agentes del poder; 4) las «contramedidas» y correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de comunicación, y 5) el «anticomunismo» como religión nacional y mecanismo de control. Estos elementos interactúan y se refuerzan entre sí. La materia prima de las noticias debe pasar a través de sucesivos tamices, tras lo cual sólo queda el residuo «expurgado» y listo para publicar. Asimismo estos elementos determinan las premisas del discurso y su interpretación, la definición de lo que es periodístico y digno de publicarse, y exponen las bases y el funcionamiento de todo cuanto concierne a una campaña propagandística.

El dominio de los medios de comunicación por parte de la elite, y la marginación de la disidencia que se deriva de la actuación de los filtros que hemos mencionado, se realiza de una manera tan natural que la gente que trabaja en dichos medios, y que con frecuencia actúa con absoluta integridad y buena voluntad, son capaces de autoconvencerse de que eligen e interpretan las noticias de una manera «objetiva» y sobre la base de unos nuevos valores profesionales. De hecho, dentro de los límites que imponen los filtros que hemos señalado a menudo son objetivos, puesto que las constricciones tienen tanto poder y están integradas en el sistema de una manera tan consustancial que cuesta imaginar unas bases alternativas a partir de las que realizar nuevas elecciones. Al valorar el valor periodístico de las reiteradas afirmaciones del gobierno de los

Estados Unidos, según las cuales el 5 de noviembre de 1984 había tenido lugar un envío de aviones MIG a Nicaragua, los medios de comunicación no se detuvieron a considerar el sesgo inherente a la prioridad que se atribuye a la materia prima que proporciona el gobierno, o la posibilidad de que el gobierno pudiese estar manipulando las noticias² imponiendo su propio orden del día, desviando deliberadamente la atención que pudiera dispensarse a otro material.³

Se necesita una macrovisión, y también una microvisión (asunto por asunto), de las actuaciones de los medios de comunicación para percibir la pauta de manipulación y sesgo sistemático.

Examinemos más pormenorizadamente los principales componentes del modelo de propaganda, que luego aplicaremos y verificaremos en los siguientes capítulos.

2. Los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo que el gobierno dice es «de interés periodístico» por derecho propio. Sin embargo, si las aserciones del gobierno son transmitidas sin contexto ni evaluación, y sin considerar un posible intento de manipulación por parte del gobierno, los propios medios de comunicación habrán permitido ser «dirigidos». Su objetividad es «nominal», no real.

A principios de octubre de 1986, la prensa filtró unos memorándums que indicaban que la administración Reagan había llevado a cabo una deliberada campaña de desinformación para influir en los acontecimientos de Libia. Los medios de comunicación de masas, que aceptaron este material sin hacer preguntas, expresaron una gran y justa indignación por haber sido engañados. Para agravar el absurdo, cinco años antes la prensa había denunciado un «programa de desinformación diseñado para poner en aprietos a Gaddafi y su gobierno» organizado por la CIA, junto a operaciones terroristas para derrocar a Gaddafi y tal vez asesinarlo (*Newsweek*, 3 de agosto de 1981; P. Edward Haley, *Qaddafi and the United States since 1969*, Praeger, Nueva York, 1984, p. 272). Pero no aprendieron la lección. De hecho, a los medios de comunicación se les engaña prácticamente a diario, pero raramente tienen que sufrir la afrenta de documentos gubernamentales que revelen su credulidad. En lo referente a Libia los medios de comunicación se conformaron con las ideas de cada una de las estratagemas propagandísticas, desde los «pelotones de choque» de 1981 hasta la bomba en la discoteca de Berlín, tragándose toda declaración por inverosímil que fuera, sin admitir posteriormente su error, y aparentemente incapaces de aprender de las sucesivas trampas —lo cual sugiere que se trata de errores complacientes. Véase Noam Chomsky, *Pirates & Emperors*, Claremont, Nueva York, 1986, capítulo 3. Tal como mostramos a lo largo del presente libro, una serie de mentiras del gobierno, expuestas sucesivamente, nunca parecen despertar escepticismo en los medios de comunicación con relación a una próxima declaración.

3. Para una descripción sobre la estrategia del gobierno para desviar la atención de las elecciones nicaragüenses mediante la falacia de los MIG, y la colaboración de los medios de comunicación en este programa gubernamental, véase «La crisis de los MIG urdida durante la semana electoral nicaragüense», en el capítulo 3.

1.1. PRIMER FILTRO: MAGNITUD, PROPIEDAD Y ORIENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su análisis de la evolución de los medios de comunicación en el Reino Unido, James Curran y Jean Seaton describen cómo, en la primera mitad del siglo XIX, surgió una prensa radical que encontró audiencia entre la clase obrera del país. Esta prensa alternativa generó un efecto que reforzaba la conciencia de clase: unificó a los trabajadores al propugnar un sistema de valores alternativo y una cosmovisión desde la que analizar el mundo, «promoviendo una enorme confianza colectiva a base de constatar repetidamente el poder potencial de los trabajadores para lograr un cambio social mediante la fuerza de la “unión” y la acción organizada». ⁴ Todo ello fue considerado por la elite dirigente como una gran amenaza. Un miembro del Parlamento llegó a afirmar que los periódicos de la clase obrera «inflamaban las pasiones y despertaban el egoísmo, al contrastar sus condiciones actuales con las que aspiraban a lograr en el futuro, unas condiciones que por lo demás eran incompatibles con la naturaleza humana y con aquellas leyes inmutables que la providencia había establecido para la regulación de la sociedad civil». ⁵ A resultas de ello se produjo un intento de aplastar los medios de comunicación de la clase obrera mediante persecuciones y leyes antilibelo, exigiendo una costosa fianza como condición para su publicación, e imponiendo diversos impuestos con el propósito de asfixiar económicamente a los medios radicales aumentando su coste. Estos esfuerzos coercitivos no surtieron efecto, y a mediados de siglo fueron abandonados en favor del postulado liberal según el cual el mercado impondría formalidad.

Curran y Seaton muestran como, efectivamente, el mercado *logró* lo que la intervención del Estado no había podido conseguir. Tras la abrogación de los impuestos punitivos sobre los periódicos entre 1853 y 1869, nació un nuevo periódico local, pero en todo lo que quedaba de siglo no apareció ningún periódico local para la clase trabajadora. Curran y Seaton señalan que:

4. James Curran y Jean Seaton, *Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain*, Methuen, Londres, 1985², p. 24.

5. Citado en *op. cit.*, p. 23.

De hecho, el eclipse de la prensa radical de la nación fue tan absoluto que cuando el Partido Laborista se desarrolló a partir del movimiento obrero durante la primera década del siglo XX, no obtuvo el respaldo exclusivo ni de un solo diario o dominical de ámbito nacional. ⁶

Una de las razones de peso para ello fue el aumento de escala de la empresa periodística, con el consiguiente e ininterrumpido incremento de los costes de capital a partir de mediados del siglo XIX, a causa de los adelantos tecnológicos y a la creciente presión de los propietarios de dichas empresas por lograr una mayor audiencia. La expansión del mercado libre vino acompañada por una «industrialización de la prensa». En 1837 el coste total de poner en marcha un semanario nacional rentable se cifraba en unas mil libras, lo que suponía a su vez una venta de al menos 6.200 ejemplares para cubrir los costes. En 1867 el coste de salida estimado de un diario londinense era de 50.000 libras. El *Sunday Express*, que apareció en 1918, gastó más de dos millones de libras antes de cubrir costes incluso con una difusión de más de 250.000 ejemplares. ⁷

Otro tanto sucedió en los Estados Unidos, donde en 1851 el coste de salida de un nuevo periódico en Nueva York era de 69.000 dólares. La venta pública del *St. Louis Democrat* en 1872 alcanzó una cifra de 456.000 dólares, y en la década de los años veinte se llegaron a vender periódicos urbanos por cifras que oscilaban entre los seis y los dieciocho millones de dólares. ⁸ Sólo el coste de la maquinaria, aun de los periódicos de menor tirada, supuso durante décadas cifras de cientos de miles de dólares; en 1945 se podía decir ya que «incluso la editora periodística más modesta es un gran negocio ... [y] ya no se trata de una empresa que se pueda acometer a la ligera, ni siquiera disponiendo de un capital sustancial y, por supuesto, en modo alguno si no se dispone de él». ⁹

6. *Op. cit.*, p. 34.

7. *Op. cit.*, pp. 38-39.

8. Alfred McClung Lee, *The Daily Newspaper in America*, Macmillan, Nueva York, 1937, pp. 166-173.

9. Earl Vance, «Freedom of the Press for Whom», *Virginia Quarterly Review* (verano de 1945), citado en *Survival of a Free, Competitive Press: The Small Newspaper: Democracy's Grass Roots*, Informe del Presidente, Senate Small Business Committee, 80 Congreso, I sesión, 1947, p. 54.

Por consiguiente, el primer filtro —la limitación de la propiedad de los medios de comunicación de una magnitud y difusión significativa, por exigir una gran inversión— era ya aplicable desde más de un siglo antes, y con el tiempo se iba haciendo cada vez más importante.¹⁰ En 1986 existían en los Estados Unidos unos 1.500 diarios, 11.000 revistas, 9.000 emisoras de radio y 1.500 de televisión, 2.400 editoriales y 7 estudios cinematográficos, en total, unos 25.000 medios de comunicación. Buena parte en ellos, empero, son meros difusores de noticias de ámbito local y escasa tirada, que dependen de las grandes compañías nacionales y de las agencias que suministran información por teletipo o procedimientos afines para todo lo que no sean noticias de ámbito local. En su mayor parte pertenecen a un propietario común, que muchas veces abarca todas las modalidades de medios de comunicación.¹¹

Ben Bagdikian señala que pese al gran número de medios de comunicación existentes, las veintinueve grandes organizaciones de estos medios dan cuenta de más de la mitad de la producción de periódicos, y de la mayoría de ventas y audiencias de las revistas, emisoras, libros y películas. Afirma también que «constituyen un nuevo Ministerio Privado de Información y Cultura», que puede conformar el orden del día nacional.¹²

De hecho, al sugerir la autonomía de los medios de comunicación con respecto al poder del gobierno y de las corporaciones (algo, a nuestro entender, incompatible con la realidad estructural, como luego mostraremos), Bagdikian puede señalar también el verdadero grado de concentración existente en la fabricación de noticias. Desde hace tiempo es sobradamente conocida la estratificación de los medios de comunicación, con un estrato superior —que se mide por el prestigio, los recursos y la difusión— en el que se

10. Téngase en cuenta que hablamos de medios con un alcance substancial: medios de comunicación de masas. Siempre ha sido posible lanzar periódicos de poca circulación y producir boletines ciclostilados o fotocopiados y hacerlos llegar a un público reducido. Pero en Estados Unidos es típico que incluso los periódicos pequeños sobrevivan sólo gracias a las contribuciones de ricos ángeles financieros.

11. En 1987, la Times-Mirror Company, por ejemplo, poseía periódicos en Los Ángeles, Baltimore, Denver y Hartford, Connecticut, tenía sucursales que editaban libros y publicaban revistas, y era propietaria de sistemas de televisión por cable y de siete emisoras de televisión.

12. Ben Bagdikian, *The Media Monopoly*, Beacon Press, Boston, 1987², p. 16.

encuentran de diez a veinticuatro organizaciones.¹³ Es este estrato superior, junto al gobierno y a los servicios informativos por teletipo, quien define el orden del día y proporciona la mayoría de noticias nacionales e internacionales a los estratos inferiores de los medios de comunicación, y por ende al público en general.¹⁴ La centralización de este estrato superior se ha incrementado de manera substancial con el auge de la televisión y de su red nacional acaecida tras la segunda guerra mundial. Los mercados de noticias anteriores a la televisión eran locales, aunque dependían en gran medida de los altos estratos y de un reducido número de fuentes para las noticias nacionales e internacionales. Las emisoras televisivas proporcionan la información nacional e internacional a partir de tres fuentes nacionales; por otro lado, la televisión es actualmente el principal proveedor de noticias del público.¹⁵ No obstante, la

13. David L. Paletz y Robert M. Entman, *Media. Power. Politics*, Free Press, Nueva York, 1981, p. 7; Stephen Hess, *The Government/Press Connection: Press Officers and Their Offices*, Brookings, Washington, 1984, pp. 99-100.

14. Las cuatro principales agencias de información occidentales —Associated Press, United Press International, Reuters y Agence France Presse— dan cuenta de un 80 por 100 de las noticias que hoy circulan por el mundo. AP es propiedad de periódicos; UPI es de propiedad privada; Reuters era principalmente propiedad de los medios de comunicación británicos hasta que vendió acciones en 1984, pero el control fue mantenido por los propietarios originales al otorgar inferiores derechos de voto a los nuevos accionistas; la Agence France Presse está fuertemente subvencionada por el gobierno francés. Como señaló Jonathan Fenby, los servicios de las agencias «existen para servir a los mercados», y por consiguiente, se preocupan primordialmente «por los ricos medios de comunicación de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y cada vez más por la comunidad financiera». Compiten encarnizadamente, pero AP y UPI son en realidad empresas estadounidenses que operan a escala internacional... Sin una base nacional, AP y UPI no podrían operar como agencias internacionales. Por eso tienen que ser organizaciones estadounidenses, sujetas a presiones y requerimientos estadounidenses» (*The International News Services*, Schocken, Nueva York, 1986, pp. 7, 9, 73-74). Véase también Anthony Smith, *The Geopolitics of Information: How Western Culture Dominates the World*, Oxford University Press, Nueva York, 1980, capítulo 3.

15. El decimocuarto informe anual Roper, «Public Attitudes toward Television and Other Media in a Time of Change» (mayo de 1985), indica que en 1984, el 64 por 100 del muestreo mencionó a la televisión como el lugar «donde usualmente obtenía la mayor parte de las noticias sobre lo que ocurre hoy en el mundo...» (p. 3). Se ha advertido a menudo que las cadenas de televisión dependen en gran medida de prestigiosos periódicos, de las agencias de información y del gobierno para seleccionar sus noticias. Su autonomía como productores de noticias puede ser exagerada fácilmente.

mayoría de edad de la televisión por cable ha provocado una fragmentación de la audiencia televisiva y una lenta erosión del segmento de mercado y del poder de las emisoras televisivas.

El cuadro 1.1 proporciona alguna información financiera básica de los veinticuatro gigantes de los medios de comunicación (o de las compañías matrices que los controlan) que forman el estrato superior de las empresas de medios de comunicación de los Estados Unidos.¹⁶ El recuento incluye: 1) las tres cadenas de televisión: ABC (a través de su propietario, Capital Cities), CBS y NBC (a partir de su propietario último, General Electric, GE); 2) los imperios compuestos por los principales periódicos: *New York Times*, *Washington Post*, *Los Angeles Times* (Times-Mirror), *Wall Street Journal* (Dow Jones), Knight-Ridder, Gannett, Hearst, Scripps-Howard, Newhouse (Advance Publications), y el Tribune Company; 3) las revistas de actualidad y de interés general más importantes: *Time*, *Newsweek* (incluida en el *Washington Post*), *Reader's Digest*, *TV Guide* (Triangle), el *U.S. News & World Report*; 4) uno de los principales editores de libros (McGraw-Hill); y 5) los sistemas de televisión por cable de creciente importancia: los de Murdoch, Turner, Cox, General Corp., Taft, Storer,¹⁷ y el Group W (Westinghouse). La mayor parte de estas organizaciones descollan en más de un campo y están arbitrariamente situadas en una categoría determinada (Time, Inc., es muy importante en la televisión por cable, así como en la publicación de revistas; McGraw-Hill es uno de los principales editores de revistas; la Tribune Company se ha convertido en una gran potencia en el campo de la televisión así como en el de los periódicos; Hearst es importante tanto en periódicos como en revistas, y Murdoch posee intereses significativos en periódicos, en televisión y en *holdings* de películas).

16. Los miembros del estrato superior satisfacen los requisitos de amplitud de audiencia, de importancia estableciendo nuevos estándares, y de activo y beneficios totales. La última media docena de nuestros veinticuatro suponen una cierta arbitrariedad en la selección, aunque la amplitud de la audiencia sigue siendo nuestro criterio fundamental. McGraw-Hill está incluido por su fuerza conjunta en el negocio de libros y revistas de contenido y alcance político.

17. Tal como se cita en el cuadro 1.1, nota 7, Storer pasó al control temporal de la firma de valores Kohlberg Kravis Roberts & Co. en 1985. Puesto que su destino último estaba poco claro en el momento de escribir este libro, y los datos financieros ya no eran disponibles después de 1984, hemos mantenido a Storer en el cuadro y lo inscribimos aquí, a pesar de su incierto *status*.

Estas veinticuatro empresas son enormes, son corporaciones con ánimo de lucro y pertenecen y están bajo el control de grandes fortunas. En el cuadro 1.1 podemos ver que todas las compañías importantes de las que se puede obtener información —excepto una— poseen un activo que supera los mil millones de dólares, siendo la media dos mil seiscientos millones de dólares. El cuadro muestra también que aproximadamente tres cuartas partes de estos gigantes de los medios de comunicación tienen beneficios (descontando impuestos y tasas fiscales) que superan los cien millones de dólares, con un promedio de ciento ochenta y tres millones.

CUADRO 1.1

Datos financieros de las veinticuatro empresas de medios de comunicación más importantes (o de sus casas matrices, diciembre de 1986)

Empresa	Ingresos totales (millones \$)	Beneficios sin descontar impuestos (millones \$)	Beneficios descontando impuestos (millones \$)	Beneficios totales (millones \$)
Advance Publication (Newhouse) ¹	2.500	ND	ND	2.200
Capital Cities/ABC	5.191	688	448	4.124
CBS	3.370	470	370	4.754
Cox Communications ²	1.111	170	87	743
Dow Jones & Co.	1.236	331	183	1.135
Gannett	3.365	540	276	2.801
General Electric (NBC)	34.591	3.689	2.492	36.725
Hearst ³	4.040	ND	215 (1983)	2.100 (1983)
Knight-Ridder	1.947	267	140	1.911
McGraw-Hill	1.463	296	154	1.577
News Corp. (Murdoch) ⁴	8.460	377	170	3.822
New York Times	1.405	256	132	1.565
Reader's Digest ⁵	ND	75-100 (1985)	ND	1.400 (1985)
Scripps-Howard ⁶	ND	ND	ND	1.062
Storer ⁷	1.242	68	(-17)	537
Taft	1.257	(-11)	(-53)	500

Empresa	Ingresos totales (millones \$)	Beneficios sin descontar impuestos (millones \$)	Beneficios descontando impuestos (millones \$)	Beneficios totales (millones \$)
Time, Inc.	4.230	626	376	3.762
Times-Mirror	2.929	680	408	2.948
Triangle ⁸	ND	ND	ND	730
Tribune Co.	2.589	523	293	2.030
Turner Broadcastiug U.S. News & World Report ⁹	1.904	(— 185)	(— 187)	570
Washington Post	200+	ND	ND	140
Westinghouse	1.145	205	100	1.215
	8.482	801	670	10.731

ND = Datos no disponibles.

1. Los ingresos totales los hemos extraído del total del potencial económico de la familia Newhouse en 1985, publicado en la revista *Forbes*. Los beneficios totales se refieren solamente a los obtenidos por sus medios de comunicación, según información publicada en *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

2. La empresa Cox Communications fue de propiedad pública hasta 1985, año en el que se fusionó con otra empresa de la familia Cox, la Cox Enterprises. Los datos aquí expuestos pertenecen al balance de 1984, último año en que fue de propiedad pública y se dio a conocer información financiera relevante.

3. Datos recogidos en «Citizens Rich», de William Barret, *Forbes*, 14 de diciembre de 1987.

4. Estas cifras son en dólares australianos y corresponden al 30 de junio de 1986; en aquel momento el dólar australiano se cotizaba a 68/100 de un dólar estadounidense.

5. Datos de 1985, publicados en el *New York Times*, 9 de febrero de 1986.

6. Beneficios que se refieren únicamente a las ventas obtenidas por los medios de comunicación, según consta en *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

7. Storer pasó al control de la Kohlberg Kravis Roberts & Co., de Wall Street, en 1985. Los datos expuestos aquí pertenecen a diciembre de 1984, último período de autonomía de Storer y última vez que se puso información a disposición del público.

8. Beneficios que se refieren únicamente a las ventas obtenidas por los medios de comunicación, según el *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

9. Ingresos totales de 1985-1986, según el artículo «Mort Zuckerman, Media's New Mogul», publicado en la revista *Fortune*, 14 de octubre de 1985. Beneficios totales publicados en *Advertising Age*, 28 de junio de 1987.

Muchas de las grandes empresas de medios de comunicación están totalmente integradas en el mercado: las restantes son también objeto de fuertes presiones por parte de accionistas, directores y banqueros para que se concentren en cuestiones secundarias o poco comprometidas. Estas presiones se han intensificado en las últimas décadas, puesto que las acciones de los medios de comunicación se han convertido en las favoritas del mercado; por otro lado, quienes de manera real o potencial poseen bienes televisivos o periodísticos pueden capitalizar el incremento de los niveles de audiencia y los ingresos publicitarios convirtiéndolos en valores que multiplican la imagen de marca de los medios de comunicación, y les proporcionan abundantes riquezas.¹⁸ Ello ha estimulado la participación de los especuladores y ha incrementado la presión y la tentación de centrarse intensivamente en la rentabilidad. Las familias propietarias han visto aumentar las divergencias entre aquellos que desean aprovecharse de las nuevas oportunidades y quienes desean mantener el control familiar; con frecuencia sus disensiones han precipitado crisis que han acabado finalmente con la venta de los intereses familiares.¹⁹

18. John Kluge, tras haber comprado en 1984 el sistema Metromedia en una ventajosa opción de compra por 1.100 millones de dólares, liquidó varias partes de este sistema en 1985-1986 por 5.500 millones de dólares, obteniendo un beneficio personal de unos 3.000 millones (Gary Hector, «Are Shareholders heated by LBOs», *Fortune*, 17 de enero de 1987, p. 100). La emisora KDLA-TV de Los Ángeles, que en 1983 fue comprada por un grupo ajeno al sector en una ventajosa opción de compra por 245 millones de dólares, fue vendida a la Tribune Company por 510 millones dos años después (Richard Stevenson, «Tribune in TV Deal for \$510 Million», *New York Times*, 7 de mayo de 1985). Véase también «The Media Magnates: Why Huge Fortunes Roll Off the Presses», *Fortune* (2 de octubre de 1987).

19. Una escisión entre los herederos de James E. Scripps tuvo como resultado final la venta del *Detroit Evening News*. Según un artículo, «Daniel Marentette, miembro de la familia Scripps y que se define a sí mismo como «accionista descontento», dice que los miembros de la familia quieren un mejor interés para su dinero. «Obtenemos mejores rendimientos invirtiendo en una cuenta corriente de Nueva York», dice Mr. Marentette, el cual vende caballos de carreras» (Damon Darlin, «Takeover Rumors Hit Detroit News Parent», *Wall Street Journal*, 18 de julio de 1985). La escisión de la familia Bingham sobre estas cuestiones condujo a la venta del *Louisville Courier-Journal*; los periódicos de New Haven de la familia Jackson se vendieron tras años de riñas, y «el precio de venta (de dichos periódicos), 185 millones de dólares, sólo ha servido para divulgar el valor potencial de la posesión familiar de los periódicos familiares en otros sitios» (Geraldine Fabrikant, «Newspaper Properties, Hotter Than Ever», *New York Times*, 17 de agosto de 1986).

Esta tendencia hacia una mayor integración de los medios de comunicación en el sistema de mercado se ha acelerado con la desaparición de las normas que limitaban la concentración de los medios, la propiedad cruzada y el control por parte de compañías ajenas a los mismos.²⁰ Asimismo se han abandonado las restricciones —bastante débiles anteriormente— acerca de la publicidad en radio y televisión, la programación de espectáculos incompletos y las amenazas de la «doctrina de la imparcialidad», dejando el campo libre al uso comercial desenfrenado de las ondas.²¹

La mayor rentabilidad de los medios de comunicación en un entorno exento de regulaciones ha llevado asimismo a un incremento de absorciones y de amenazas de absorción, incluso entre gigantes como la CBS y Time, Inc., directamente atacados o amenazados. Esto ha forzado a los gestores de los gigantes de los medios de comunicación a contraer mayores deudas y a centrarse aún más agresiva e inequívocamente en la rentabilidad, a fin de aplacar a los

20. La administración Reagan estrechó el control sobre los titulares existentes de licencias de emisoras de televisión incrementando la duración de éstas de tres a cinco años, y su Federal Communications Commission (FCC) hizo que la renovación de dichas licencias fuera prácticamente automática. La FCC también facilitó en gran medida la especulación y el comercio de propiedades televisivas mediante la reducción del período de titularidad requerido para vender propiedades de reciente adquisición de tres años a uno.

La FCC y el Departamento de Justicia de la era Reagan también rechazaron impugnar las fusiones y las tentativas de adquisición que aumentarían significativamente la concentración de poder (GE-RCA) o la concentración de medios de comunicación (Capital Cities-ABC). Además, a partir del 2 de abril de 1985, los propietarios de medios de comunicación pudieron poseer hasta doce emisoras de televisión, mientras su audiencia total no excediera el 25 por 100 de los receptores de televisión de la nación; y también pudieron tener doce emisoras de FM y doce de onda media, cuando la «norma 7-7-7» de 1953 fue sustituida por la «norma 12-12-12». Véase Herbert H. Howard, «Group and Cross-Media Ownership of Television Stations: 1985», National Association of Broadcasters, Washington, 1985.

21. Mark Fowler, presidente de la FCC en la era Reagan, lo justificó alegando que las opciones del mercado se están abriendo y que el público debe tener libertad de elección. Criticado por Fred Friendly por abolir el criterio de interés público de la ley, Fowler replicó que Friendly «desconfía de la capacidad del público para tomar decisiones propias por medio del mecanismo del mercado. Yo no» (Jeanne Sandler, «Clear Channel: Broadcast Takeovers Meet Less FCC Static, and Critics Are Upset», *Wall Street Journal*, 2 de junio de 1985). Entre otros problemas, Fowler ignora el hecho de que la verdadera libertad de elección implica la posibilidad de seleccionar opciones que no pueden ser ofrecidas por un oligopolio que vende audiencias a los anunciantes.

propietarios y reducir el atractivo que sus bienes tienen para los intrusos.²² Han cedido parte de su limitada autonomía en favor de los banqueros, los inversores institucionales y grandes inversionistas particulares a los que han tenido que implorar en su calidad de «paladines blancos».²³

Mientras que las acciones de la gran mayoría de las principales empresas de medios de comunicación se negocian en los mercados de valores, aproximadamente las dos terceras partes de estas compañías están rigurosamente dominadas o controladas por miembros de las familias que las crearon, que conservan gran número de acciones. Esta situación está en proceso de cambio en la medida que se difumina la propiedad familiar entre un gran número de herederos y que las oportunidades del mercado para la venta de los bienes de medios de comunicación siguen mejorando. Con todo, la persistencia del control familiar es evidente, según los datos que se muestran en el cuadro 1.2, en el que asimismo podemos ver la enorme riqueza que poseen las familias que controlan las principales empresas de medios de comunicación. En siete de estas veinticuatro empresas, el valor de mercado de los bienes en poder de las

22. En 1985, la CBS incrementó su deuda en más o menos 1.000 millones de dólares para financiar la adquisición del 2 por 100 de sus propias acciones, con el objeto de repeler una tentativa de adquisición de Ted Turner. El *Wall Street Journal* señaló que «con una deuda que alcanza el 60 por 100 de su capital, necesita mantener altos los ingresos publicitarios para reembolsar los préstamos y el interés» (Peter Barnes, «CBS Profit Hinges on Better TV Ratings», 6 de junio de 1986). Debido al lento crecimiento de los ingresos publicitarios, la CBS emprendió una reducción de plantilla que alcanzó a seiscientos miembros de la división televisiva, la mayor de CBS desde la pérdida de la publicidad de cigarrillos en 1971 (Peter Barnes, «CBS Will Cut up to 600 Posts in Broadcasting», *Wall Street Journal*, 1 de julio de 1986). En junio de 1986, Time, Inc., emprendió un programa para recomprar hasta 10 millones de acciones, o el 16 por 100 de su capital social, con un coste estimado de unos 900 millones de dólares, de nuevo con el propósito de reducir la amenaza de una adquisición hostil (Laura Landro, «Time Will Buy as Much as 16 % of Its Common», *Wall Street Journal*, 20 de junio de 1986).

23. En respuesta a las amenazas de Jesse Helms y Turner contra la CBS, Lawrence Tisch, de la Loews Corporation, fue alentado a aumentar su participación en el capital social de la CBS, que ya era de un 11,7 por 100. En agosto de 1986, la participación de Loews alcanzó el 24,9 por 100, y Tisch obtuvo una posición de control virtual. De acuerdo con William Paley, que poseía el 8,1 por 100 de las acciones, el director ejecutivo de la CBS fue destituido y el propio Tisch tomó posesión del cargo, de forma provisional (Peter Barnes, «Loews Increases Its Stake in CBS to Almost 25 %», *Wall Street Journal*, 2 de agosto de 1986).

CUADRO 1.2

Potencial económico de los grupos mayoritarios de las veinticuatro empresas más importantes de medios de comunicación (o de sus casas matrices, febrero de 1986)

Empresa	Familia o grupo mayoritario	Porcentaje de acciones propiedad del grupo mayoritario	Valor de las acciones del grupo mayoritario (millones \$)
Advance Publications	Fam. Newhouse	Prácticamente total	2.200 ^F
Capital Cities	Funcionarios y directores (FD)	20,7 (Warren Buffett, 17,8)	711 ^P
CBS	FD	20,6 ¹	551 ^P
Cox Communications	Fam. Cox	36	1.900 ^F
Dow Jones & Co.	Fam. Bancroft-Cox	54	1.500 ^P
Gannett	FD	1,9	95 ^P
General Electric	FD	Inferior a 1	171 ^P
Hearst	Fam. Hearst	33	1.500 ^F
Knight-Ridder	Fam. Knight y Ridder	18	447 ^P
McGraw-Hill	Fam. McGraw	c.20	450 ^F
News Corp.	Fam. Murdoch	49	300 ^F
New York Times	Fam. Sulzberger	80	450 ^F
Reader's Digest	Estado de Wallace gestionada por trust, sin beneficiarios personales	ND	ND
Scripps-Howard	Herederos Scripps	ND	1.400 ^F
Storer	FD	8,4	143 ^P
Taft	FD	4,8	37 ^P
Time, Inc.	FD	10,7 (Luce 4,6, Temple 3,2)	406 ^P
Times-Mirror Triangle	Chandlers Annenbergs	35 Prácticamente total	1.200 ^P 1.600 ^F

Empresa	Familia o grupo mayoritario	Porcentaje de acciones propiedad del grupo mayoritario	Valor de las acciones del grupo mayoritario (millones \$)
Tribune Co.	Hered. McCormick	16,6	273 ^P
Turner Broadcasting	Turner	80	222 ^P
U.S. News & World Report	Zuckerman	Prácticamente total	176 ²
Washington Post	Familia Graham	50+	350 ^F
Westinghouse	FD	Inferior a 1	42 ^P

FUENTES: P significa procedente de fuentes autorizadas por la empresa, y calculando el valor accionarial según la cotización de febrero de 1986; F significa procedente de la valoración anual que la revista *Forbes* efectúa del potencial económico de los poderosos.

1. Estos *holdings* incluyen el 8,1 de William Paley y un 12,2 por 100 de Laurence Tisch, mediante una inversión efectuada por Loews. Durante ese mismo año, Lowes incrementó su inversión hasta un 29,4 por 100, y así, Laurence Tisch se convirtió en un destacado funcionario ejecutivo.

2. Este es el precio pagado por Zuckerman cuando compró *U.S. News* en 1984. Véase, de Gwen Kinkead, «Mort Zuckerman, Media's New Mogul» publicado en *Fortune*, el 14 de octubre de 1985, p. 196.

familias que las controlaban excedía, a mediados de los ochenta, los mil millones de dólares, y el valor medio se aproximaba a los quinientos millones de dólares.²⁴ Evidentemente estos grupos de control gozan de una posición especial en el *statu quo* en virtud de su riqueza y de su situación estratégica en una de las grandes instituciones de la sociedad. Y ejercitan el poder que les confiere esta situación estratégica, por lo menos estableciendo los objetivos generales de la empresa y eligiendo a sus máximos dirigentes.²⁵

24. Se trataría de ocho empresas si incluyéramos los bienes de Lila Wallace, que falleció en 1984, encomendando su participación mayoritaria en el capital de *Reader's Digest* a los administradores de dicha entidad.

25. Tal como citamos en el prefacio, los neoconservadores aluden regularmente al dominio «liberal» de los medios de comunicación, suponiendo o pretendiendo que los subordinados son los que toman las decisiones, y no la gente que posee o

Los grupos de control de los gigantes de los medios de comunicación han establecido estrechas relaciones con la flor y nata de la comunidad empresarial, a través de sus juntas directivas y los vínculos sociales. En el caso de las empresas de televisión y sistemas por cable NBC y Group W, sus respectivas empresas matrices (General Electric y Westinghouse), son a su vez grandes gigantes empresariales, cuyos consejos de administración están dominados por ejecutivos empresariales y bancarios. Muchas de las restantes grandes empresas de medios de comunicación tienen consejos de administración compuestos fundamentalmente por personal de la casa, característica generalizada entre las compañías relativamente pequeñas y dominadas por su propietario. Cuanto mayor es la empresa y mayor la distribución de las acciones, mayor es el número y la proporción de directivos foráneos. Las características de estos directivos foráneos de los gigantes de los medios de comunicación son muy similares a las de otras grandes empresas de otros ámbitos. El cuadro 1.3 muestra que los ejecutivos empresariales y los banqueros en activo suman todos juntos algo más de la mitad del total de directores foráneos de los diez gigantes de los medios de comunicación; los abogados y los ejecutivos empresariales y bancarios jubilados (que suman nueve de los trece que figuran como tales) hacen que el total de directores foráneos ascienda hasta unos dos tercios del total. Estas 95 personas tienen asimismo cargos directivos en otros 36 bancos y 255 compañías (además de las empresas de medios de comunicación y de sus propias empresas a las que están principalmente vinculados).²⁶

Además de estas vinculaciones entre los consejos de administración, todas las grandes empresas de medios de comunicación nego-

controla los medios de comunicación. Estos datos, que muestran la posición de riqueza de los propietarios de los medios de comunicación, son algo que comprensiblemente prefieren ignorar. A veces, no obstante, los neoconservadores se vuelven «populistas», y —financiados por la Mobil Oil Corporation y Richard Mellon Scaife— pretenden estar hablando en nombre de las masas en oposición a una adinerada élite que domina los medios de comunicación. Para una discusión más amplia, véase el análisis de Edward S. Herman de *The Spirit of Democratic Capitalism*, «Michael Novak's Promised Land: Unfettered Corporate Capitalism», *Monthly Review*, octubre de 1983, y las obras citadas en el prefacio, nota 3.

26. Se encuentran resultados similares en Peter Dreier, «The Position of the Press in the U.S. Power Structure», *Social Problems* (febrero de 1982), pp. 298-310.

CUADRO 1.3

*Filiación de los directores foráneos de diez de las grandes empresas de medios de comunicación (o sus casas matrices, en 1986)**

Filiación principal	Número	Porcentaje
Ejecutivo empresarial	39	41,1
Abogado	8	8,4
Jubilado (antiguo ejecutivo empresarial o banquero)	13 (9)	13,7 (9,5)
Banquero	8	8,4
Asesor	4	4,2
Organización sin ánimo de lucro	15	15,8
Otros	8	8,4
TOTAL	95	100,0
<i>Otras relaciones</i>		
Otros directivos (de banco)	255 (36)	
Antiguos funcionarios del gobierno	15	
Miembros del Council on Foreign Relations	20	

* Dow Jones & Co.; *Washington Post*; *New York Times*; *Time*, Inc.; CBS; Times-Mirror; Capital Cities; General Electric; Gannet, y Knight Ridder.

cion con banqueros e inversionistas comerciales; logran así líneas de crédito y préstamos, recibos, asesoría y servicios en la venta de acciones y obligaciones, y también respecto de las oportunidades de compra y las amenazas de absorción. Por su parte los bancos y otros inversionistas institucionales poseen grandes partidas de acciones de los medios de comunicación. A principios de la década de los ochenta, tales instituciones dominaban el 44 por 100 de las acciones de los periódicos de propiedad pública y el 35 por 100 de las acciones de las compañías de radiodifusión también de propiedad pública.²⁷ Con frecuencia estos inversionistas se cuentan tam-

27. Benjamin Compaine *et al.*, *Anatomy of the Communications Industry: Who Owns the Media?*, Knowledge Industry Publications, White Plains, N.Y., 1982, p. 463.

bién entre los mayores accionistas de las empresas privadas. Por ejemplo, en 1980-1981 el Capital Group, una organización de empresas inversionistas, controlaba el 7,1 por 100 de las acciones de la ABC, el 6,6 por 100 de Knight-Ridder, el 6 por 100 de Time, Inc., y el 2,8 por 100 de Westinghouse.²⁸ Estos *holdings* o compañías tenedoras de acciones, individual y colectivamente, no ostentan el control, si bien estos grandes inversionistas pueden hacer oír su voz, y sus acciones pueden afectar el bienestar de las empresas y de sus directivos.²⁹ Si éstos no consiguen emprender acciones que favorezcan las ganancias de los accionistas, los inversionistas institucionales tenderán a vender las acciones (devaluando su precio), o escucharán con agrado los proyectos de absorción que otros les presenten. Estos inversionistas son una fuerza que contribuye a que las empresas de medios de comunicación se orienten hacia unos objetivos (rentabilidad) estrictamente de mercado.

De ahí la diversificación y la difusión geográfica de las grandes empresas de medios de comunicación. La mayoría de ellas se han diversificado fuera de su campo de acción específico, hacia otros sectores en crecimiento. Muchas de las antiguas empresas de medios de comunicación que trabajaban fundamentalmente en la prensa, temerosas del poder de la televisión y de sus efectos sobre los beneficios devengados por la publicidad, se han incorporado tan rápidamente como les ha sido posible a la radiodifusión y a la televisión por cable. También la Time, Inc., ha efectuado una gran diversificación incorporándose a la televisión por cable, que actualmente representa más de la mitad de sus beneficios. Sólo una pequeña minoría de las veinticuatro principales empresas de medios de comunicación permanecen en un único sector.³⁰

Asimismo estas grandes empresas se han diversificado en otros sectores ajenos a los medios de comunicación, y compañías de estos otros sectores han establecido a su vez una fuerte presencia en tales

28. *Op. cit.*, pp. 458-460.

29. Véase Edward S. Herman, *Corporate Control, Corporate Power*, Cambridge University Press, Nueva York, 1981, pp. 26-54.

30. Sobre los intereses de quince principales empresas periodísticas en otros campos de los medios, y una lista de verificación de otros sectores en los que participan destacadas firmas de la variada industria de los medios de comunicación, véase Compaine, *Anatomy of the Communications Industry*, cuadros 2.19 y 8.1, pp. 11 y 452-453.

medios. Entre estas últimas las más importantes son General Electric, propietaria de la RCA, que a su vez posee la NBC, y Westinghouse, a la que pertenecen importantes emisoras de televisión, televisión por cable, y de radio. Tanto General Electric como Westinghouse son empresas multinacionales, enormes y diversificadas, estrechamente vinculadas a los controvertidos sectores de la industria de armamentos y la energía nuclear. Cabe recordar aquí que de 1965 a 1967 la International Telephone and Telegraph (ITT) se propuso comprar la ABC, y que dicho intento se vio frustrado tras enormes protestas que se centraron en los peligros que representaba permitir que una gran empresa multinacional, con importantes inversiones en el extranjero y gran actividad comercial, controlase la producción de una gran empresa de medios de comunicación.³¹ El temor era que el control por parte de la ITT «pudiese comprometer la independencia de las informaciones de la ABC, especialmente las referidas a los acontecimientos políticos que ocurriesen en países en los que la ITT tenía intereses».³² La firmeza de la decisión que desautorizaba esta adquisición parece haber quedado justificada por posteriores revelaciones sobre los sobornos políticos efectuados por la ITT y su implicación en las intenciones de derrocar el gobierno chileno. Sin embargo, mucho antes del caso de la ITT, a empresas como la RCA y Westinghouse se les permitió controlar empresas de medios de comunicación, aunque algunas de las objeciones aplicables a la ITT parecen ser asimismo aplicables a éstas. General Electric es una empresa más poderosa que la ITT, con un amplio alcance internacional, profundamente comprometida en el negocio de la energía nuclear, y bastante más importante que la ITT por lo que se refiere a la industria armamentística. Se trata de una organización altamente centralizada y bastante secreta, pero con una larga carrera en decisiones «políticas».³³ General Electric ha contribuido a la financiación del American Enterprise Institute, fundación intelectual de derechas que apoya a los intelectuales que propagan por el mun-

31. La fusión había sido autorizada por la FCC, pero fue obstaculizada mediante la intervención del Departamento de Justicia. Véase «A Broken Engagement for ITT and ABC», *Business Week* (6 de enero de 1967).

32. *Op. cit.*

33. Sobre las enormes y efectivas operaciones de cabildeo de GE, véase Thomas B. Edsall, «Bringing Good Things to GE: Firm's Political Savvy Scores in Washington», *Washington Post* (3 de abril de 1985).

do los mensajes empresariales. Con la compra de la ABC, la General Electric se encuentra en una posición privilegiada para asegurarse de que sus razonables puntos de vista reciben la adecuada atención.³⁴ La falta de protestas por su absorción de la RCA y la NBC se debió en parte a que el control de la primera sobre la segunda había cruzado ya el umbral de la separación, pero refleja asimismo el ambiente más favorable a los negocios y al *laissez-faire* propio de la era Reagan.

Los intereses no relacionados con los medios de comunicación de las grandes empresas de este sector no son muy elevados, y si exceptuamos la General Electric y la Westinghouse, representan tan sólo una pequeña fracción de sus beneficios totales. Sin embargo su alcance multinacional es más significativo. Todas las cadenas de televisión y los grupos de presión vinculados con éstas, las grandes revistas de actualidad y los estudios cinematográficos mantienen importantes relaciones comerciales en el extranjero, y una parte substancial de sus beneficios procede de las ventas al exterior y de sus operaciones con filiales de otros países. El *Reader's Digest* se publica en diecisiete idiomas y se distribuye en más de ciento sesenta países. El imperio Murdoch es originario de Australia, la empresa matriz sigue siendo australiana, y su expansión en los Estados Unidos se financia con los beneficios obtenidos en Australia y su filial británica.³⁵

Otra importante relación estructural es la dependencia y vinculación de las empresas de medios de comunicación con el gobierno. Las empresas y cadenas de radio y televisión necesitan autorizaciones y concesiones del gobierno, por lo cual están sometidas potencialmente al control y al acoso de éste. Esta dependencia técnica legal ha sido utilizada como herramienta para disciplinar a los medios, ya que si sus políticas se apartan con demasiada frecuencia de

34. El tantas veces citado chiste de A. J. Liebling —que si no te gusta lo que dice tu periódico eres perfectamente libre de lanzar el tuyo propio o de comprar uno— subrayaba la impotencia del personal. No obstante, en un clima político tan favorable como el proporcionado por la administración Reagan, una empresa gigantesca insatisfecha con la actuación de la prensa, puede comprar el suyo, como demostró con su ejemplo GE.

35. Allan Sloan, «Understanding Murdoch —The Numbers Aren't What Really Matters», *Forbes* (10 de marzo de 1986), pp. 114 y ss.

la orientación del *establishment* pueden activar esta amenaza.³⁶ Ante esta contingencia, los medios se protegen mediante los grupos de presión y otros procedimientos políticos, así como mediante el cultivo de las relaciones y la cautela política. Los vínculos políticos de los medios de comunicación son impresionantes. El cuadro 1.3 muestra cómo quince de los noventa y cinco directores foráneos de diez de los gigantes de los medios de comunicación son antiguos funcionarios del gobierno, proporción similar a la que da Peter Dreier en su estudio de los periódicos más importantes.³⁷ Por lo que se refiere a la televisión, el intercambio constante de personal entre reguladores y empresas reguladas fue masivo durante los años en los que se estableció la estructura oligopólica de los medios de comunicación y de las diversas cadenas.³⁸

Los grandes medios de comunicación dependen asimismo del apoyo político general del gobierno. Todas las empresas están interesadas en los impuestos comerciales, los tipos de interés, las políticas de empleo y el reforzamiento o no de las leyes *antitrust*. La General Electric y Westinghouse dependen de las subvenciones del gobierno para sus programas de investigación y desarrollo tanto de la energía nuclear como de tecnología militar y también para la creación de un ambiente favorable a su comercio exterior. El *Reader's Digest*, *Time*, *Newsweek* y los grupos suministradores de películas y de programas televisivos dependen asimismo del apoyo diplomático a su derecho de

36. Sobre la campaña de Nixon y Agnew para intimidar a los medios de comunicación mediante ataques publicitarios y amenazas, véase Marilyn Lashner, *The Chilling Effect in TV News*, Praeger, Nueva York, 1984. Lashner llegó a la conclusión de que la tentativa de Nixon desde la Casa Blanca para acallar los medios de comunicación «triunfó con facilidad, al menos en lo concerniente a la televisión ...» (p. 167). Véase también Fred Powledge, *The Engineering of Restraint: The Nixon Administration and the Press*, Public Affairs Press, Washington, 1971, y William E. Porter, *Assault on the Media: The Nixon Years*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1976.

37. De los 290 directores de su muestreo de grandes periódicos, treinta y seis tenían puestos de alto nivel —en el pasado o en la actualidad— en el gobierno federal (Dreier, «The Position of the Press», p. 303).

38. Un estudio mostró que de los sesenta y cinco comisionados y cargos de alto nivel que abandonaron la FCC entre 1945 y 1970, doce habían estado en el sector privado de la comunicación antes de trabajar en la FCC, y treinta y cuatro entraron al servicio de firmas privadas tras abandonar la comisión (Roger Noll *et al.*, *Economic Aspects of Television Regulation*, Brookings, Washington, 1973, p. 123).

penetrar en culturas extranjeras con los valores y mensajes comerciales estadounidenses, así como con su interpretación de la actualidad. Los gigantes de los medios de comunicación, las agencias de publicidad y las grandes empresas multinacionales tienen un marcado y colectivo interés en lograr un clima favorable a sus inversiones en el Tercer Mundo, de ahí que sus interconexiones y relaciones con el gobierno respecto de estas políticas sean simbióticas.³⁹

En resumen, las empresas dominantes en los medios de comunicación son grandes negocios, están controladas por personas muy poderosas o por directivos sometidos a severas limitaciones por parte de los propietarios y otras fuerzas orientadas hacia los beneficios del mercado,⁴⁰ y están estrechamente unidas y tienen importantes intereses comunes con otras grandes empresas, con los bancos y con el gobierno. Este es el primero de los poderosos filtros que afectará decisivamente la selección de noticias.

1.2. EL SEGUNDO FILTRO: PARA HACER NEGOCIOS SE NECESITA EL BENEPLÁCITO DE LA PUBLICIDAD

Al abogar por los beneficios del libre mercado como un método para controlar la opinión disidente a mediados del siglo XIX, el

39. «El crecimiento simbiótico de la empresa global y la televisión norteamericana las ha llevado a un tal nivel de interrelación que no pueden ser pensadas por separado. Esencialmente, son el mismo fenómeno. Precedida en todas partes por asesores militares, grupos de presión, vendedores de equipo, especialistas en publicidad, expertos en *merchandising* y vendedores de telefilmes a modo de avanzada, la empresa penetra en gran parte del mundo no socialista. La televisión simplemente es su parte más visible.» Erik Barnouw, *The Sponsor*, Oxford University Press, Nueva York, 1978, p. 158. Para una visión más amplia, véase Herbert I. Schiller, *Communication and Cultural Domination*, International Arts and Sciences Press, White Plains, N.Y., 1976, especialmente los capítulos 3 y 4.

40. ¿Acaso no es posible que aunque las «exigencias» de la gente impliquen un contenido por el que los propietarios sienten una profunda aversión, la competencia y la búsqueda de beneficios les obligue a ofrecer semejante programación? Esto es parcialmente cierto, y junto a la autonomía limitada del personal de los medios de comunicación, puede ayudar a explicar las «sorpresas» que ocasionalmente aparecen en los mismos. No obstante, el hecho de que millones de telespectadores no dispongan de los medios para expresar la demanda de unos productos que no les son ofrecidos constituye una limitación de la fuerza de la demanda del público. Otro problema es que todo un surtido de filtros, que discutimos más adelante, refuerzan los intereses de la clase propietaria.

ministro de Hacienda británico, el liberal sir George Lewis, señaló que el mercado debería promocionar aquellos periódicos que «gozasen de las preferencias del público destinatario de la publicidad».⁴¹ De hecho la publicidad actuó como un poderoso mecanismo debilitador de la prensa de la clase obrera. Curran y Seaton atribuyen al crecimiento de la publicidad un status comparable al del incremento de los costes de capital, en cuanto a factor que permitió que el mercado lograra lo que no habían conseguido los impuestos y el acoso del Estado, señalando que los «anunciantes adquirieron así una autoridad *de facto*, puesto que, sin su apoyo, los periódicos dejaban de ser económicamente viables».⁴²

Con anterioridad al auge de la publicidad, el precio de un periódico debía cubrir todos los costes. Con el crecimiento de ésta, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse un precio por ejemplar muy por debajo de los costes de producción. Ello representó una seria desventaja para los periódicos que carecían de anuncios: sus precios tendían a aumentar, reduciendo sus ventas y dejándoles un menor superávit para invertir y mejorar sus posibilidades de venta (artículos, un formato atractivo, promoción, etc.). Por esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la disolución o a la marginación de las empresas y los géneros de comunicación que dependían exclusivamente de los beneficios obtenidos por las ventas. Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los *anunciantes* son las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios.⁴³ Los que se basan en la publicidad reciben de ésta una subvención que les proporciona un margen de precio-ventas-calidad, que les permite comer el terreno y debilitar a los rivales que no se basan (o no disponen) de ella.⁴⁴ Por otra parte, aunque

41. Citado en Curran and Seaton, *Power Without Responsibility*, p. 31.

42. *Op. cit.*, p. 41.

43. «... los productores que ofrezcan a los patrocinadores [anunciantes] las mejores oportunidades de lograr un beneficio a través de sus públicos recibirán apoyo, mientras que aquellos que no puedan competir a ese respecto no sobrevivirán.» Joseph Turow, *Media Industries: The Production of News and Entertainment*, Longman, Nueva York, 1984, p. 52.

44. La televisión no comercial también está en franca desventaja por la misma razón y requerirá de un subsidio público para ser capaz de competir. Puesto que la televisión pública no sufre la coerción inherente a la posesión por parte de los ricos, ni necesita apaciguar a los anunciantes, supone una amenaza para la restringida elite

un medio de comunicación basado en la publicidad esté dirigido a una audiencia acaudalada («de alto nivel»), podrá captar con facilidad una gran parte de la audiencia «de nivel inferior», con lo cual sus rivales perderán participación en el mercado y a la larga quedarán relegados o marginados.

La publicidad ha jugado de hecho un importante papel en el aumento de la concentración, incluso entre rivales empeñados con igual energía en la prosecución de los beneficios de la publicidad. Si un periódico o una emisora de televisión disponen de una participación en el mercado y de un margen publicitario, obtendrán beneficios suplementarios que les permitirán competir de una manera más efectiva —con una promoción más agresiva, comprando artículos y programas más atractivos—, mientras que el rival en desventaja deberá efectuar gastos que no puede afrontar para intentar detener el proceso acumulativo de descenso de su participación en el mercado (y de sus beneficios). La crisis suele ser fatal y ayuda a explicar la desaparición de periódicos y revistas de gran tirada, así como la reducción del número de periódicos.⁴⁵

Por tanto, desde la época de la introducción de la publicidad en la prensa, los periódicos radicales y de la clase obrera se han encontrado en seria desventaja. Sus lectores solían ser personas de escasos recursos económicos, factor que siempre ha afectado los intereses de los anunciantes. Un ejecutivo publicitario afirmó en 1856 que algunos periódicos son malos vehículos porque «sus lectores no son compradores, y todo el dinero que empleemos en ellos será prácticamente dinero perdido».⁴⁶ Esta misma fuerza representó un gran lastre para la prensa socialdemócrata británica tras la segunda guerra mundial. Entre 1960 y 1967 desaparecieron o fueron absorbidos por la organización del *establishment* el *Daily Herald*, el

que controla las comunicaciones de masas. De ahí que los conservadores se esfuercen en mantener a raya a la televisión pública, con planes de inserción anuales, e inversiones de poca envergadura (véase Barnouw, *The Sponsor*, pp. 179-182). Otra opción, seguida en la era Carter-Reagan, ha sido hacerla entrar por la fuerza en la dinámica comercial mediante un repentino recorte presupuestario.

45. Bagdikian, *Media Monopoly*, pp. 118-126. «El periódico dominante al final prospera», dice Allen H. Neuharth, presidente de Gannett. «El periódico débil al final muere.» Joseph B. White, «Knight-Ridder's No-Lose Plan Blackfires», *Wall Street Journal* (4 de enero de 1988).

46. Citado en Curran and Seaton, *Power Without Responsibility*, p. 43.

News Chronicle y el *Sunday Citizen*, pese a su promedio colectivo diario de 9,3 millones de lectores. Como señaló James Curran, con sus 4,7 millones de lectores en su último año, «el *Daily Herald* tenía de hecho más del doble de lectores que el *The Times*, el *Financial Times* y el *Guardian* juntos». Y aún más, los informes mostraron que sus lectores «tenían mejor opinión de su periódico que los lectores habituales de cualquier otro periódico popular», y que «éstos leían más su periódico que los lectores de otros periódicos populares, pese a que la gran mayoría de ellos pertenecen a la clase trabajadora ...».⁴⁷ La desaparición del *Daily Herald*, así como la del *News Chronicle* y el *Sunday Citizen*, fueron en gran medida resultado de la progresiva asfixia causada por la falta de apoyo publicitario. El *Daily Herald*, con el 8,1 por 100 de la tirada nacional diaria, tenía un 3,5 por 100 de beneficios publicitarios netos; el *Sunday Citizen* alcanzó una décima parte de los beneficios netos de publicidad obtenidos por el *Sunday Times* y una séptima parte de los del *Observer*. Probablemente Curran esté en lo cierto cuando afirma que la pérdida de estos tres periódicos fue una importante contribución al declive de la suerte del partido laborista, especialmente en el caso del *Daily Herald*, pues se eliminaba una institución de tirada masiva que ofrecía «un marco alternativo de análisis y de comprensión que cuestionaba los sistemas dominantes de representación en la prensa y los medios de radiodifusión principales».⁴⁸ Un movimiento de masas que carezca del apoyo de alguno de los medios de comunicación más importantes, y esté sometido a una considerable hostilidad por parte de la prensa activa, sufre una gran desventaja y tiene que luchar contra contumaces enemigos.

Hoy en día los medios de comunicación prósperos están totalmente convencidos de la importancia crucial de la «calidad» de la audiencia: La CBS comunica orgullosamente a sus accionistas que, al tiempo que «trata continuamente de maximizar la recepción de su audiencia», ha desarrollado una nueva «herramienta de ventas» con la que atraer a los anunciantes, el «Perfil de la Audiencia Cliente» o PAC, que colabora a que los anunciantes optimicen la efectividad de sus programas de televisión, mediante la valoración

47. «Advertising and the Press», en James Curran, ed., *The British Press: A Manifesto*, Macmillan, Londres, 1978, pp. 252-255.

48. *Op. cit.*, p. 254.

de los segmentos de la audiencia en proporción a los niveles de utilización de los productos y servicios de los anunciantes». ⁴⁹ En resumen, los medios de comunicación están interesados en atraerse audiencias con poder adquisitivo, no audiencias *per se*. Como ya sucedía en el siglo XIX, las audiencias opulentas hacen relucir los intereses de los anunciantes. La idea de que la consecución de grandes audiencias hace que los medios de comunicación sean «democráticos» sufre así una debilidad inicial, ¡cuyo equivalente político sería un sistema de voto ponderado por la renta!

El poder de los anunciantes sobre la programación televisiva se debe sencillamente a que son ellos los que compran y pagan los programas. Ellos son los «patrones» que dan las subvenciones a los medios, éstos compiten por su patrocinio, desarrollando equipos especializados para captar anunciantes, que se ven necesariamente obligados a explicar cómo sus programas se ajustan a sus necesidades. Las elecciones de estos patrones afectan grandemente el bienestar de los medios de comunicación, con lo cual los anunciantes se convierten en lo que William Evan denomina «organizaciones normativas de referencia» ⁵⁰ a cuyas exigencias y demandas deben acomodarse los medios de comunicación si desean tener éxito. ⁵¹

Para una cadena de televisión, la pérdida o ganancia de un punto de audiencia en el índice Nielsen se traduce en una alteración en los beneficios derivados de la publicidad que va de los ochenta a los cien millones de dólares anuales, con algunas variaciones en función de la «calidad» de la audiencia. De ahí el extraordinario interés en la magnitud y en la capacidad adquisitiva de ésta. En un

49. 1984 CBS Annual Report, p. 13. Esto es un nuevo refinamiento para medir el «rendimiento» de «atraer una audiencia». En el negocio de las revistas, la medida estándar es el CPM, o «coste por millar», que el anunciante satisface para llegar hasta los compradores a través de un anuncio a toda página en blanco y negro. Tendencias recientes, como el PAC de la CBS, se han encaminado a identificar las características especiales de la audiencia receptora. Vendíéndose a sí misma, *Soap Opera Digest*, dice: «Pero Ud. probablemente querrá conocer nuestro primer hito: actualmente, *Soap Opera Digest* llega a más mujeres entre 18 y 49 años con el CPM más bajo que cualquier otra revista femenina» (citado en Turow, *Media Industries*, p. 55).

50. William Evan, *Organization Theory*, Wiley, Nueva York, 1976, p. 123.

51. Turow sostiene que «la continua interacción entre productores y patrocinadores principales tiene un papel muy importante cuando se establecen los límites generales para la actividad cotidiana de producción» (*Media Industries*, p. 51).

sistema de mercado existe una fuerte tendencia a que este tipo de consideraciones tengan una profunda repercusión política. Esto se debe en parte a las presiones institucionales para centrarse en cuestiones secundarias o poco comprometidas y en parte a la continua interacción de las organizaciones de medios de comunicación con los patrones que les suministran sus ingresos. La televisión, como señalaba Grant Tinker, a la sazón director de la cadena de la NBC, «es un medio sustentado por la publicidad», y en la medida que este apoyo decaiga, la programación cambiará». ⁵²

Los medios de comunicación radicales y de la clase obrera se ven también perjudicados por la discriminación política de los anunciantes. Esta discriminación política está estructurada en las asignaciones publicitarias, en función de la presión que se haga a la gente con posibilidades económicas para que compre. Pero muchas empresas rechazarán siempre patrocinar a los enemigos ideológicos y a aquellos que consideren perjudiciales para sus intereses, y a la fuerza del sistema de elección ponderado por la renta se añaden casos de abierta discriminación. La cadena de televisión pública WNET perdió en 1985 la financiación de la Gulf + Western después de la emisión del documental *Hungry for Profit* (El negocio del hambre), que contenía material crítico con la actividad de las empresas transnacionales en el Tercer Mundo. Antes de la emisión del programa, y en previsión de una reacción empresarial negativa, los funcionarios de la cadena «hicieron todo lo posible por sanear el programa» (según un portavoz de la WNET). ⁵³ El director ejecutivo de la Gulf + Western se quejó a la emisora porque el programa era «virulentamente anticomercial, por no decir antiestadounidense» y dijo que el haberlo emitido no era un comportamiento propio de «un amigo» de la empresa. El *Economist* de Londres afirmó que «muchas gente cree que la WNET no volverá a cometer el mismo error». ⁵⁴

52. Citado en Todd Gitlin, *Inside Prime Time*, Pantheon, Nueva York, 1983, p. 253.

53. Pat Aufderheide, «What Makes Public TV Public?», *The Progressive* (enero de 1988).

54. «Castor oil or Camelot?» (5 de diciembre de 1987). Para más material sobre estas intervenciones, véase Harry Hammit, «Advertising Pressures on Media», informe n.º 367 del Freedom of Information Center, Facultad de Periodismo, Universidad de Missouri en Columbia, febrero de 1977. Véase también James Aronson, *Deadline for the Media*, Bobbs-Merrill, Nueva York, 1972, pp. 261-263.

Además de la discriminación contra las instituciones de medios de comunicación poco amistosas, los anunciantes también eligen selectivamente los programas basándose en sus propios principios. Salvo raras excepciones, éstos son cultural y políticamente conservadores.⁵⁵ Las grandes empresas que se anuncian en la televisión raramente patrocinarán programas que aborden serias críticas a las actividades empresariales, tales como el problema de la degradación ambiental, las actividades del complejo militar-industrial, o el apoyo de estas empresas a las tiranías del Tercer Mundo y los beneficios que obtienen del mismo. Erik Barnouw cuenta la historia de una serie de documentales sobre problemas ambientales propuesta por la NBC en un momento de gran interés por este tema. Barnouw señala que pese a que en aquella época muchas empresas importantes empleaban su dinero en anuncios y otra publicidad relacionada con los problemas ambientales, la serie de documentales no logró encontrar patrocinadores. El problema residía en su excesiva objetividad, que llegaba a sugerir fallos de las empresas y del sistema, mientras que el mensaje empresarial era «tranquilizador».⁵⁶

Con el tiempo las cadenas de televisión han aprendido que estos programas no venden, que de realizarse conllevarán un sacrificio financiero, y que, además, pueden ofender a los poderosos anunciantes.⁵⁷ El aumento del precio de los *spots* publicitarios hace que aumenten también las pérdidas de ingresos; y con la creciente presión del mercado por los resultados financieros y la disminución de las normas limitadoras, un sistema de medios de comunicación basado en la publicidad aumentará gradualmente el tiempo destinado

55. Según las instrucciones de Procter & Gamble para su agencia de publicidad, «en nuestros programas no habrá ningún material que de un modo u otro pudiera fomentar el concepto de negocio como algo frío, despiadado y desprovisto de todo sentimiento o motivación espiritual». El director de comunicación empresarial de la General Electric ha dicho: «Insistimos en programas con un ambiente que refuerce nuestros mensajes empresariales» (citado en Bagdikian, *Media Monopoly*, p. 160). Recordemos que GE es el actual propietario de la NBC-TV.

56. Barnouw, *The Sponsor*, p. 135.

57. Los anunciantes también pueden ofenderse por los ataques contra ellos mismos o contra sus productos. Sobre la tendencia de los medios de comunicación a evitar críticas de productos anunciados incluso cuando son importantes para el bienestar del consumidor (por ejemplo, los efectos del tabaco), véase Bagdikian, *Media Monopoly*, pp. 168-173.

a la publicidad y marginará o eliminará a la vez la programación que tenga un contenido importante en temas públicos.⁵⁸

Por lo general, los anunciantes evitarán los programas con serias complejidades y molestas controversias susceptibles de interferir con la «disposición del comprador». Buscarán programas que entretengan alegremente, y se ajusten así al espíritu de la premisa fundamental del programa de compras: la difusión de un mensaje de ventas. Así con el tiempo, en lugar de programas como *The Selling of the Pentagon* (La venta del Pentágono) la evolución natural de un mercado ávido de los dólares del patrocinador ofrecerá programas como *A Bird's Eye View of Scotland* (Escocia a vista de pájaro), *Barry Goldwater's Arizona* (La Arizona de Barry Goldwater), *An Essay on Hotels* (A propósito de los Hoteles), y *Mr. Rooney Goes to Dinner* (Las cenas del Sr. Rooney), un programa de la CBS sobre «cómo comen los estadounidenses cuando cenan fuera, adónde van y por qué».⁵⁹ Se dan algunos casos excepcionales de compañías que desean patrocinar programas serios, muchas veces como resultado de dificultades recientes que exigen una compensación en el campo de las relaciones públicas.⁶⁰ Pero incluso en estos casos las empresas por lo general no desearán patrocinar estudios profundos de temas delicados y controvertidos, sino que prefieren programas sobre las

58. Esto es difícil de demostrar estadísticamente, dada la poca información facilitada por la FCC durante estos años. A largo plazo, la tendencia de la proporción entre tiempo de publicidad y tiempo de programación se hace patente en la siguiente norma adoptada en 1929 por la National Association of Broadcasting para regular la actividad comercial de la radio: «Los anuncios publicitarios ... no se emitirán entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche». William Paley declaró en 1930 ante el Comité Comercial del Senado que sólo el 22 por 100 del tiempo de la CBS estaba asignado a programas patrocinados comercialmente, manteniendo al 78 por 100 restante; y señaló que la publicidad sólo absorbía «siete décimas del 1 por 100 de todo nuestro tiempo» (citado en *Public Service Responsibility of Broadcast Licensees*, FCC, GPO, Washington, 7 de marzo de 1946, p. 42). Frank Wolf, refiriéndose a la programación de temas públicos, declara: «Que tales programas no se emitan en la televisión comercial podría deberse a la reglamentación de la FCC» (*Television Programming for News and Public Affairs*, Praeger, Nueva York, 1972, p. 138; véanse también pp. 99-139).

59. Barnouw, *The Sponsor*, p. 134.

60. Sobre el patrocinio de Edward R. Murrow por Alcoa tras el pleito contra el consorcio, y el de «The Big Blue Marble» por la ITT tras los escándalos de los años setenta, véase Barnouw, *The Sponsor*, pp. 51-52, 84-86. Barnouw demuestra que la cobertura de la ITT en los noticiarios se redujo bruscamente durante el período de patrocinio de dicho programa por la ITT.

antigüedades griegas, el ballet, nostálgicos y temas de historia nacional y cultural. Barnouw señala un interesante contraste: las representaciones de la televisión comercial «casi siempre tienen que ver con el aquí y ahora, como elaborados por los presupuestos publicitarios», pero en la televisión pública, la cultura «viene a significar "otras culturas" ... La civilización estadounidense, aquí y ahora, queda fuera de consideración».⁶¹

Las emisoras y las cadenas se preocupan también por mantener el «flujo» de los niveles de audiencia, es decir, por hacer que la gente permanezca viendo programa tras programa, manteniendo así los niveles de anunciantes y los ingresos que éstos les proporcionan. La emisión de interludios en la programación de tipo documental cultural que provocan la conexión con la emisora son costosos: con el tiempo un sistema comercial «libre» (es decir, basado en los anuncios) tenderá a suprimirlos. Estos materiales documentales, culturales y críticos serán eliminados también de los medios secundarios, ya que estas empresas se esfuerzan a su vez por interesar a los anunciantes, aunque siempre habrá alguna programación cultural y política que intentará aparecer o sobrevivir en la periferia de los principales medios de comunicación.

1.3. EL TERCER FILTRO: EL SUMINISTRO DE NOTICIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación de masas están inmersos en una relación simbiótica con las fuentes de información poderosas, tanto por necesidad económica como por reciprocidad de intereses. Estos medios necesitan un flujo constante y fiable de materia prima informativa. Deben satisfacer una demanda diaria de noticias, así como unos horarios apremiantes para la emisión de éstas. No se pueden permitir tener periodistas y cámaras en todos los lugares en los que pueden surgir historias importantes. La economía les obliga a que concentren sus recursos en los lugares en los que se suelen producir las noticias importantes, en los que abundan los rumores y las filtraciones, y en los que se acostumbra a celebrar las conferencias de prensa. La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de

61. Barnouw, *The Sponsor*, p. 150.

Estado, todos ellos en Washington D.C., son núcleos centrales de actividad informativa. En cuanto al ámbito local, el ayuntamiento y la comisaría de policía son los protagonistas de «flashes» informativos regulares para los periodistas. Las empresas comerciales y los grupos industriales son asimismo proveedores regulares y fiables de historias consideradas periodísticas. Estas burocracias ponen en circulación un gran volumen de material que satisface las necesidades de caudales fiables y programados de los organismos informativos. Mark Fishman lo llama «el principio de afinidad burocrática: sólo otras burocracias pueden satisfacer las necesidades iniciales de una burocracia informativa».⁶²

Las fuentes gubernamentales y empresariales tienen también el gran mérito de ser reconocidas y veraces debido a su status y prestigio, lo cual es importante para los medios de comunicación. Para Fishman,

los trabajadores informativos están predispuestos a considerar objetivos los relatos burocráticos, puesto que ellos mismos participan en el apoyo a un orden normativo de expertos autorizado socialmente. Los periodistas se rigen por el principio de que los funcionarios han de saber lo que tienen la obligación de saber... Concretamente, un trabajador informativo identificará la declaración de un funcionario no sólo como una afirmación, sino como un fragmento de conocimiento verosímil y creíble. Esto equivale a una división moral del trabajo: los funcionarios están en posesión de los hechos, los periodistas se limitan a recogerlos.⁶³

Otra de las razones de la importancia que se concede a las fuentes oficiales es que los medios de comunicación afirman ser proveedores «objetivos» de noticias. En parte para mantener esta imagen de objetividad, y en parte para protegerse de críticas de parcialidad y de la amenaza de procesos por difamación, necesitan material que pueda mostrarse como presuntamente correcto.⁶⁴ Esta es también en parte una cuestión de costes: tomar la información

62. Mark Fishman, *Manufacturing the News*, University of Texas Press, Austin, 1980, p. 143.

63. *Op. cit.*, pp. 144-145.

64. Gaye Tuchman, «Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of News-men's Notions of Objectivity», *American Journal of Sociology*, 77, n. 2, (1972), pp. 662-664.

de fuentes presuntamente creíbles reduce los gastos de investigación, mientras que el material de fuentes que no son fiables *prima facie*, o que despertarán críticas y amenazas, requiere una cuidadosa verificación y una investigación costosa.

La magnitud de las operaciones de información pública de las grandes burocracias gubernamentales y empresariales, que constituye la principal fuente de información, es enorme y asegura un especial acceso a los medios. El Pentágono, por ejemplo, tiene un servicio de información pública que comprende varios miles de empleados, gasta cientos de millones de dólares cada año y empuja no sólo los recursos de información pública de cualquier individuo o grupo disidente, sino los del conjunto de dichos grupos. En 1979 y 1980, durante un breve período de relativa apertura (clausurada desde entonces), las Fuerzas Aéreas estadounidenses revelaron que el alcance informativo a su disposición estaba compuesto por:

- 140 periódicos, con 690.000 ejemplares semanales;
- la revista *Airman*, con una tirada mensual de 125.000 ejemplares;
- 34 emisoras de radio y 17 de televisión, fundamentalmente en el extranjero;
- 45.000 cuarteles generales y unidades de emisión de noticias;
- 615.000 comunicados de información local;
- 6.600 entrevistas con medios informativos;
- 3.200 conferencias informativas;
- 500 vuelos para orientación con medios de comunicación;
- 50 reuniones con consejos editoriales;
- 11.000 alocuciones o conferencias.⁶⁵

Aquí no se cuentan enormes áreas de la actividad de información pública de las fuerzas aéreas. En un escrito de 1970, el senador J. W. Fulbright descubrió que la actividad de relaciones públicas de las fuerzas aéreas en 1968 comprendía 1.305 empleados a tiempo completo, sin contar otros miles de personas que «tenían actividades públicas colaterales con otras tareas».⁶⁶ En aquella época las fuerzas aéreas ofrecían un servicio de cuñas televisivas semanales y

65. United States Air Force, «Fact Sheet: The United States Air Force Information Program» (marzo de 1979); «News Releases: 600,000 in a Year», *Air Force Times* (28 de abril de 1980).

66. J. W. Fulbright, *The Pentagon Propaganda Machine*, H. Liveright, Nueva York, 1970, p. 88.

programas de crónicas grabados para su utilización tres veces por semana, que enviaba a 1.139 emisoras de radio, y produjo también 148 películas, 24 de las cuales fueron distribuidas para su difusión pública.⁶⁷ No hay razones para creer que la actividad de relaciones públicas de las fuerzas aéreas haya disminuido desde la década de los sesenta.⁶⁸

Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo sólo a las fuerzas aéreas, que hay otras tres secciones con gran número de programas y que aparte existe un programa global de información pública a cargo de un subsecretario de defensa para temas públicos en el Pentágono. En 1971 un estudio publicado en el *Armed Forces Journal* reveló que el Pentágono publica un total de 371 revistas, con un coste anual de unos 57 millones de dólares, actividad dieciséis veces superior a la de la mayor editorial del país. En una actualización publicada en 1982, el *Air Force Journal International* indicaba que el Pentágono había editado 1.203 publicaciones periódicas.⁶⁹ Para apreciar esto en su justa medida, podemos señalar aquí la envergadura de las operaciones de relaciones públicas del American Friends Service Committee (AFSC) y del National Council of the Churches of Christ (NCC), dos de los mayores organismos sin ánimo de lucro cuya voz es un desafío constante a los criterios del Pentágono. El presupuesto de 1984-1985 de la oficina principal de servicios informativos de la AFSC era inferior a los 500.000 dólares, y disponía de un equipo compuesto por once personas.⁷⁰

67. *Op. cit.*, p. 90.

68. Un informe de Associated Press sobre «Newspapers Mustered as Air Force Defends BIB», publicado en el *Washington Post* (3 de abril de 1987), indicaba que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos tenían 227 periódicos en 1987, contrastando con los 140 de 1979.

69. «DOD Kills 205 Periodicals; Still Publishes 1.203 Others», *Armed Forces Journal International* (agosto de 1982), p. 16.

70. Sus nueve oficinas regionales también realizaban operaciones de relaciones públicas, pero el personal y los fondos no son asignables a esta función. Son inferiores al conjunto de la oficina central.

El presupuesto total de relaciones públicas del ASFC asciende más o menos lo mismo que el contrato entre el Departamento de Estado y la International Business Communications para presionar a favor de la contra (419.000 dólares). Este era sólo uno de los contratos investigados por la GAO que «la oficina de la Latin American Public Diplomacy adjudicaba a individuos para investigación y documentación sobre América Latina, dijo un funcionario de la GAO relacionado con la investigación», Rita Beamish, «Pro-contra Contracts are Probed», *Philadelphia Enquirer* (22 de julio de 1987), p. 4A.

Globalmente, el número de comunicados de prensa de la institución se cifra alrededor de los doscientos por año, ofrece treinta conferencias de prensa anuales y produce también anualmente una película y dos o tres series de diapositivas. No elabora cuñas televisivas, fotografías o programas de radio grabados para los medios de comunicación. La oficina de información del NCC tenía un presupuesto anual de unos 350.000 dólares, difundía unos cien comunicados informativos por año y celebra unas cuatro conferencias de prensa anualmente.⁷¹ La proporción de los comunicados y conferencias de prensa de las fuerzas aéreas con relación a los de la AFSC y el NCC juntos es de 150 a 1 (o de 2.200 a 1 si contamos los comunicados de prensa locales de las fuerzas aéreas), y de 94 a 1, respectivamente. Si a ello añadimos los otros servicios esta diferencia aumenta considerablemente.

Sólo el sector empresarial dispone de recursos para producir información pública y propaganda al mismo nivel que el Pentágono y otros organismos del Estado. La AFSC y el NCC no pueden igualar las compras multimillonarias en dólares de espacio en los periódicos de la empresa Mobil Oil u otras inversiones empresariales para difundir sus puntos de vista.⁷² Hay cientos o incluso quizás miles de empresas individuales que disponen de unos presupuestos para información y presión pública que superan a los de la AFSC y el NCC. Un *colectivo* empresarial como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos disponía en 1983 de un presupuesto para investigación, comunicaciones y actividades políticas de 65 millones de dólares.⁷³ En 1980, la Cámara publicó una revista de negocios (*Nation's*

71. Los servicios informativos del NCC están concentrados en la Oficina de Información, pero tienen parte de su personal disperso en servicios de comunicaciones en otros lugares de la organización que producen unos cuantos boletines, revistas, vídeos y películas.

72. En 1980, Mobil Oil tuvo un presupuesto de relaciones públicas de 21 millones de dólares y el personal de dicho departamento lo formaban setenta y tres personas. Entre 1976 y 1981 produjo al menos una docena de reportajes especiales para televisión sobre cuestiones tales como el precio de la gasolina, contratando a un periodista de televisión para entrevistar a los ejecutivos y demás expertos de Mobil, reportajes que se emiten con frecuencia en dicho medio, a menudo sin indicación expresa de Mobil. Véase A. Kent MacDougall, *Ninety Seconds To Tell It All*, Dow Jones-Irvin, Homewood, Ill., 1981, pp. 117-120.

73. John S. Saloma III, *Ominous Politics: The New Conservative Labyrinth*, Hill & Wang, Nueva York, 1984, p. 79.

Business) con una tirada de 1,3 millones de ejemplares, y un semanario con 740.000 suscriptores, produciendo también semanalmente un programa distribuido a 400 emisoras de radio, así como sus propios programas semanales de debate emitidos por 128 emisoras de televisión comercial.⁷⁴

Junto a la Cámara de los Estados Unidos existen miles de cámaras de comercio estatales y locales y de asociaciones industriales vinculadas también a actividades propias de grupos de presión y de relaciones públicas. Los organismos de presión de la comunidad empresarial e industrial son «una red con más de 150.000 profesionales»,⁷⁵ sus recursos están relacionados con la renta y los beneficios empresariales, y con el valor protector de los desembolsos en actividades de relaciones públicas y de cabildeo. Los beneficios empresariales en 1985 alcanzaron los 295.500 miles de millones de dólares. Evidentemente, cuando la comunidad empresarial está inquieta por el ambiente político, como lo estuvo en la década de los setenta, dispone de los medios necesarios para hacer frente a cualquier amenaza. Los gastos publicitarios y de imagen empresariales e industriales aumentaron de los 305 millones de dólares en 1975 a los 650 millones en 1980.⁷⁶ Gracias a los dividendos que obtienen efectúan campañas directas y otros envíos por correo, distribuyen películas, folletos y prospectos educativos, e invierten en iniciativas, referendums y cabildeo, a lo que añaden aportaciones políticas y de pensamiento. Se calcula que las inversiones de las empresas y asociaciones industriales en publicidad política y popular alcanzó los 1.000 millones de dólares por año en 1978, y que en 1984 había aumentado hasta los 1.600 millones de dólares.⁷⁷

Para consolidar su privilegiada posición como fuentes de información, los promotores de informaciones gubernamentales y empresariales se esfuerzan por facilitar las cosas a los organismos infor-

74. MacDougall, *Ninety Seconds...*, pp. 116-117.

75. Thomas B. Edsall, *The New Politics of Inequality*, Norton, Nueva York, 1984, p. 110.

76. Peggy Dardenne, «Corporate Advertising», *Public Relations Journal* (noviembre de 1982), p. 36.

77. S. Prakash Sethi, *Handbook of Advocacy Advertising: Strategies and Applications*, Ballinger, Cambridge, Mass., 1987, p. 22. Véanse también Edsall, *New Politics*, capítulo 3: «The Politicization of the Business Community»; y Saloma, *Ominous Politics*, capítulo 6: «The Corporations: Making Our Voices Heard».

mativos. Así, les proporcionan instalaciones en las que reunirse, dan a los periodistas copias de discursos por adelantado, e informes posteriores; programan conferencias de prensa teniendo en cuenta las horas de cierre de recepción de noticias;⁷⁸ escriben comunicados de prensa en un lenguaje asequible, y organizan cuidadosamente sus conferencias de prensa y sesiones fotográficas.⁷⁹ La obligación de los funcionarios informativos es «satisfacer las necesidades programadas de los periodistas con material que su sincronizada oficina ha generado a su propio ritmo».⁸⁰

Efectivamente, las grandes burocracias de los poderosos *subventionan* a los medios de comunicación, obteniendo así un acceso especial a los mismos en virtud de su contribución a la reducción de sus costes de adquisición de materia prima y de producción de noticias. Las grandes instituciones que proporcionan este subsidio se convierten así en fuentes de información «rutinarias» y tienen un privilegiado acceso a los medios de comunicación. Las fuentes de información no rutinarias deben luchar por acceder a sus puertas, y pueden ser ignoradas por la arbitraria decisión de los guardianes que las protegen. Por lo que se refiere a la generosidad de la Office Public Diplomacy del Departamento de Estado⁸¹ cabe señalar que las subvenciones que ésta otorga son a cargo de los contribuyentes de manera que, de hecho, la ciudadanía paga por recibir la propaganda que le interesa a los grupos poderosos tales como los contratistas de armamento y otros patrocinadores del terrorismo de Estado.

Debido a los servicios que proporcionan, a los continuos contactos que genera su actividad normal y a la dependencia mutua, los poderosos pueden utilizar relaciones personales, amenazas y recompensas para influenciar y coercionar aún más a los medios de comunicación. Éstos pueden sentirse obligados a dar por buenas historias extremadamente dudosas y a acallar sus críticas para no ofender a sus fuentes de información y perjudicar su estrecha relación con

78. El bombardeo estadounidense de Libia, el 14 de abril de 1986, fue la primera acción militar programada para acaparar la atención de los telediaros matutinos de las siete. Véase Chomsky, *Pirates & Empeors*, p. 147.

79. Sobre la maestría con la que la administración Reagan las aprovechó para manipular a la prensa, véase «Standups», *The New Yorker* (2 de diciembre de 1985), pp. 81 y ss.

80. Fishman, *Manufacturing the News*, p. 153.

81. Véase nota 70.

éstas.⁸² Resulta muy difícil llamar embusteras a las autoridades de cuyas informaciones depende uno, aunque éstas nos digan grandes mentiras. Las fuentes de información críticas se pueden evitar no sólo porque estén menos a mano y por los elevados costes para determinar la verosimilitud de las mismas, sino también porque las fuentes de información principales pueden ofenderse e incluso amenazar a los medios de comunicación que se hagan eco de ellas.

Las fuentes de información poderosas pueden asimismo utilizar su prestigio y su importancia como palanca para vetar el acceso de los críticos a los medios de comunicación: por ejemplo, el Departamento de Defensa rechazó participar en debates sobre temas de defensa en la National Public Radio si concurrían también a ellos expertos del Center for Defense Information; Elliot Abrams rehusó aparecer en un programa sobre los derechos humanos en América central en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, si no se excluía la participación del antiguo embajador, Robert White;⁸³ Claire Sterling se negó a participar en debates televisivos sobre la conexión búlgara en los que apareciesen sus críticos.⁸⁴ En los dos últimos casos, las autoridades y los expertos reconocidos lograron con sus amenazas monopolizar el acceso a los medios de comunicación.

Más importante es que las fuentes de información poderosas acostumbran a aprovecharse de las rutinas y de la dependencia de los medios para «gestionarlos» y manipularlos para que sigan un orden del día y un esquema específico (como tendremos ocasión de

82. El 6 de enero de 1986, el American Friends Service Committee publicó un comunicado, basado en una prolongada investigación de la Freedom of Information Act, el cual mostraba que habían tenido lugar 381 accidentes e «incidentes» con armas nucleares de la marina en el período 1965-1977, cifra mucho más alta que la declarada con anterioridad. Los medios de comunicación no cubrieron directamente el asunto, sino a través de la respuesta de la marina, la cual minimizó la importancia de los nuevos descubrimientos y eliminó o relegó a un segundo plano toda la serie de hechos desvelados por la AFSC, así como su interpretación de los mismos. Un titular típico: «Navy Lists Nuclear Mishaps: None of 630 Imperilled Public, Service Says», *Washington Post* (16 de enero de 1986).

83. El profesor de Harvard encargado del programa, Harvey Mansfield, declaró que en cualquier caso invitar a White había sido un error, ya que «es un representante de la extrema izquierda», mientras que el foro pretendía provocar un debate «entre liberales y conservadores», *Harvard Crimson* (14 de mayo de 1986).

84. Véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *The rise and Fall of the Bulgarian Connection*, Sheridan Square Publications, Nueva York, 1986, pp. 123-124.

demostrar en los siguientes capítulos).⁸⁵ En parte este proceso de gestión consiste en inundar a los medios de comunicación con historias, que algunas veces sirven para encarrillarlos en una línea y un esquema determinados (por ejemplo, el suministro ilegal de armas por parte de Nicaragua a los rebeldes salvadoreños), y en otros momentos para ahuyentar totalmente de las portadas de los medios de comunicación las historias inconvenientes (sustituyéndolas, por ejemplo, por el presunto envío de los MIG a Nicaragua durante la semana en que se celebraron las elecciones en ese país, en 1984). Esta estrategia puede remontarse por lo menos hasta el Comité de Información Pública, creado para coordinar la propaganda durante la primera guerra mundial, que «descubrió en 1917-1918 que uno de los mejores mecanismos para controlar las informaciones era inundar los canales informativos con "hechos", lo que equivale a decir información oficial».⁸⁶

La relación entre poder y suministro de noticias se extiende más allá del suministro empresarial y oficial de las noticias diarias, hasta configurar el suministro de los «expertos». El predominio de las fuentes oficiales se ve debilitado por la existencia de fuentes no oficiales muy respetables que proporcionan puntos de vista diferentes con gran autoridad. Este problema se mitiga con la «captación de los expertos»,⁸⁷ a base de incluirlos en la nómina, financiando sus investigaciones y organizando fundaciones intelectuales para que les contraten directamente y ayuden a difundir sus mensajes. De esta manera se puede estructurar la parcialidad, y el suministro de los expertos se puede sesgar en la dirección deseada por el gobierno y «el mercado».⁸⁸ En palabras de Henry Kissinger, en esta «época de expertos», la «audiencia» de los mismos está constituida por «aquellos que tienen intereses inalienables en las opiniones al uso, puesto que, al fin y al cabo, lo que ha hecho de ellos unos expertos

85. Mark Hertsgaard, «How Reagan Seduced US: Inside the President's Propaganda Factory», *Village Voice* (18 de septiembre de 1984); véase también «Standups», citado en la nota 79.

86. Stephen L. Vaughn, *Holding Fast the Inner Lines*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980, p. 194.

87. Bruce Owen y Ronald Braeutigam, *The Regulation Game: Strategic Use of the Administrative Process*, Ballinger, Cambridge, Mass., 1978, p. 7.

88. Véase Edward S. Herman, «The Institutionalization of Bias in Economics», *Media, Culture and Society* (julio de 1982), pp. 275-291.

ha sido la elaboración y definición de consenso a un alto nivel».⁸⁹ Así pues, es conveniente que esta reestructuración haya tenido lugar para permitir que las opiniones al uso (es decir, las opiniones funcionales a los intereses de la elite) mantengan su posición predominante.

Este proceso de creación del necesario cuerpo de expertos ha sido llevado a cabo deliberadamente y a gran escala. Ya en 1972, el juez Lewis Powell (ascendido más tarde al Tribunal Supremo) escribió un memorándum a la Cámara de Comercio estadounidense instándola a «hacerse con los académicos más reputados del país para reforzar la credibilidad de los estudios empresariales y lograr un mayor protagonismo de las empresas en los campus universitarios».⁹⁰ Uno se hace con ellos y se asegura que (en palabras del doctor Edwin Feulner, de la Heritage Foundation) el área públicopolítica «queda cubierta con profundos estudios académicos» que llegan a las conclusiones adecuadas. Utilizando la analogía de la venta de pasta de dientes de Procter & Gamble, Feulner explicó que «la venden y la vuelven a vender cada día a base de mantener fresco el producto en la mente de los consumidores». Mediante la gestión de ventas, en la que se incluye la diseminación de las ideas adecuadas a «mil periódicos», es posible mantener el debate «dentro de la perspectiva correcta».⁹¹

De acuerdo con esta fórmula, durante los años setenta y a principios de los ochenta se creó una retahíla de instituciones y se reactivaron las ya existentes con el fin de dar publicidad a los puntos de vista empresariales. Varios cientos de intelectuales fueron captados por estas instituciones, que financiaron sus trabajos y diseminaron su producción entre los medios de comunicación mediante un sofisticado esfuerzo propagandístico.⁹² La financiación empresarial y la clara finalidad ideológica de este esfuerzo no ha tenido un efecto perceptible sobre la credibilidad de estos intelectua-

89. Henry Kissinger, *American Foreign Policy*, Norton, Nueva York, 1969, p. 28.

90. Citado en Alex Carey, «Managing Public Opinion: The Corporate Offensive», University of New South Wales, 1986 (ciclostilado), p. 32.

91. *Op. cit.*, pp. 46-47, citando las ponencias de Feulner de 1978 y 1985.

92. Para una buena discusión sobre varias de estas organizaciones y sus propósitos, recursos, redes y programas, véase Saloma, *Ominous Politics*, capítulos 4, 6 y 9.

les, sino que, por el contrario, la financiación y la promoción de sus ideas les ha catapultado a la prensa.

Como ejemplo de cómo los expertos subvencionados se apropian del espacio en los medios de comunicación, el cuadro 1.4 reseña los «expertos» sobre temas de terrorismo y de defensa que aparecieron en el programa *McNeil-Lehrer News Hour* en el transcurso de un año a mediados de los ochenta. En él podemos ver que, exceptuando los periodistas, la mayoría de participantes (el 54 por 100) son ex funcionarios o funcionarios en activo del gobierno, y que la categoría inmediatamente inferior (15,7 por 100) proviene de fundaciones intelectuales conservadoras. En esta última categoría el mayor número de apariciones lo proporcionó el Georgetown Center for Strategic and International Studies (CSIS), organización financiada por fundaciones conservadoras y empresas, que proporciona un intercambio constante de personal entre el Departamento de Estado y la CIA y una organización nominalmente privada.⁹³ En temas tales como el terrorismo y la conexión búlgara, el CSIS ha ocupado un espacio en los medios de comunicación que de otra manera hubiese sido llenado por voces independientes.⁹⁴

También los propios medios de comunicación proporcionan «expertos» que acostumbran a repetir el punto de vista oficial. John Barron y Claire Sterling son personajes conocidísimos como autoridades sobre la KGB y el terrorismo porque el *Reader's Digest* ha financiado, publicado y dado publicidad a sus trabajos; el desertor soviético Arkady Shevchenko se convirtió en un experto en los servicios de información y armamento soviéticos porque el *Time*, la cadena de televisión *ABC* y el *New York Times* lo eligieron como cronista (pese a sus credenciales nada claras).⁹⁵ Los medios de comunicación, al dar a estos proveedores de los puntos de vista favoritos grandes oportunidades para exponerlos, les confieren status y hacen de ellos los candidatos obvios para emitir opiniones y análisis.

93. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, p. 259; Fred Landis, «Georgetown's Ivory Tower for Old Spooks», *Inquiry* (30 de septiembre de 1979), pp. 7-9.

94. El experto en terrorismo del CSIS, Robert Kupperman, probablemente ha sido el participante más requerido en los programas de radio y televisión sobre terrorismo de los últimos años.

95. Sobre la calidad de experta de Sterling, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 125-146; sobre Schevchenko, véase Edward J. Epstein, «The Invention of Arkady Shevchenko, Supermole: The Spy Who Came In to Be Sold», *New Republic* (15-22 de julio de 1985).

CUADRO 1.4

*Expertos sobre terrorismo y defensa en el McNeil-Lehrer News Hour desde el 14 de enero de 1985 hasta el 27 de enero de 1986**

Categoría del experto	N.º	%	N.º excluyendo periodistas	% excluyendo periodistas
Funcionario del gobierno	24	20	24	27
Antiguo funcionario del gobierno	24	20	24	27
Fundación intelectual conservadora	14	11,7	14	15,7
Académico	12	10	12	13,5
Periodista	31	25,8	—	—
Asesor	3	2,5	3	3,4
Funcionario de un gobierno extranjero	5	4,2	5	5,6
Otros	7	5,8	7	7,8
TOTALES	120	100	89	100

* Se trata de una recopilación de todas las apariciones en el programa relacionadas con la conexión búlgara (3), y con el abatimiento del avión coreano KAL 007 (5), y terrorismo, defensa y control de armamento (33), desde el 14 de enero de 1985 hasta el 27 de enero de 1986.

Otra clase de expertos cuya preponderancia se debe en gran medida a su utilidad para el poder es la de los antiguos radicales que finalmente llegaron a «ver la luz». Los motivos que han hecho que estos individuos hayan cambiado sus dioses, desde Stalin (o Mao) hasta Reagan y la libre empresa, es diverso, pero para los medios de comunicación del *establishment* la razón del cambio es simplemente que los antiguos radicales han visto finalmente que sus puntos de vista estaban equivocados. En un país cuya ciudadanía valora el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento, los que se cambian la chaqueta son una clase importante de pecadores arrepentidos. Resulta interesante observar como estos antiguos pecadores, cuyos anteriores trabajos despertaban poco interés o eran objeto de las burlas de los medios de comunicación, son súbitamente conside-

rados eminencias y se convierten en auténticos expertos. Podemos recordar como, durante la era McCarthy, desertores y ex comunistas rivalizaban unos con otros contando cuentos sobre la inminencia de una invasión soviética y otras historias sensacionales.⁹⁶ Se dieron cuenta que la cobertura informativa dada a sus afirmaciones dependía de que adornasen sus relatos según las exigencias reinantes. El continuo flujo de ex radicales que pasan de la marginalidad a recibir la atención de los medios de comunicación demuestra que estamos presenciando un duradero método de suministro de expertos, que dirán lo que el *establishment* desee que se diga.⁹⁷

96. Véase David Cauter, *The Great Fear: The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower*, Simon & Schuster, Nueva York, 1978, pp. 114-138, el cual enfatiza la importancia del informador mentiroso. Esta patología macartista fue repetida en un libro de 1982 de Robert Leiken sobre el «hegemonismo soviético» —la frase maoísta estándar—, el cual evoca una estrategia soviética para tomar el poder en el hemisferio occidental por medio de Cuba, los sandinistas y movimientos guerrilleros en otras partes (Leiken, *Soviet Strategy in Latin America*, Praeger, Nueva York, 1982).

97. Entonces como ahora, a los antiguos disidentes se les describe como expertos especialmente valiosos por la aparente autenticidad que pueden aportar a los errores de sus antiguos compañeros. El hecho de que sus declaraciones a menudo sean fraudulentas no es un problema porque los medios de comunicación rehúsan advertirlo. Así, Jean Lacouture confirió credibilidad a sus críticas a los Khmers rojos declarando haber sido un antiguo simpatizante —lo cual no sólo es una falsedad, sino un absurdo, ya que nada se sabía acerca de los Khmers rojos—. David Horowitz añadió valor a su renacido patriotismo declarando que junto a los manifestantes contra la guerra de Vietnam llegó a «adquirir un nuevo punto de vista sobre los tiranos extranjeros como Kim Il Sung de Corea del Norte» (Peter Collier y David Horowitz, «Confessions of Two New-Left Radicals: Why We Voted for Reagan», *Washington Post National Weekly Edition*, 8 de abril de 1985). Robert Leiken llegó a ser más potente como crítico de los sandinistas que como supuesto activista en los movimientos pacifistas y antiguo partidario de los sandinistas. Todas y cada una de estas declaraciones eran una falacia, pero este hecho no fue mencionado por los medios de comunicación. Sobre las declaraciones de Leiken y la «fuerza especial» que sus escritos antisandinistas ganaron gracias a su supuesta conversión tras haber sido «fan de los sandinistas», véase Michael Massing, «Contra Aides», *Mother Jones* (octubre de 1987). Descartando esta pretensión, Massing da crédito a la declaración de Leiken de que «participó activamente en el movimiento pacifista», pero esto es muy equívoco. Los activistas del área de Boston, donde declara haber sido organizador de actividades pacifistas, no recuerdan participación alguna de Leiken hasta alrededor de 1970 —una época en la que McGeorge Bundy también podía haber sido descrito como líder activista.

1.4. EL CUARTO FILTRO: EL «CON EL MAZO DANDO» DE LOS REFORZADORES DE OPINIÓN

La alusión a «con el mazo dando» alude a las respuestas negativas, al intento de «dar caña» a declaraciones o programas de los medios de comunicación. Éstas pueden adoptar la forma de cartas, telegramas, llamadas telefónicas, instancias, pleitos, discursos e interpelaciones al Congreso, y otros mecanismos de queja, amenaza y acción punitiva. Se puede organizar de manera centralizada o local o puede consistir en acciones individuales totalmente independientes.

Si las contestaciones críticas se producen a gran escala, o por individuos o grupos que disponen de importantes recursos, pueden resultar incómodas y costosas para los medios de comunicación, que deben defender su posición dentro y fuera de la organización, y en ocasiones ante asambleas legislativas o incluso ante los tribunales. Los anunciantes pueden retirar su patrocinio. La publicidad televisiva se centra principalmente en bienes de consumo que son fácilmente objeto de un *boicot* organizado. Durante la era McCarthy, muchos anunciantes y cadenas de radio y televisión fueron eficazmente coercionados por los cazadores de rojos para que despidiesen o pusiesen en las listas negras a algunos de sus empleados, con la amenaza que de lo contrario boicotearían sus productos. Los anunciantes están aún más interesados en no ofender a audiencias que pueden producir contestaciones críticas, y su demanda de programas adecuados es una característica constante del ámbito de los medios de comunicación.⁹⁸ Si se considera que probablemente algunos acontecimientos, posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados.

La capacidad para producir respuestas críticas, especialmente costosas y amenazantes, está vinculada al poder. Este tipo de respuesta ha aumentado en estrecho paralelismo con el creciente resentimiento empresarial ante las críticas de los medios de comunicación, y con la ofensiva empresarial de los años setenta y ochenta. La respuesta crítica de los poderosos puede ser directa o indirecta. En la directa se incluirían las cartas o llamadas telefónicas desde la Casa Blanca a Dan Rather o a William Paley, o desde la Federal

98. Véase nota 55.

Communications Commission (FCC) a las cadenas de televisión solicitándoles los documentos utilizados en la elaboración de un determinado programa, o desde funcionarios indignados de las agencias de publicidad o patrocinadores empresariales a los funcionarios de los medios de comunicación, solicitándoles un espacio para sus réplicas o amenazándoles con represalias.⁹⁹ Asimismo los poderosos pueden actuar indirectamente sobre los medios de comunicación, quejándose de éstos ante su propia audiencia (accionistas y empleados); generando publicidad institucional con el mismo fin, y financiando el control de derechas o acciones de corte intelectual para atacar a los medios de comunicación. Asimismo pueden financiar campañas políticas, colaborando a situar en el poder a políticos conservadores que servirán más directamente los intereses de los poderes privados refrenando cualquier desviacionismo en los medios de comunicación.

Junto a otras inversiones políticas realizadas en los años setenta y ochenta, la comunidad empresarial ha patrocinado el desarrollo de instituciones tales como la American Legal Foundation, la Capital Legal Foundation, el Media Institute, el Center for Media and Public Affairs y la Accuracy in Media (AIM). Estas instituciones pueden considerarse como creadas específicamente para producir respuestas críticas. Otra institución de este estilo, más antigua y con mayor alcance, es la Freedom House. La American Legal Foundation, organizada en 1980, se ha especializado en quejas y procesos para ayudar a las «víctimas de los medios de comunicación» por lo que se refiere a la *Fairness Doctrine* (Doctrina de la Imparcialidad). La Capital Legal Foundation, constituida en 1977, fue el vehículo que Scaife utilizó para el proceso por difamación de la Westmoreland contra la CBS, en el que estaban en juego 120 millones de dólares.¹⁰⁰

El Media Institute, organizado en 1972 y financiado por acaudalados patrones empresariales, subvenciona programas de control, conferencias y estudios de los medios de comunicación. Ha dejado en un segundo término los fallos de los medios de comunicación en

99. Véase «The Business Campaign Against "Trial by TV"», *Business Week* (22 de junio de 1980), pp. 77-79; William H. Miller, «Fighting TV Hatchet Jobs», *Industry Week* (12 de enero de 1981), pp. 61-64.

100. Véase Walter Schneir y Miriam Schneir, «Beyond Westmoreland: The Right's Attack on the Press», *The Nation* (30 de marzo 1985).

política exterior, para centrarse más en la descripción que éstos hacen de los temas económicos y los relacionados con la comunidad comercial, si bien el abanico de sus intereses es amplio. El tema que ha sido objeto principal de los estudios y conferencias que han patrocinado ha sido el fracaso de los medios de comunicación al no retratar correctamente a las empresas y no dar la debida importancia al punto de vista empresarial,¹⁰¹ aunque también suscribe trabajos tales como el de John Corry acerca de la presunta parcialidad izquierdista de los medios de comunicación.¹⁰² El presidente del consejo de administración del Instituto en 1985 era Steven V. Seekins, el máximo funcionario de relaciones públicas de la American Medical Association; el presidente del National Advisory Council era Herbert Schmertz, de la Mobil Oil Corporation.

El Center for Media and Public Affairs, dirigido por Linda y Robert Lichter, fue creado a mediados de 1980 como instituto de investigación «sin ánimo de lucro y no partidista», y contó con el caluroso espaldarazo de Patrick Buchanan, Faith Whittlesey y del propio Ronald Reagan, quien reconoció la necesidad de una prensa objetiva e imparcial. Su publicación *Media Monitor*, así como sus estudios e investigaciones, prosiguen los primeros esfuerzos por demostrar la parcialidad liberal y las veleidades antiempresariales de los medios de comunicación de masas.¹⁰³

El AIM (Accuracy in Media) fue fundado en 1969, y creció espectacularmente en la década de los setenta. Su renta anual pasó de los 5.000 dólares en 1971 al millón y medio de dólares a principios de los ochenta, financiación que proviene principalmente de las grandes empresas y de los acaudalados herederos y fundaciones del sistema empresarial. Por lo menos ocho compañías petrolíferas diferentes contribuyeron económicamente a la Accuracy in Media

101. Un anuncio ampliamente difundido por la United Technologies Corporation, titulado «Crooks and Clowns on TV», se basa en el estudio del Media Institute titulado *Crooks, Conmen and Clowns: Businessmen in TV Entertainment*, el cual sostiene que los hombres de negocios son maltratados en los programas de entretenimiento de la televisión.

102. John Corry, *TV News and the Dominant Culture*, Media Institute, Washington, 1986.

103. Véase S. Robert Lichter, Stanley Rothman y Linda Lichter, *The Media Elite*, Adler & Adler, Bethesda, Md., 1986. Para una buena discusión sobre el nuevo centro de Lichter, véase Alexander Cockburn, «Ashes and Diamonds», *In These Times* (8-21 de julio de 1987).

(AIM) a principios de los ochenta, si bien el número total de patrocinadores pertenecientes a la comunidad empresarial es impresionante.¹⁰⁴ La función de la AIM es acosar a los medios de comunicación y presionarlos para que sigan el orden del día empresarial y una política exterior de corte conservador y línea dura. Hostiga a los medios de comunicación para que se unan con mayor entusiasmo al carro de los cazadores de rojos, y los ataca por sus presuntas deficiencias siempre que actúan indebidamente en materia de política exterior, condicionándolos para que tengan problemas (y aumentos de costes) si vulneran las pautas de parcialidad conservadoras.¹⁰⁵

La Freedom House, que se remonta hasta principios de los años cuarenta, está interrelacionada con la AIM, la World Anticomunist League, la Resistance International, y con organismos del gobierno estadounidense tales como Radio Europa Libre y la CIA; desde siempre ha actuado como virtual brazo propagandístico del gobierno y de la derecha internacional. Envió observadores electorales a las elecciones convocadas en Rhodesia por Ian Smith en 1979, que las consideraron «imparciales» y que sin embargo encontraron dudosas las elecciones de 1980 ganadas por Mugabe y celebradas bajo supervisión británica. Asimismo estos observadores encontraron admirables las elecciones salvadoreñas de 1982.¹⁰⁶ Ha dedicado impor-

104. Louis Wolf, «Accuracy in Media Rewrites News and History», *Covert Action Information Bulletin*, primavera de 1984, pp. 26-29.

105. Es difícil estimar el impacto de la AIM, pero sólo debe ser reconocido como parte de una campaña derechista empresarial de mayor envergadura. Comparte recursos económicos con componentes del laberinto conservador tales como el AEI, Hoover, el Institute for Contemporary Studies y otros (véase Saloma, *Ominous Politics*, especialmente los capítulos 2, 3 y 6), y tiene un cometido específico. El director de la AIM, Reed Irvine, participa habitualmente en programas de televisión, y los medios de comunicación publican regularmente sus comentarios y cartas al director. Los medios de comunicación se sienten obligados a responder cuidadosamente sus detallados ataques contra los noticiarios y documentales, y la Corporation for Public Broadcasting incluso ayudó a respaldar la respuesta de su grupo a la serie sobre Vietnam de la PBS. Su habilidad para conseguir que el director del *New York Times* se entrevistara personalmente con él una vez al año —objetivo primordial de todo cabildero— es un impresionante testimonio de su influencia. Sobre su contribución a la salida de Raymond Bonner del *Times*, véase Wolf, «Accuracy in Media Rewrites News and History», pp. 32-33.

106. Para un análisis del sesgo de los observadores de la Freedom House, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S. —Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*, South End Press, Boston, 1984, apéndice 1, «Freedom House Observers in Zimbabwe, Rhodesia and El Salvador».

tantes recursos a la crítica a los medios de comunicación por su insuficiente simpatía por las aventuras en política exterior de los Estados Unidos y por sus severas críticas a los estados clientes de la nación. La más notable de entre sus publicaciones de este género fue la *Big Story* de Peter Braestrup, según la cual la descripción negativa que los medios de comunicación efectuaron de la ofensiva del Tet ayudó a perder la guerra. Este trabajo es una parodia de erudición, pero aún es más interesante su premisa: según ésta, los medios de comunicación no sólo deben apoyar cualquier aventura nacional en el extranjero, sino que deben hacerlo con entusiasmo, ya que estas empresas son nobles por definición. En 1982, época en la que la administración Reagan tenía problemas para contener las informaciones de los medios de comunicación sobre los asesinatos sistemáticos de civiles cometidos por el ejército salvadoreño, la Freedom House apareció con una denuncia por el «desequilibrio» de las informaciones de los medios sobre El Salvador.¹⁰⁷

Aunque los engranajes de contestación crítica atacan constantemente a los medios de comunicación, éstos les dan un buen trato. Les ofrecen su respetuosa atención, y raramente mencionan o analizan su papel propagandístico y sus vinculaciones con un programa empresarial de mayor envergadura. Con frecuencia publican las diatribas de Reed Irvine, director de la AIM.

Las respuestas críticas de corte conservador que atacan regularmente a los «medios de comunicación liberales», como las de Michael Ledeen,¹⁰⁸ disponen de un espacio en las columnas de editoriales abiertos, de críticos benevolentes y sus autores, en su calidad de expertos, siempre tienen un lugar en los debates televisados. Este es un reflejo del poder de los patrocinadores, poder que incluye la privilegiada posición de la derecha en los propios medios de comunicación.¹⁰⁹

107. R. Bruce McColm, «El Salvador: Peaceful Revolution or Armed Struggle?», *Perspectives on Freedom I*, Freedom House, Nueva York, 1982; James Nelson Goodsell, «Freedom House Labels US Reports on Salvador Biased», *Christian Science Monitor* (3 de febrero de 1982).

108. Para una discusión sobre la opinión de Ledeen sobre los medios de comunicación, véase Herman and Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 166-170.

109. Entre los colaboradores de la AIM se cuentan la Reader's Digest Association y la DeWitt Wallace Fund, Walter Annenberg, sir James Goldsmith (propietario del francés *L'Express*) y E. W. Scripps II, presidente de una red de prensa, radio y televisión.

Los productores de respuestas críticas se refuerzan unos a otros y consolidan el mando de la autoridad política en sus actividades de gestión de noticias. El gobierno es uno de los mayores productores de estas respuestas críticas, que ataca, amenaza y «corrige» habitualmente a los medios de comunicación, e intenta poner freno a cualquier desviación de la línea establecida. La propia gestión de las noticias está diseñada para producir estas respuestas críticas. Durante su mandato, Reagan apareció repetidamente en televisión para destilar su encanto ante millones de telespectadores, muchos de los cuales censuraron a los medios de comunicación cuando éstos osaron criticar al «gran comunicador».¹¹⁰

1.5. EL ANTICOMUNISMO COMO MECANISMO DE CONTROL

El último filtro es la ideología del anticomunismo. El comunismo, el peor de los males, ha sido siempre el fantasma temido por los propietarios, puesto que amenaza las raíces mismas de su posición de clase y de su status superior. Las revoluciones soviética, china y cubana representaron un trauma para las elites occidentales, y los continuos conflictos y los profusamente divulgados abusos de los estados comunistas han contribuido a que la oposición al comunismo se haya convertido en el primer principio de la ideología y de la política occidentales. Esta ideología ayuda a movilizar a la población contra un enemigo, y dado que éste es un concepto difuso puede utilizarse contra cualquier persona que propugne una política que amenace los intereses de la propiedad o apoye los acuerdos con los estados comunistas y los radicales. De esta manera ayuda a fragmentar a los movimientos obreros y de izquierdas, y actúa como mecanismo de control político. Si el triunfo del comunismo es el peor de los resultados imaginables, el apoyo al fascismo en el extranjero queda justificado como mal menor. En similares térmi-

110. George Skelton, corresponsal en la Casa Blanca de *Los Angeles Times*, señaló que en lo concerniente a los errores consumados por Reagan, «escribes el artículo una vez, dos, y recibes un montón de correspondencia que dice: "Te estás metiendo con él, y vosotros, los chicos de la prensa, también cometéis errores". Y los editores son sensibles a estas cosas, de modo que al cabo de un tiempo los artículos dejan de salir. Estamos intimidados» (citado en Hertsgaard, «How Reagan Seduced Us»).

nos se argumenta la oposición a los socialdemócratas que son demasiado débiles con los comunistas y «están en sus manos».

Los liberales del país, a quienes con frecuencia se acusa de ser procomunistas o insuficientemente anticomunistas, se mantienen continuamente a la defensiva en un medio cultural en el cual el anticomunismo es la religión dominante. Si permiten que el comunismo, o algo que pueda etiquetarse como tal, triunfe en las provincias en las que ostentan el poder, los costes políticos son elevados. De todas maneras la mayoría de ellos han interiorizado totalmente esta religión, pero aún así están sometidos a grandes presiones para que demuestren sus credenciales anticomunistas. Esto hace que muchas veces se comporten como reaccionarios. Su apoyo ocasional a los socialdemócratas queda muchas veces colapsado cuando éstos no son suficientemente severos con los radicales de su circunscripción o con los grupos populares que se organizan en los sectores generalmente marginados. Durante su breve mandato en la República Dominicana, Juan Bosch atacó la corrupción de las fuerzas armadas y del gobierno, inició un programa de reforma agraria, emprendió un gran proyecto para la alfabetización masiva de la población, y mantuvo un gobierno notablemente abierto y un sistema de libertades civiles efectivas. Esta política amenazaba poderosos intereses internos e inalienables, y los Estados Unidos se molestaron por su independencia y por la ampliación de las libertades civiles a comunistas y radicales. Estaba llevando demasiado lejos la democracia y el pluralismo. Kennedy estaba «sumamente defraudado» por el gobierno de Bosch; el Departamento de Estado «se apresuró a amargar al primer presidente elegido democráticamente en la República Dominicana en más de treinta años». El derrocamiento de Bosch por los militares, tras nueve meses en el poder, contaba por lo menos con el apoyo tácito de los Estados Unidos.¹¹¹ Dos años más tarde, la administración Johnson invadió la República Dominicana para asegurarse de que Bosch no volviese a asumir el poder.

Los liberales de Kennedy estaban entusiasmados con el golpe militar y la destitución del gobierno popular de Brasil, en 1964.¹¹²

111. Piero Gleijeses, *The Dominican Crisis*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978, pp. 95-99.

112. Jan K. Black, *United States Penetration of Brazil*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1977, pp. 39-56.

En la época de Kennedy y Johnson se llevó a cabo un esfuerzo supremo para desarrollar los estados neofascistas de seguridad nacional. En los casos de la subversión estadounidense de Guatemala, en 1947 y 1954, y de los ataques militares en Nicaragua, en 1981 y 1987, las presunciones de vínculos y las amenazas comunistas provocaron que muchos liberales apoyasen las intervenciones contrarrevolucionarias, mientras que otros guardaron silencio, paralizados por el temor de ser salpicados con acusaciones de infidelidad a la religión nacional.

Cabe señalar que cuando se produce el fervor anticomunista, cesa la demanda de evidencias serias que apoyen las declaraciones de abusos «comunistas», y los impostores pueden medrar como fuentes de información. Desertores, informadores y un surtido de diversos oportunistas pasan a primer plano como «expertos», y allí permanecen aún después de ser desenmascarados como nada fiables, cuando no como francos embusteros.¹¹³ Pascal Delwit y Jean-Michel Dewaele comentan que también en Francia los ideólogos del anticomunismo «pueden hacer y decir cualquier cosa».¹¹⁴ Analizando el nuevo status de Annie Kriegel y Pierre Daix, dos antiguos stalinistas convencidos que actualmente gozan de un gran y acrítico predicamento en Francia,¹¹⁵ Delwit y Dewaele señalan que:

Si analizamos sus escritos, podemos encontrar en ellos todas las reacciones clásicas de quienes han sufrido un desengaño amoroso. Pero a nadie se le ocurre criticarles por su pasado, incluso aunque éste los haya marcado para siempre. Pueden haberse convertido, pero no han cambiado... nadie percibe las constantes, aunque son

113. Véanse, *supra*, pp. 61-62; e, *infra*, pp. 256-263.

114. «The Stalinists of Anti-Communism», en Ralph Miliband, John Saville y Marel Liebman, *Socialist Register, 1984: The Uses of Anticommunism*, Merlin Press, Londres, 1984, p. 337.

115. En 1949 Daix se refirió a los campos de concentración de Stalin como «uno de los mayores logros de la Unión Soviética», exponentes de «la completa supresión de la explotación del hombre por el hombre» (citado en Miliband *et al.*, *Socialist Register*, p. 337). Kriegel, antiguo funcionario de la línea dura del Partido Comunista, fue el autor de un libro de 1982 que explicaba que la KGB organizó las masacres de Sabra-Shatila como parte del programa soviético de terrorismo internacional, contratando terroristas alemanes vinculados a la OLP y con la táctica cooperación de la CIA, con el propósito de difamar a Israel. Para más información sobre este estudio en profundidad y su influencia, véase Noam Chomsky, *Fateful Triangle*, South End Press, Boston, 1983, pp. 291-292, 374-375.

evidentes. Sus *best sellers* son una prueba de que, gracias al apoyo de la crítica más indulgente y perezosa que uno pudiese esperar, se puede embaucar al público. Nadie denuncia o ni siquiera se da cuenta de la arrogancia de los elogios de ayer y las diatribas de hoy, nadie tiene en cuenta que jamás dan una prueba y que utilizan los improperios en lugar del análisis. Su hiperestalinismo trastocado, que adquiere la forma habitual de un exacerbado maniqueísmo, queda encubierto simplemente porque va contra el comunismo. La histeria no ha cambiado, pero obtiene una mejor acogida con su disfraz actual.¹¹⁶

El mecanismo de control anticomunista llega, a través del sistema, a ejercer una profunda influencia en los medios de comunicación. En épocas normales, así como en períodos de caza de rojos, los temas suelen ser esquematizados en términos de un mundo dividido en potencias comunistas y anticomunistas, con pérdidas y ganancias asignadas a los bandos contestatarios, y en el cual la propaganda en favor de «nuestro bando» se considera como una práctica informativa totalmente legítima. Son los medios de comunicación los que identifican, crean y ponen en el candelero a personas como Joe McCarthy, Arkady Shevchenko y Claire Sterling y Robert Leiken, o a una Annie Kriegel y a un Pierre Daix. La ideología y la religión del anticomunismo es un filtro potente.

1.6. LA DICOTOMIZACIÓN Y LAS CAMPAÑAS DE PROPAGANDA

Los cinco filtros reducen la gama de noticias que pasan las barreras, y limitan aún más acusadamente lo que puede convertirse en «grandes noticias», que son objeto de prolongadas campañas informativas. Por definición, las noticias procedentes de las fuentes principales del *establishment* satisfacen las máximas exigencias de los filtros y son rápidamente adaptadas por los medios de comunicación. Los mensajes que proceden y tratan de los disidentes y los débiles, de individuos y grupos desorganizados, nacionales y extranjeros, están en desventaja inicial por cuestiones de costes y credibilidad, y con frecuencia no concuerdan con la ideología o los intere-

116. *Socialist Register*, p. 345.

ses de los guardianes y otros partidos poderosos que influyen en el proceso de criba y filtrado.¹¹⁷

Así, por ejemplo, la tortura de los presos políticos y el ataque a los sindicatos en Turquía, aparecerá en los medios de comunicación tan sólo por las presiones de los activistas en favor de los derechos humanos y por las de grupos que tienen poca influencia política. El gobierno de los Estados Unidos apoyó al gobierno de ley marcial turco desde su inicio en 1980, y la comunidad empresarial estadounidense se muestra entusiasmada con los regímenes que profesan un ferviente anticomunismo, fomentan las inversiones extranjeras, reprimen a los sindicatos y apoyan fielmente la política exterior de los Estados Unidos (un conjunto de virtudes que suelen estar estrechamente relacionadas). Los medios que optan por explicar la violencia turca contra su propia ciudadanía tendrán que hacer frente a unos gastos extra para hallar y comprobar las fuentes de información, provocarán las respuestas críticas del gobierno, de las empresas y del engranaje conservador, y serán mal vistas por la comunidad empresarial (incluyendo los anunciantes) por embarcarse en una cruzada y unos intereses tan quijotescos. Acabarán quedándose solos por centrarse en víctimas que son *indignas* desde el punto de vista de los intereses dominantes en los Estados Unidos.¹¹⁸

Por el contrario, las protestas por los presos políticos y la violación de los derechos sindicales en Polonia fueron consideradas, por la administración Reagan y por la elite empresarial en 1981 como una causa noble, y, no fortuitamente, como una oportunidad para anotarse tantos políticos. Muchos dirigentes y articulistas asociados de los medios de comunicación pensaron lo mismo. Así, de fuentes oficiales en Washington era posible obtener informaciones y

117. Por supuesto, cuando los disidentes están preparados para denunciar a los enemigos oficiales, pueden pasar a través del sistema de filtrado de los medios de comunicación, tal como lo hacen los expertos ex comunistas descritos en «Anticomunism as a Control Mechanism», p. 29.

118. Véase el capítulo 2, «Víctimas dignas e indignas». En el caso turco, resulta interesante el rechazo de la prensa occidental a hacer públicos los ataques del gobierno turco contra la prensa, incluidos los reporteros de la prensa norteamericana en ese país. Ismet Ismet, reportero de la UPI, recibió una paliza a manos de la policía turca y fue encarcelado bajo cargos inventados. La UPI le aconsejó que no hiciera públicos los cargos contra él, y finalmente lo despidió por criticar la falta de compromiso en el tratamiento de su caso. Véase Chris Christiansen, «Keeping In With The Generals», *New Statesman*, 4 de enero de 1985.

enérgicos juicios sobre las violaciones de los derechos humanos en Polonia, y la dependencia de los disidentes polacos no provocó la respuesta crítica del gobierno de los Estados Unidos o de los engranajes preparados a tal efecto. Estas víctimas serán por lo general identificadas como *dignas* por los gestores de los filtros. Los medios de comunicación nunca explican *por qué* Andrei Sajarov es digno de atención y José Luis Massera, de Uruguay, indigno de ella; la atención y la dicotomización general se produce «naturalmente» como resultado de la actuación de los filtros, aunque el resultado es el mismo que si un comisario hubiese instruido a los medios de comunicación diciéndoles: «concéntrense en las víctimas de las potencias enemigas y olviden las víctimas de los amigos».¹¹⁹

119. Creemos que la misma dicotomización se aplica a la esfera doméstica. Por ejemplo, tanto los analistas británicos como los estadounidenses han señalado que los medios de comunicación arremeten periódicamente —y con gran indignación— contra los «timadores de la beneficencia pública», mientras paralelamente restan importancia y toman una actitud benévola ante los mucho más importantes abusos y fraudes fiscales cometidos por los hombres de negocios y los personajes acaudalados. Los medios de comunicación también hacen gala de una profunda desgana al examinar las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza. Peter Golding y Sue Middleton, tras una extensa discusión sobre la antigua «criminalización de la pobreza» y los ataques incesantes contra los gorriones de la beneficencia en Inglaterra, señalan que, al contrario, la evasión de impuestos es «aceptable, incluso loable»; que en la prensa, el evasor de impuestos «no es ya una víctima sino un héroe». Señalan, también, que «el máximo triunfo del bienestar capitalista» ha sido hacer casi invisibles las causas y la condición de la pobreza (*Images of Welfare: Press and Public Attitudes to Poverty*), Martin Robertson, Oxford, 1982, pp. 66-67, 98-100, 186, 193.

En un capítulo titulado «The Deserving Rich» (Los ricos dignos), A. J. Liebling señaló que también en los Estados Unidos, «la cruzada contra los indigentes es la cruzada favorita de los directores de periódicos» y que «no hay un concepto más querido de forma tan generalizada como el de los *pobres indignos* (*The Press*, Ballantine, Nueva York, 1964, pp. 78-79). Liebling detalló varios intentos de los medios de comunicación por mantener bajos los gastos de la beneficencia y los impuestos «diciendo que ellos [los pobres] tienen bienes ocultos, o mala reputación, o ambas cosas» (p. 79). Estas estrategias no sólo distraen sino que además ayudan a separar a la clase trabajadora con empleo de los desempleados y marginados, y hace que todos ellos se sientan excesivamente incómodos al participar en un sistema degradado de gorronería. Véase Peter Golding y Sue Middleton, «Attitudes to Claimants: A Culture of Contempt», en *Images of Welfare*, pp. 169 ss. Las anécdotas inventadas por el presidente Reagan sobre los timadores de la beneficencia, y su completo silencio sobre los timos a gran escala de sus empresarios patrocinadores, responden a una larga tradición de codicia cínica y despiadada.

Los informes de los abusos sufridos por las víctimas dignas no sólo pasan a través de los filtros; pueden ser también la base de ininterrumpidas campañas propagandísticas. Si el gobierno o la comunidad empresarial y los medios de comunicación consideran que una historia es útil y dramática a la vez, se centran intensivamente en ella y la utilizan para instruir al público. Así ocurrió, por ejemplo, en el derribo soviético de un avión de las líneas aéreas coreanas KAL 007 a principios de septiembre de 1983, que permitió una extensa campaña de denigración de uno de los enemigos oficiales e hizo avanzar considerablemente los planes de rearme de la administración Reagan. Como Bernard Gwertzman señalaba con gran satisfacción en el *New York Times* del 31 de agosto de 1984, funcionarios estadounidenses «afirman que las críticas mundiales por cómo los soviéticos han manejado la crisis ha reforzado a los Estados Unidos en sus relaciones con Moscú». Sin embargo, que los israelíes abatieran un avión civil de las líneas aéreas libias en febrero de 1973 no despertó las protestas occidentales, no hubo denuncias por el «asesinato a sangre fría»¹²⁰ ni tampoco ningún boicot. El *New York Times* explicó este trato diferente precisamente en términos de utilidad: «nada útil puede resultar de un áspero debate sobre la atribución de la culpabilidad por el derribo de un avión libio en la península del Siuai la pasada semana».¹²¹ Existía un «propósito extremadamente útil» por el cual centrarse en el acto soviético, que hizo poner en marcha una campaña propagandística masiva.¹²²

Por lo general las campañas propagandísticas están estrechamente sincronizadas con los intereses de la elite. La caza de rojos de 1919-1920 fue muy útil para abortar la campaña de organización

120. Para una discusión completa sobre este tratamiento dicotomizado, véase Edward S. Herman, «Gatekeeper versus Propaganda Models: A Critical American Perspective», en Peter Golding, Graham Murdock y Philip Schlesinger, eds., *Communicating Politics*, Holmes & Meier, Nueva York, 1986, pp. 182-194.

121. Editorial, 1 de marzo de 1973. Aparentemente los soviéticos no sabían que estaban abatiendo un avión civil, pero la noticia fue cubierta por funcionarios estadounidenses, y la falsa alegación de que sabían que estaban destruyendo un avión civil proporcionó la base para una crítica extremadamente dura contra los soviéticos por su bárbaro comportamiento. Los israelíes admitieron abiertamente que sabían que estaban abatiendo un avión civil, pero, en este caso, esta cuestión no despertó ningún interés en Occidente.

122. El *New York Times Index*, por ejemplo, tiene siete páginas enteras de menciones del incidente KAL 007, sólo en el mes de septiembre de 1983.

sindical que siguió a la primera guerra mundial, en el ramo siderometalúrgico y en otras industrias. La caza de rojos de Truman y McCarthy colaboró a inaugurar la guerra fría y la economía de guerra permanente, y sirvió también para debilitar la coalición progresista de los años del *New Deal*. La atención crónica que se dedica a la inquietante situación de los disidentes soviéticos, a los asesinatos del enemigo en Camboya y a la conexión búlgara sirven para debilitar el síndrome de Vietnam, para justificar una enorme concentración armamentística y una política exterior más agresiva, y para distraer la atención de la redistribución hacia arriba de la renta, lo que constituía el núcleo del programa económico doméstico.¹²³ Los recientes ataques de desinformación y propaganda acerca de Nicaragua han sido necesarios para desviar las miradas de las barbaridades de la guerra en El Salvador, y para justificar la creciente inversión estadounidense en la contrarrevolución en América Central.

Inversamente, las campañas propagandísticas *no* se pondrán en marcha en los casos en que las persecuciones, por masivas, ininterrumpidas y dramáticas que sean, no satisfagan el test de utilidad para los intereses de la elite. Así, mientras que la atención dedicada a Camboya en la era de Pol Pot (y después) fue insuperablemente útil, puesto que Camboya había caído en manos de los comunistas y podían extraerse útiles lecciones prestando atención a sus víctimas, las numerosas víctimas de los bombardeos estadounidenses *anteriores* a la toma del poder de los comunistas fueron escrupulosamente ignoradas por la prensa estadounidense de elite. Tras la expulsión de Pol Pot por los vietnamitas, los Estados Unidos empezaron calladamente a apoyar a este criminal «peor que Hitler», sin que la preusa prestase a ello mucha atención, pues una vez más se acomodó al orden del día de la política nacional.¹²⁴ La atención a las masacres indonesias de 1965-1966, o a las víctimas de la invasión indonesia de Timor Oriental, desde 1975 en adelante, hubieran sido también claramente inútiles como base para una campaña de los

123. Las orgías de patriotismo, como los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, los vuelos de la lanzadera espacial, y el «Liberty Weekend», actúan de forma similar «reconciliándonos a todos». Véase Elayne Rapping, *The Looking Glass World of Nonfiction TV*, South End Press, Boston, capítulo 5, «National Rituals».

124. Véase *infra*, capítulo 5.

medios de comunicación, porque Indonesia es un país aliado y cliente de los Estados Unidos que mantiene las puertas abiertas a las inversiones occidentales, y porque, en el caso de Timor Oriental, los Estados Unidos eran en gran parte responsables de la carnicería. Lo mismo podemos decir de las víctimas del terror de Estado en Chile y Guatemala, pases clientes de los Estados Unidos cuyas estructuras institucionales básicas, entre las que se cuenta el sistema de Estado del terror, han sido entronizadas y mantenidas por, o con la crucial ayuda de, la potencia estadounidense, de la que siguen siendo clientes. Las campañas propagandísticas en favor de estas víctimas podrían entrar en conflicto con los intereses gubernamentales, empresariales y militares y, en nuestro modelo, no podrían pasar a través del sistema de filtrado.¹²⁵

Las campañas de propaganda pueden ser iniciadas indistintamente por el gobierno o por una de las empresas de medios de comunicación más importantes. Las campañas para desacreditar al gobierno de Nicaragua, para apoyar las elecciones salvadoreñas como un ejercicio de democracia legitimadora, y para utilizar el derribo soviético del avión coreano KAL 007 como medio para movilizar el apoyo de la opinión pública en favor del rearme, fueron iniciadas y fomentadas por el gobierno. Las campañas para dar publicidad a los crímenes de Pol Pot y el presunto complot soviético para asesinar al Papa fueron iniciadas por el *Reader's Digest*, con el enérgico apoyo y seguimiento de la cadena de televisión de la NBC, el *New York Times* y otras grandes empresas de medios de comunicación.¹²⁶ Algunas campañas propagandísticas son iniciadas conjuntamente por el gobierno y los medios, y todas ellas precisan la colaboración de estos últimos. El secreto de la unidireccionalidad política de las

125. En los temas en los que la elite está seriamente dividida, se permitirán voces disidentes en los medios de comunicación, y la pomposidad de las declaraciones así como la suspensión de los juicios críticos estarán sujetos a una cierta moderación. Véase la discusión sobre este punto y ejemplos de casos concretos en el prefacio, pp. 15-16.

126. El cometido del gobierno en estos casos no puede ser minimizado, dados los estrechos lazos entre el *Reader's Digest* y la CIA y el hecho de que Paul Henze, una de las principales fuentes e instigador de la campaña de la Conexión Búlgara, fue durante un largo período funcionario de la CIA. Sobre la conexión CIA-*Readers' Digest*, véase Epstein, «The Invention of Arkady Shevchenko», pp. 40-41. Sobre Henze, véase el capítulo 4, pp. 238 y ss. En cuanto a la posibilidad de que una influencia del *Reader's Digest* en la guerra de Camboya fuese debida en parte a un esfuerzo desinformador de la CIA, véase p. 335, y las fuentes citadas.

campañas propagandísticas de los medios de comunicación reside en el sistema de múltiples filtros que acabamos de comentar: los medios de comunicación harán desaparecer rápidamente aquellas historias que resulten perjudiciales para los grandes intereses, si es que tales historias habían logrado aparecer en algún momento.¹²⁷

Para las historias *útiles*, el proceso empezará con una serie de filtraciones, conferencias de prensa y libros blancos del gobierno, etc., o cuando uno o varios medios de comunicación la inician con artículos tales como el «Murder of a Gentle Land» (La aniquilación de un país apacible) (Camboya) de Barron y Paul, o como el «The Plot to Kill the Pope» (El complot para asesinar al Papa) de Claire Sterling, publicados ambos en el *Reader's Digest*. Si los otros medios de comunicación se sienten atraídos por la historia, la continuarán con sus propias versiones, y así la familiaridad con el tema hará que éste se convierta rápidamente en material noticiable. Si los artículos están escritos en un estilo seguro y convincente, los medios de comunicación no los someten a críticas o a interpretaciones alternativas y, con el apoyo que les prestan las personalidades reconocidas, los temas propagandísticos pasan rápidamente a ser considerados como ciertos aunque no haya ninguna evidencia real que dé fe de ello. Esto acostumbra a limitar aún más los puntos de vista divergentes, dado que pueden entrar en conflicto con una creencia popular ya establecida, lo que a su vez abre nuevas oportunidades para declaraciones más exageradas, que se pueden efectuar sin temor a grandes repercusiones. Las afirmaciones igualmente descabelladas que contradijesen los puntos de vista oficiales provocarían una potente respuesta crítica, de manera que el proceso quedaría controlado por el gobierno y el mercado. Este tipo de protecciones no existen cuando se trata de declaraciones apoyadas por el sistema; en este caso las respuestas críticas harán que los medios de comunicación se comporten más histéricamente ante el diablo enemigo. Los medios no sólo suspenden sus juicios críticos y su celo investigador, sino que compiten para encontrar nuevas maneras de apoyar la última verdad que se acaba de establecer. Los temas y los hechos,

127. Proporcionamos varios ejemplos de estas cuestiones en los capítulos siguientes. El caso Watergate, y más recientemente, al final de la era Reagan, el descubrimiento del caso Irán-Contragate, propuestos como ejemplos opuestos, se discuten en el capítulo 6.

e incluso análisis cuidadosos y bien documentados que son incompatibles con el recién institucionalizado tema, son eliminados o ignorados. Si el tema se agota por el propio peso de sus falsedades, los medios de comunicación recogerán tranquilamente sus bártulos y se dedicarán a otra cuestión.¹²⁸

Con la utilización del modelo de propaganda podemos anticipar no sólo las definiciones de dignidad basadas en la utilidad y la atención dicotomizada basada en el mismo criterio, sino que podemos anticipar también que las informaciones sobre las víctimas dignas e indignas (o los estados amigos o enemigos) diferirán en *calidad*. Es decir, podemos esperar una utilización profusa y acrítica de las fuentes oficiales de los Estados Unidos y sus regímenes clientes, mientras que cuando se trate de estados enemigos se utilizarán los refugiados u otras fuentes de información disidentes.¹²⁹ Podemos preveer la aceptación acrítica de ciertas premisas al tratar de nuestros asuntos y de los de nuestros amigos, como por ejemplo que nuestro Estado y nuestros dirigentes buscan la paz y la democracia, se oponen al terrorismo y dicen la verdad, premisas que no se aplicarán cuando hablemos de nuestros enemigos. También cabe esperar la utilización de diferentes criterios de valoración, de manera que lo que se presenta como maldad de los estados enemigos será presentado como un incidente secundario cuando se trate de nosotros o de nuestros amigos.¹³⁰ Lo que está

128. Esto se aplica claramente al caso de la supuesta Conexión Búlgara del complot para asesinar al Papa. Véase *infra*, capítulo 4.

129. Hemos advertido en otras partes que el *New York Times* confiaba regularmente en oficiales indonesios para «presentar los hechos» sobre Timor Oriental, que estaba siendo invadido por Indonesia, y que ignoraba a los refugiados, a las fuentes de la Iglesia, etc. En contraste, la principal fuente del *Times* para informar sobre los acontecimientos de la posguerra en Vietnam y Camboya fueron los refugiados, no los funcionarios del Estado (*The Washington Connection and Third World Fascism*, South End Press, Boston, 1979, pp. 151-152, 169-176, 184-187). Sobre la tentativa de eludir implicaciones obvias, véase capítulo 5, «La era de Pol Pot», pp. 315-322.

130. Así, cuando la CIA dirige a los contras nicaragüenses hacia «objetivos blandos» tales como cooperativas agrícolas, con explícita aprobación del Departamento de Estado, los comentaristas de los medios de comunicación, o bien aplauden o bien ofrecen disquisiciones filosóficas sobre si tales objetivos son legítimos, dado que están defendidos por una milicia ligeramente armada. Los ataques terroristas contra los kibbutz israelíes, que también están defendidos por colonos armados, son contemplados de un modo distinto. Para más detalles, véase Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988.

en el día al tratar un caso, estará fuera de él cuando discutamos el otro.¹³¹ Asimismo podemos esperar que el gran afán investigador de la maldad del enemigo y de las responsabilidades de los altos funcionarios en los abusos que cometen los estados enemigos, disminuya al estudiar estos temas cuando se trata de nosotros y de nuestros estados amigos.

La calidad de las informaciones queda también demostrada de forma más directa y brusca en el emplazamiento, los titulares, el estilo literario y otros recursos para movilizar el interés y la indignación. En los artículos de opinión, podemos anticipar abundantes limitaciones en el abanico de opiniones que se permiten. Nuestra hipótesis es que las víctimas dignas recibirán un trato prominente y dramático, que serán humanizadas, y que su sacrificio obtendrá un tratamiento detallado y contextualizado que generará el interés y el sentimiento compasivo del lector. Por el contrario, las víctimas indignas merecerán tan sólo una breve referencia, una mínima humanización y un tratamiento descontextualizado que no excite ni enfurezca.

Mientras tanto, dado el poder de las fuentes de información del *establishment*, de los mecanismos de respuestas críticas y de la ideología anticomunista, podemos anticipar que se producirán protestas porque las víctimas dignas están siendo gravemente descuidadas, que las indignas reciben un tratamiento demasiado generoso y acrítico,¹³² que la adversión (si no hostilidad) contra el gobierno por parte de los medios de comunicación liberales explica nuestras dificultades en recabar apoyo para la última aventura nacional de intervención contrarrevolucionaria.

131. La forma en que varía lo que se considera actualidad y la expresión de la misma, se ve con gran claridad en el tratamiento de las elecciones tercermundistas, según reciban éstas o no el apoyo estadounidense, tal como se describe en el capítulo 3.

132. Las afirmaciones de Michael Ledeen son clásicas en su audacia. Según él, 1) «la palabra de Gaddafi tiene más credibilidad en los medios de comunicación que la del gobierno estadounidense; y 2) «Se presta mucha más atención y reciben críticas más duras las violaciones relativamente menores de los Derechos Humanos acaecidas en un país cliente (especialmente si está bajo el gobierno autoritario de la derecha) que los pecados mucho más graves de países que nos son hostiles...» (*Grave New World*, Oxford University Press, Nueva York, 1985, p. 131; la superior credibilidad de Gaddafi se describe en las pp. 132-133). Véase el capítulo 2 de este libro para documentación sobre la realidad del tratamiento que los medios de comunicación dispensan a los abusos cometidos por estados clientes y enemigos.

En resumen, una aproximación a los medios de comunicación desde la propaganda evidencia una sistemática y exagerada dicotomización política en la cobertura informativa, que se basa en su utilidad para los importantes intereses de los poderes domésticos. Todo ello puede observarse en la dicotomizada elección de las historias y en la cantidad y calidad de la información. En los siguientes capítulos veremos que esta dicotomización se produce masiva y sistemáticamente en los medios de comunicación: no sólo se trata de elecciones en función de la publicidad o comprensibles en términos de ventajas para el sistema, sino que la forma de tratamiento de los materiales favorables o inconvenientes (emplazamiento, tono, contexto, amplitud de tratamiento) se diferencian en una dirección que está al servicio de los fines políticos.

2. VÍCTIMAS DIGNAS E INDIGNAS

Un sistema de propaganda consecuente presentará a las personas que han sido maltratadas en los estados enemigos como víctimas «dignas» de atención, mientras que aquellas tratadas con igual o mayor severidad por el propio gobierno o el gobierno de los estados clientes serán víctimas «indignas» de dicha atención. Esta diferencia de trato queda patente en el alcance y el carácter de la atención e indignación que reflejan las informaciones. En este capítulo mostraremos cómo en la práctica las definiciones de «dignidad» o «merecimiento» de los medios de comunicación de los Estados Unidos son sumamente políticas y se adecúan perfectamente a las expectativas de un modelo propagandístico. Mientras este tratamiento diferencial se produce a gran escala, los medios de comunicación, los intelectuales y la opinión pública pueden permanecer ajenos a la realidad y mantener la moral alta y un aire santurrón, que es la mejor prueba de la efectividad del sistema de propaganda.

2.1. JERZY POPIELUSZKO FRENTE A CIEN VÍCTIMAS RELIGIOSAS EN AMÉRICA LATINA

Se puede establecer una comparación significativa entre el tratamiento que los medios de comunicación dedicaron a Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco asesinado por la policía de su país en octubre de 1984, y la información que esos medios dieron del asesinato de sacerdotes en el área de influencia de los Estados Unidos. En nuestro modelo, Popieluszko, asesinado en un Estado enemigo, sería una víctima «digna» de atención, mientras que los sacerdotes asesinados en nuestros estados clientes de América Latina no mere-

cerían igual trato. En el primer caso es de esperar que los medios de comunicación desencadenen una explosión propagandística, lo que no sucederá en el segundo.

2.1.1. Aspectos cuantitativos de la cobertura informativa

En la línea 1 del cuadro 2.1 se muestra la cobertura informativa que las publicaciones *New York Times*, *Time*, *Newsweek* y el programa televisivo *CBS News* dispensaron al asesinato de Popieluszko y al juicio de sus asesinos. A partir de la línea 2 hasta la 5 se resume la información que dichos medios dedicaron a los asesinatos de religiosos en América Latina, obra de agentes de los estados clientes de Estados Unidos.¹ La línea 2 muestra la cobertura informativa dispensada a setenta y dos individuos de una lista de religiosos latinoamericanos «mártires» enumerada por Peny Lernoux en su libro *Cry of the People*. La línea 3 describe la que merecieron los asesinatos de veintitrés sacerdotes, misioneros y otros religiosos, perpetrados en Guatemala entre enero de 1980 y febrero de 1985. La línea 4 resume la cobertura informativa del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, abatido por un disparo en marzo de 1980. Y la línea 5 resume la información que se publicó acerca del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en El Salvador, en diciembre de 1980.

La atención que los medios de comunicación dedicaron al asesinato de Jerzy Popieluszko no sólo empequeñece la que se dedicó a víctimas «menos dignas» de ella, sino que constituye un notable episodio propagandístico y de manipulación de noticias. Ninguna de las víctimas del llamado mundo libre ha recibido un trato com-

1. En un discurso del 19 de julio de 1986, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respondiendo a cargos de persecución religiosa, aseguró que de los 138 religiosos asesinados y 278 secuestrados o desaparecidos en América Central desde 1979 (cifra que incluye a los Lay Delegates of the Word), ninguno había sido víctima del gobierno nicaragüense (*Central America News Update*, 4 de agosto de 1986). Sin embargo, muchos habían sido asesinados por la contra, según la tradición en curso de la violencia somocista. Ver Andrew Reding, «The Church in Nicaragua», *Monthly Review* (julio-agosto de 1987), pp. 34-36. La gran mayoría fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y los ejércitos de los estados clientes de los Estados Unidos, o por escuadrones de la muerte asociados a éstos.

parable.² El *New York Times* se ocupó del caso Popieluszko diez veces en portada, y la intensidad de las informaciones fue tal que aseguró que sus lectores supiesen quién era Popieluszko, que éste había sido asesinado y que esta sórdida violencia se había producido en un Estado comunista. Por el contrario, el público no encontró referencia alguna a los nombres del padre Augusto Ramírez Monasterio, superior de la orden franciscana en Guatemala, asesinado en noviembre de 1983, ni al del padre Miguel Ángel Montufar, sacerdote guatemalteco que desapareció el mismo mes que Popieluszko, ni supo nada de, literalmente, docenas de otros religiosos que fueron asesinados en las provincias de América Latina, aunque en algunas ocasiones estas muertes tuviesen una repercusión considerable en la prensa local de los países donde habían ocurrido.

En realidad, *ninguna* de las personas de gran relieve asesinadas en América Latina, incluyendo al arzobispo Romero y a las cuatro religiosas estadounidenses, obtuvo en ningún medio una atención comparable a la otorgada a Popieluszko. Mostraremos a continuación cómo también la *calidad* del tratamiento que reciben las víctimas difiere sustancialmente de un caso a otro. Mientras que la cobertura informativa que merece una víctima «digna» suele prodigar los detalles sangrientos y las expresiones que resaltan la atrocidad cometida y piden justicia, las informaciones que se refieren a víctimas «menos dignas» están redactadas en un tono menor, con la intención de restarles carga emocional, y suelen aludir a sentidas y filosóficas generalidades acerca de la omnipresencia de la violencia y de la tragedia inherentes a la vida humana. Esta diferencia cualitativa se hace patente tanto en la ubicación de las noticias como en los editoriales que se dedican a cada caso: diez artículos en portada sobre Popieluszko confirman la importancia del asunto, como el de que se dediquen tres editoriales a denunciar a los polacos, y que no se publique ni un solo editorial denunciando los asesinatos de las víctimas del otro lado.

Si comparamos las líneas 1 y 6 del cuadro 2.1, veremos que, en cada una de las tres categorías de medios de comunicación, la

2. En *The Real Terror Network*, South End Press, Boston, 1982, Edward Herman muestra que en los años 1976-1981, la única cobertura del *New York Times* sobre la persecución de individuos en el extranjero fue la de los disidentes soviéticos, especialmente Sharansky y Sajarov (pp. 169-199), aunque se produjeron numerosos casos tanto o más graves en los dominios de los Estados Unidos.

cobertura informativa dedicada a la víctima digna, Popieluszko, supera la que se dedicó a las otras cien víctimas juntas. Sospechamos que la atención dedicada al caso Popieluszko puede haber superado la que se ha dispensado a los cientos de religiosos asesinados en América Latina desde la segunda guerra mundial, los más importantes de los cuales están incluidos en el centenar que hemos seleccionado. El cuadro nos permite calcular también el mérito relativo de las víctimas de todo el mundo, midiéndolo por la importancia que les han otorgado los medios de comunicación estadounidenses. El mérito de la víctima Popieluszko puede tasarse entre 137 y 179 veces más que el de una víctima de los estados clientes de los Estados Unidos;³ o invirtiendo los términos, un sacerdote asesinado en América Latina tiene cien veces menos mérito que un sacerdote asesinado en Polonia.

A veces se afirma que las víctimas que merecen menor atención por parte de los medios de comunicación estadounidenses reciben ese trato porque sus asesinatos han ocurrido en zonas muy lejanas que son tan diferentes a nosotros que resulta fácil no prestarles atención.⁴ Sin embargo, Polonia está bastante más lejos que América Central, y sus vínculos culturales y comerciales con los Estados Unidos no son mayores que los de los países de América Latina en general. De los veintitrés religiosos asesinados en Guatemala (línea 3), tres eran ciudadanos estadounidenses, aunque ni siquiera esta consideración provocó la reacción de los medios de comunicación. Tampoco la violación y el asesinato de las cuatro religiosas estadounidenses a manos de miembros de la Guardia Nacional salvadoreña suscitó una atención comparable a la dedicada a Popieluszko. La valoración relativa del *New York Times* de este tema representa menos de una décima parte que la del caso Popieluszko,

3. Calculado dividiendo el número de artículos e informativos de la *CBS* dedicados a Popieluszko por el número que trata del centenar de víctimas y multiplicando el resultado por 100.

4. Anthony Lewis dice que los disidentes soviéticos «son suficientemente parecidos a nosotros para que nos identifiquemos con ellos» («A Craving for Rights», *New York Times*, 31 de enero de 1977), un punto de vista parcialmente válido, ya que la mayor parte de las víctimas de la política exterior norteamericana son campesinos tercermundistas, pero no válido en tanto que las víctimas de estados clientes tan «parecidos a nosotros» como puedan serlo los disidentes soviéticos no reciben una atención comparable, tal como muestran los casos mencionados y la referencia de la nota 2.

CUADRO 2.1. Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 1: Un sacerdote polaco asesinado frente a cien religiosos asesinados en América Latina

Víctimas	NEW YORK TIMES				TIME y NEWSWEEK				CBS NEWS			
	Artículos ¹ N.º de la línea 1	Medición en pulgadas N.º de la línea 1	Artículos en portada N.º de la línea 1	Editoriales ¹ N.º de la línea 1	Artículos ¹ N.º de la línea 1	Medición en pulg. N.º de la línea 1	N.º de programas informativos ¹ N.º de la línea 1	N.º de programas informativos nocturnos N.º de la línea 1	N.º de programas informativos ¹ N.º de la línea 1	N.º de programas informativos nocturnos N.º de la línea 1		
1. Jerzy Popieluszko, asesinado el 19 de octubre de 1984	78 (100)	1.183,0 (100)	10 (100)	3 (100)	16 (100)	313,0 (100)	46 (100)	23 (100)	46 (100)	23 (100)		
2. 72 víctimas religiosas en América Latina, 1964-1978 ²	8 (10,3)	117,5 (9,9)	1 (10)	—	—	16 (5,1)	—	—	—	—		
3. 23 religiosos asesinados en Guatemala en 1980/feb. 1985 ⁴	7 (9,0)	66,5 (5,6)	—	—	2 (12,5)	34,0 (10,9)	2 (4,3)	2 (8,7)	2 (4,3)	2 (8,7)		
4. Oscar Romero asesinado el 18 de marzo de 1980	16 (20,5)	219,0 (18,5)	4 (40)	—	3 (18,8)	86,5 (27,6)	13 (28,3)	4 (17,4)	13 (28,3)	4 (17,4)		
5. 4 religiosas, asesinadas en El Salvador, 2 dic. 1980	26 (33,3)	201,5 (17,0)	3 (30)	—	5 (31,2)	111,0 (35,5)	22 (47,8)	10 (43,5)	22 (47,8)	10 (43,5)		
6. Total de líneas 2-5	57 (73,1)	604,5 (51,1)	8 (80)	—	10 (62,5)	247,5 (79,1)	37 (80,4)	16 (69,6)	37 (80,4)	16 (69,6)		

1. La cobertura informativa se refiere a un período de 18 meses a partir del primer informe sobre la desaparición o asesinato de la víctima.
2. Relacionados en Penny Lernoux, *Cry of the People* (Doubleday, Nueva York, 1980), pp. 464-465. Hemos omitido los nombres de siete mártires que se habían unido a las guerrillas. Lernoux señala que su lista dista mucho de ser completa, y que en ella figuran tan sólo las víctimas más conocidas.
3. El *CBS News Index* empezó en 1975; hemos dejado la cifra en blanco porque no se cubren los primeros años de este grupo.
4. Se trata solamente de un listado parcial, extraído de unas tablas del «Religious Killed or "Disappeared" in Guatemala», publicadas periódicamente por CONFREGUA, Conferencia de Religiosos de Guatemala.

y luego mostraremos que la cobertura informativa acerca de estas víctimas estadounidenses evidenció una indignación y una pasión considerablemente menores que las constatables en la información relacionada con el sacerdote polaco.⁵

La atención que se dedicó a Popieluszko fue algo sobredimensionada por el rápido enjuiciamiento de sus asesinos, y por el hecho de que era un juicio acerca del cual los periodistas estadounidenses podían informar con toda libertad. Por el contrario, casi todos los asesinatos de las víctimas latinoamericanas fueron realizados por fuerzas oficiales o paramilitares, se trataba de crímenes que jamás fueron investigados o perseguidos por la ley, o en algunas ocasiones incluso (como en el caso de Romero y de las cuatro religiosas estadounidenses) contaron con una protección oficial activa. Sólo en el caso de las cuatro mujeres asesinadas en El Salvador hubo presiones suficientes para forzar algún tipo de investigación y de procedimiento legal. Como tendremos ocasión de ver, el subsiguiente proceso apenas tuvo repercusión en los medios de comunicación (en contraste con el intenso interés que manifestaron por el juicio del caso Popieluszko); la prensa por lo demás no hizo comentario alguno ni investigó la significación del hecho que este juicio, relativamente serio, tuviera lugar en la «totalitaria» Polonia, mientras que en las llamadas «democracias incipientes» de algunos países pertenecientes a la esfera de influencia de los Estados Unidos se perpetraban diariamente crímenes de Estado sin que se produjera ninguna investigación o juicio contra los asesinos.

2.1.2. La cobertura informativa del caso Popieluszko

Jerzy Popieluszko era un sacerdote activista y un fuerte puntal del movimiento Solidaridad polaco. En un intento de eliminarlo e intimidarlo, el 19 de octubre de 1984 miembros de la policía secreta polaca lo secuestraron, a continuación le apalearon, ataron y amordazaron y finalmente lo arrojaron a un estanque. Su cuerpo fue

5. No es una coincidencia que el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, y la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, realmente defendieran el asesinato de las mujeres americanas, tal como se describe en la página 114.

encontrado algunos días después. Merced a la airada reacción que el suceso desencadenó, los policías directamente involucrados en el asesinato fueron rápidamente identificados y finalmente juzgados y condenados a duras penas de cárcel. Como ya hemos visto, en Estados Unidos se dedicó gran atención al caso, y además la calidad de la información estaba sumamente bien proyectada hacia la consecución de tantos políticos, y contrasta abiertamente con la calidad de la cobertura informativa dedicada a víctimas menos dignas.

2.1.2 (a). *Amplitud y reiteración de los detalles del asesinato y de los daños infligidos a la víctima.* La información sobre el asesinato de Popieluszko se distinguía por la profusión de detalles acerca del trato que sufrió a manos de la policía y al estado de su cadáver. Es más, esos detalles se repetían a la menor oportunidad. El estado de su cadáver fue descrito tras el hallazgo del mismo, al presentarse en el juicio las pruebas médicas, y durante el testimonio de los autores del crimen.⁶ Una y otra vez se describía la tensión emocional y la culpabilidad manifestadas por los oficiales de policía durante el juicio, entremezclando estos comentarios con el relato de cómo Popieluszko suplicó por su vida, poniendo así de manifiesto la brutalidad del acto. Se reprodujeron numerosas fotos poco afortunadas de los policías durante el juicio, añadiendo así un detalle dramático que reforzaba la imagen de su crueldad. Los policías aparecían sentados en la sala del juzgado, uno de ellos con «un tic nervioso en el lado derecho de su cara que hacía que su oscuro

6. Aparte de los detalles aparecidos en el *New York Times* que se muestran en el cuadro 2.2, hubo al menos otros cuatro artículos del *New York Times* que repitieron la misma información, y detalles parecidos fueron ofrecidos en *Time*, *Newsweek* y el programa *CBS News*. Para citar un ejemplo entre los muchos de *Time*, un artículo titulado «Grim Tale: Details of a Martyr's Death» (19 de noviembre de 1984), dice así: «Los funcionarios eclesiásticos que vieron el cuerpo del sacerdote martirizado informaron que había sido golpeado salvajemente. Le habían atado con una cuerda el cuello, las muñecas y los tobillos, de modo que se estrangulara si forcejeaba para librarse. Le habían cortado tres dedos de la mano izquierda y mostraba profundas marcas en los brazos. La cantidad de agua contenida en los pulmones indica que seguía respirando, aunque estuviera inconsciente, cuando lo arrojaron, atado de pies y manos, a un depósito». El *Time* repite estos y otros detalles con evidente deleite en cuanto tiene ocasión. Como veremos, el *Time* es menos pródigo en detalles cuando se trata de víctimas indignas.

bigote se contrajese de una manera incontrolable», presentado «un testimonio entrecortado por las lágrimas que confirió al juicio alguno de sus momentos más dramáticos» (*Time*, 18 de febrero de 1985). O bien, los policías lloraban abiertamente o inclinaban sus cabezas ante la horrible evidencia. La figura de Popieluszko fue humanizada, con descripciones de sus características físicas y de su personalidad que hicieron de él algo más que una víctima lejana.⁷ En resumen, el acto de violencia y sus efectos sobre Popieluszko se presentaron de manera que generasen el máximo impacto emocional sobre los lectores. La acción fue cruel y merecía la presentación que de él se hizo. Las acciones contra las víctimas menos dignas son crueles también, pero reciben un trato muy diferente.

2.1.2 (b). *El énfasis en la indignación, la conmoción y en las peticiones de justicia.* Los artículos sobre el asesinato de Popieluszko eran en gran medida expresiones o declaraciones de condena, indignación, profunda conmoción, manifestaciones de duelo y exigencias de que se hiciese justicia. Dedicaban una atención constante y compasiva a los manifestantes, los que iban de luto, los que lloraban, a quienes paraban simbólicamente en sus trabajos, a las misas que se celebraban en memoria de la víctima y a las expresiones de condena, la mayoría de fuentes no oficiales. La población «continuaba llorando su pérdida» y «aumentaba la indignación pública»; el Papa estaba profundamente conmovido e incluso Jaruzelski condenaba la acción. Como consecuencia de esa repetición cotidiana de condena e indignación se despertó una viva atención por una terrible injusticia, el gobierno polaco se puso a la defensiva y probablemente esa misma atención contribuyó a que tomasen medidas de respuesta a esa acción.

2.1.2 (c). *La búsqueda de responsabilidades en la cumbre.* Artículo tras artículo, los medios de comunicación de los Estados Unidos inquirían la cuestión: ¿hasta qué punto las autoridades conocieron y aprobaron ese acto? Según nuestros cálculos, el *New York Times* aludió en dieciocho artículos a las responsabilida-

7. El informe del *Time* titulado «Memories of Father Jerzy» (12 de noviembre de 1984) no tiene un sosia en los artículos sobre las muertes de víctimas indignas que se discuten más adelante.

des a alto nivel, a menudo con titulares explícitos.⁸ Algunos artículos mencionaban una conexión soviética («Al parecer un abogado [sic] sugiere una conexión soviética en el asesinato del sacerdote», publicado el 31 de enero de 1985); Michael Kaufman, del *New York Times*, intentó dos veces relacionar el caso con el complot para asesinar al Papa, mientras que la prensa estadounidense, encabezada por el *New York Times*, había tratado de relacionarlo con los soviéticos y los búlgaros.⁹ Las vinculaciones con la Unión Soviética y con la conexión búlgara se establecieron por el método de encontrar a alguien que dijese lo que el periodista y su periódico trataban de «pescar», sin que en ningún caso hubiese ningún indicio real que sustentase tales afirmaciones.

Time, *Newsweek* y el programa *CBS News* recurrieron al mismo sistema de plantear cuestiones cada vez más agresivas acerca de los «Hints of a Contact on the Top» (Indicios de un acuerdo en la cumbre) (*Time*), y «Keeping the Lid on Murder» (Echando tierra sobre el asesinato) (*Newsweek*), y el *Time* planteó la posibilidad de que la Unión Soviética hubiese intervenido, así como la llamada conexión búlgara.

2.1.2 (d). *Conclusiones y seguimiento.* El *New York Times* dedicó tres editoriales al caso Popieluszko. En cada uno de ellos señalaba la responsabilidad de las autoridades de alto nivel, y el hecho de que «Un estado policial es particularmente responsable de las acciones de su policía» («Murderous Poland» [Polonia asesina], 30 de octubre de 1984). Con total libertad aplicó los calificativos de «brutalidad», «cinismo» y «rudeza» al Estado polaco. Para el *New York Times*, la rápida identificación, juicio y condena de los policías se debía a que la agitación que se había producido tanto en Polonia como en el extranjero había puesto límite a tanta maldad. Se trata de un buen argumento, como señalaremos a lo largo del libro: una publicidad intensa puede limitar la maldad. Pero también señalaremos la importancia que por su parte tiene la *negativa* a publicar y el margen de maniobra que esta negativa proporciona a los clientes

8. «A Polish General is Tied to Death of Warsaw Priest» (3 de noviembre de 1984); «Pole in Killing Tells of Hints of Top-Level Backup» (9 de enero de 1985); «Pole on Trial Names 2 Generals» (5 de enero de 1985); «Second Abductor of Polish Priest Says Order Came "From the Top"» (3 de enero de 1985).

9. Ver capítulo 4, *infra*.

asesinos que gozan de la protección de los Estados Unidos, en cuyo caso el impacto de la publicidad sería bastante mayor.¹⁰ El *New York Times* tampoco señaló el contraste entre la Polonia asesina y El Salvador asesino: en este último país, ninguno de los asesinatos de salvadoreños cometidos por las fuerzas de seguridad o por los escuadrones de la muerte relacionados con aquéllas ha acabado en juicio. La ausencia de dicha comparación, así como el hecho de que el *New York Times* omitiese publicar un editorial titulado «Murderous El Salvador» (El Salvador asesino), ilustra cómo el modelo de propaganda protege al terrorismo útil.¹¹

2.2. RUTILIO GRANDE Y LAS OTRAS SETENTA Y DOS VÍCTIMAS INDIGNAS DE ATENCIÓN

Como podemos ver en el cuadro 2.1, las setenta y dos personas que aparecen en la lista de mártires de Penny Lernoux merecieron la desmesurada cifra de ocho artículos en el *New York Times*, uno

10. El 6 de mayo de 1986, tres hombres armados cogieron a Laura Pinto, miembro de las salvadoreñas «Madres de los Desaparecidos», la golpearon, la violaron y la abandonaron en la calle. El 29 de mayo fue secuestrada y torturada de nuevo, y poco después doce miembros de su grupo fueron detenidas por la policía. El *New Statesman* británico expresó la sorpresa de que este tipo de terror pudiera tener lugar, dado el hecho de que Laura Pinto había viajado a Europa y dado a conocer su existencia a los europeos occidentales (Jane Dibblin, «El Salvador's Death Squads Defy European Opinion», 13 de junio de 1986). Efectivamente, Europa occidental protestó ante estos abusos. No obstante, lo que hizo factible ese terror fue el hecho de que el poder directamente involucrado en El Salvador, los Estados Unidos, tiene a los medios de comunicación bien adaptados a la política de Estado. Los dos asaltos a Laura Pinto y la detención de las doce miembros de las Madres fueron completamente omitidos por el *New York Times* y sus compadres. Cuando en marzo de 1987 se le negó la entrada a los Estados Unidos a una miembro de las «Madres de los Desaparecidos», víctima de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Duarte, y que había sido invitada a conferenciar en varias ciudades, con motivo del Día Internacional de la Mujer, los periódicos de categoría no publicaron una sola palabra. Ver Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988. La atención, obligada según el *New York Times*, que este periódico concedió a la violencia polaca, no estaba disponible para proteger a una víctima indigna.

11. Para un análisis de los editoriales del *New York Times* sobre El Salvador en los ochenta, véase Noam Chomsky, «U.S. Policy and Society», en Thomas Walker, ed., *Reagan versus the Sandinistas*, Westview, Boulder, Colo., 1987, pp. 295-296.

en *Newsweek* y ninguno en el *Time*; el programa *CBS News*, por su parte, no habló de ellos ni una sola vez durante los años que recoge el citado cuadro (de 1975 a 1978). En los ocho artículos del *New York Times* se mencionan siete de los nombres que figuran en la lista de Lernoux, y en los artículos del *Newsweek* aparecen dos más. Esto significa que esos importantes medios de comunicación ignoraron absolutamente sesenta y tres asesinatos. Los ocho artículos del *New York Times* carecían del menor detalle y de la categoría dramática susceptibles de despertar un sentimiento de compasión. Describían los asesinatos como unos acontecimientos remotos que habían ocurrido en un mundo distante (véase la descripción del *New York Times* del asesinato de Jerome Cypher, en el cuadro 2.2). Pero esta es una cuestión de elección editorial. El drama está presente para quien quiera verlo, sólo falta el interés de la prensa.¹²

El asesinato del padre Rutilio Grande, uno de los setenta y dos miembros de la lista, supuso un hito importante en la escalada de violencia en El Salvador, además causó un efecto significativo en el a la sazón recientemente designado y conservador arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Rutilio Grande era jesuita, pastor de Aguilares, un hombre progresista que ayudaba a los campesinos a que se organizaran en grupos de autoayuda. Tenía que hacer frente a la encendida oposición de los terratenientes, la policía y los mandos militares locales, pero era un personaje de ámbito nacional para la Iglesia salvadoreña y amigo del arzobispo. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande recibió varios disparos que le causaron la muerte, junto a un joven y un campesino de setenta y dos años, con quienes se dirigía a Misa. Según la autopsia realizada por la Iglesia, las balas que acribillaron al sacerdote eran del mismo

12. La prensa también puede haberse visto coaccionada por el hecho de que los reporteros que investigan en profundidad y aportan información poco favorable para los regímenes latinoamericanos pueden ser expulsados del país, e incluso asesinados. Los reporteros occidentales muy raramente son amenazados físicamente en Polonia, la Unión Soviética, Cuba o Nicaragua. En El Salvador, Guatemala y otros estados latinoamericanos clientes de los Estados Unidos, a menudo son amenazados y a veces asesinados. La prensa libre no comenta esta ironía, como tampoco se hace eco de los efectos que esta violencia real y potencial, ejercida contra los reporteros disidentes, tiene para la honestidad de la información. Esta cuestión se discute más ampliamente en el capítulo 3, pp. 169-172.

CUADRO 2.2

*Las salvajadas infligidas a las víctimas dignas e indignas,
tal como las describe el New York Times*

VÍCTIMAS DIGNAS

Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco, asesinado el 19 de octubre de 1984:

1. Descripción tras el hallazgo del cadáver: «Según las informaciones dadas por quienes vieron el cadáver el martes pasado, éste presentaba magulladuras, signo inequívoco de que había sido apaleado después de su rapto en una carretera cercana a la ciudad de Torun. La autopsia ha demostrado también que el padre Popieluszko había sido amordazado y al parecer atado con una cuerda desde el cuello hasta los pies, de manera que en caso de moverse hubiera podido estrangularse él mismo. Las mismas fuentes declararon que no podían confirmar las informaciones dadas por algunos miembros de la familia del sacerdote asesinado, según las cuales éste había sido herido en la cara y en el cráneo» (29 de diciembre de 1984).

2. Descripción durante el juicio a los asesinos: «La película muestra con toda claridad cómo las piernas del sacerdote habían sido dobladas y atadas a un nudo corredizo alrededor de su cuello, de manera que de estirarse hubiese podido estrangularse él mismo. La cuerda que mantenía sus manos atadas con toda certeza se perdió dentro del agua. También se desplazaron algunas mordazas, y ahora permanecen sobre el alzacuello y la parte anterior de su sotana. De sus piernas pende un saco de piedras que, según una declaración anterior, había sido transportado por toda Polonia durante la semana en que los tres asaltantes estuvieron siguiendo la pista al sacerdote. Cuando las cámaras enfocaron la cara de Popieluszko, el oficial de policía que estaba en el embalse declaró que «el cadáver presentaba señales de haber sido apaleado». Esto quedó confirmado por las pruebas médicas presentadas el jueves por la Dra. María Byrdy, anatomopatóloga, quien declaró que el padre Popieluszko había recibido más de una docena de golpes de porra» (26 de enero de 1985).

VÍCTIMAS INDIGNAS

Michael Jerome Cypher, sacerdote estadounidense asesinado en Honduras:

«Los cadáveres fueron encontrados en un pozo dinamitado en un finca de la zona oriental de Honduras...» (19 de julio de 1985). Nota: no se produjeron detenciones ni juicio alguno.

Jaime Alcina, sacerdote español del movimiento de trabajadores de Acción Católica, tras su detención en Chile:

«Algunos días después fue encontrado en el río Mapocho un cadáver con diez orificios de bala en la espalda. El cónsul español identificó el cadáver: era el padre Alcina» (1 de octubre de 1973). Nota: no se produjeron detenciones ni juicio alguno.

El arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador, el 24 de marzo de 1980:

«El arzobispo Romero fue asesinado por un francotirador que salió de un coche rojo que al parecer estaba aparcado justo ante la puerta de la capilla del Hospital de la Divina Providencia. El francotirador efectuó un solo disparo y huyó. Según el médico del hospital al que fue trasladado el arzobispo, la bala le había alcanzado el corazón» (25 de marzo de 1980). Nota: no se produjo ninguna detención ni juicio.

María Rosario Godoy de Cuevas, secretaria del Grupo de Apoyo Mutuo, asesinada en Guatemala el 4 de abril de 1985:

«El cadáver de la secretaria del Grupo de Apoyo a las Familias de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala fue encontrado el viernes en un barranco a quince kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, según ha declarado un portavoz de ese grupo. En el mismo automóvil se hallaron también los cadáveres de su hermano y de su hijo pequeño» (7 de abril de 1985, p. 5).* Nota: no se produjo ninguna detención ni juicio.

Jean Donovan, Ita Ford, Dorothy Kazel y Maura Clarke, cuatro mujeres estadounidenses asesinadas en El Salvador, el 4 de diciembre de 1980:

1. Descripción tras el hallazgo de los cadáveres:

«Los testigos que encontraron su sepultura declararon que ésta se encontraba a un metro y medio de profundidad. A una de las mujeres le habían disparado en la cara, a otra en el pecho. Dos de las mujeres tenían las bragas en los tobillos, manchadas de sangre» (5 de diciembre de 1980)*

2. Descripción durante el juicio de los asesinos:

No se dio ninguna descripción, pese a que se presentó testimonio médico ante el jurado; véase el texto.

* Para más detalles, véase el texto que sigue.

calibre que los fusiles Manzer utilizados por la policía. Una «coincidencia» hizo que una hora antes del asesinato todas las líneas telefónicas de la zona quedasen cortadas y que las patrullas de policía que normalmente actuaban en la región hubieran desaparecido misteriosamente.¹³ El arzobispo Romero escribió al presidente de El Salvador, Arturo Armando Molina, instándole a que ordenase una minuciosa investigación, que Molina prometió realizar. Una semana después, cuando ya la Iglesia había concluido que con toda probabilidad las balas que habían asesinado a las tres víctimas pertenecían a la policía, Romero escribió una carta aún más dura a Molina, señalando la inexistencia de la prometida investigación oficial e indicando que se habían producido comentarios críticos, «en su mayoría desfavorables para su gobierno». En vista de que la inactividad continuaba, Romero amenazó con rechazar la participación de la Iglesia en cualquier acto oficial del gobierno a menos de que se investigasen los asesinatos y los asesinos fuesen llevados ante la justicia. El biógrafo de Romero escribió:

Seis semanas más tarde, el abogado que Romero había designado para que se ocupase del caso le comunicó «la desconcertante y abierta indiferencia hacia la investigación por parte de los organismos del Estado». Un sospechoso a quien un juez había ordenado detener, en El Paisnal, fue puesto en libertad sin cargos, y nadie había ordenado la exhumación de los cuerpos para proceder a su examen. Las balas todavía están en las sepulturas.¹⁴

El asesinato de Rutilio Grande seguía a la serie de expulsiones forzosas de clérigos extranjeros ordenadas por el gobierno Molina y otros asesinatos de personal eclesiástico. Romero y el clero deliberaron largamente acerca de la actitud que debían tomar en respuesta a la escalada de violencia desencadenada contra ellos. Trataron de hacer públicos sus mensajes de inquietud, pero la mayoría no fueron oídos a causa de la censura de los periódicos. Finalmente decidieron emprender una acción espectacular: el cierre temporal de las escuelas y el cumplimiento de la amenaza ya mencionada de

13. Penny Lernoux, *Cry of the People*, Doubleday, Nueva York, 1980, p. 73.

14. James R. Brockman, *The Word Remains: A Life of Oscar Romero*, Orbis, Maryknoll, Nueva York, 1982, p. 11.

negarse a apoyar al gobierno y a otros grupos de poder en actos oficiales.

Toda esta cuestión del asesinato y la respuesta de la Iglesia apenas tuvo repercusión alguna en los medios de comunicación. Hasta ahora el asesinato, la confrontación de una Iglesia desesperada contra un Estado represivo, y las espectaculares acciones llevadas a cabo para movilizar apoyos en su defensa, han sido prácticamente ignorados por los medios de comunicación de los Estados Unidos. El asesinato de Rutilio Grande fue mencionado en *Newsweek* («Priests in Peril» —Sacerdotes en peligro—, 1 de agosto de 1988), pero ni una sola vez llegó a las audiencias del *New York Times*, el *Time* o el programa *CBS News*. Ese era un factor importante que permitía que el terror continuase sin ningún impedimento. Parafraseando el editorial del *New York Times* sobre la «Murderous Poland» (Polonia asesina): si no hay publicidad ni agitación, no se puede poner límite al terror.

2.3. EL ARZOBISPO ÓSCAR ARNULFO ROMERO

El asesinato del arzobispo Romero, el más alto representante de la Iglesia católica en El Salvador, fue una «gran noticia» y tuvo unas implicaciones políticas enormes. En la época de su muerte, Romero se había convertido en el principal y más abierto adversario de la política de represión mediante asesinato llevada a cabo por el gobierno, que contaba con el apoyo militar de los Estados Unidos. En su último sermón, hizo un llamamiento a los miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad para que se negasen a matar a sus hermanos salvadoreños, llamamiento que enfureció al cuerpo de oficiales que intentaban entrenar a las tropas para que matasen de buena gana y con total libertad. Romero estaba en la «lista negra» de la ultraderecha, de la que había recibido amenazas y que desde el principio estaba estrechamente vinculada al ejército y a los servicios de información.¹⁵ Tan sólo unas semanas antes de su asesinato había escrito una enérgica carta al presidente Jimmy Carter, oponiéndose a la inminente concesión de la ayuda de los Estados Unidos a la Junta, por ser ésta perjudicial para los intereses salvadoreños. A la administración Carter le molestó tanto la oposición

15. Tratamos este vínculo más adelante en esta misma sección.

de Romero a su política que presionó en secreto al Papa para que refrenase al arzobispo.¹⁶

En resumen, Romero no fue tan sólo una víctima «indigna», sino que fue también un importante activista que se opuso a la alianza entre el ejército y la oligarquía del país y a la política de los Estados Unidos en El Salvador. La cobertura informativa que los medios de comunicación estadounidenses dedicaron al asesinato del arzobispo refleja con toda nitidez su amenazante papel. Con la información que dedicaron a este hecho y a otros similares alcanzaron nuevos niveles de deshonestidad y de servicio a la propaganda.

2.3.1. *Detalles acerca del asesinato y de la posterior respuesta pública*

Los detalles que del asesinato de Romero proporcionaron los medios de comunicación estadounidenses fueron concisos (véase cuadro 2.2). Mientras que por una parte abundaban las expresiones de conmoción y dolor, por otra había muy pocas referencias o declaraciones de condena procedentes de los partidarios de Romero. No hubo declaraciones o reflexiones que expresaran que el asesinato era intolerable y que era preciso encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. El *New York Times* no publicó ningún editorial condenando o siquiera mencionando el asesinato. Rápidamente éste fue situado en el contexto más amplio de los presuntos crímenes perpetrados tanto por la derecha como por la izquierda, que tanto lamentaban los oficiales salvadoreños y estadounidenses.

16. Carter envió a Robert Wagner, ex alcalde de Nueva York, a persuadir al Papa para que refrenara a Romero, cosa que aquél intentó. Véase Raymond Bonner, *Weakness and Deceit*, Times Books, Nueva York, 1984, p. 176. El padre César Jerez, provincial de los jesuitas en América Central, fue llamado a Roma poco después para dar explicaciones sobre la carta de Romero. El padre Jerez, que había huido de Guatemala después de que los militares amenazaran su vida, estaba muy próximo al arzobispo Romero. Posteriormente también le forzaron a huir de El Salvador y actualmente está refugiado en Nicaragua, donde es rector de la Universidad Centroamericana, viéndose en la imposibilidad de volver a esas dos «democracias incipientes» excepto para cortas (y peligrosas) visitas.

2.3.2. *La argumentación propagandística: una junta reformista que trata de contener la violencia de derechas e izquierdas*

En la época del asesinato de Romero, los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos coincidían en afirmar que los asesinatos que se producían en El Salvador eran cometidos por extremistas de derechas y de izquierdas, no por las fuerzas armadas salvadoreñas y sus agentes; así como que el gobierno hacía todo cuanto estaba en sus manos para poner fin a esos asesinatos y emprender reformas. John Bushnell, del Departamento de Estado declaró ante un comité de asignaciones del Congreso que «entre los que están al corriente de la situación a través de la prensa existe cierta percepción errónea de los hechos, según la cual el propio gobierno de El Salvador sería represivo», cuando en realidad la violencia procede «de la extrema derecha y de la extrema izquierda» y sólo «una ínfima parte» de los asesinatos son atribuibles al ejército y a las fuerzas de seguridad.¹⁷ Tales afirmaciones eran una mentira cómplice,¹⁸ que todos los testimonios independientes procedentes de El Salvador contradecían casi diariamente, y que también fue refutada por el arzobispo Romero.¹⁹ En la carta que envió a Carter el 17 de febrero de 1970, el arzobispo denunciaba que la ayuda a la Junta se había traducido en un incremento de la violencia represiva del gobierno, «acumulando un total de muertos y heridos muy superior al de los anteriores regímenes militares». Romero explicaba también a Carter que la idea de que la Junta era reformista era

17. Citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 172.

18. El 27 de septiembre de 1981, Alan Riding escribió en el *New York Times* que «bajo la administración Carter, los oficiales estadounidenses dijeron que las fuerzas de seguridad eran las responsables del 90 por 100 de las atrocidades», no «las bandas incontroladas de la extrema derecha». En resumen, no sólo Bushnell mentía, sino que los medios de comunicación lo sabían y no utilizaron esa información. El 23 de marzo de 1980, apareció un artículo de Riding titulado «El Salvador's Junta Unable to Halt the Killing». Sobre la cobertura de El Salvador durante los años ochenta, incluidas flagrantes falsificaciones y encubrimientos incluso de informes del Congreso, véase Noam Chomsky, *Towards A New Cold War*, pp. 35 y ss., reeditado en James Peck, ed., *The Chomsky Reader*, Pantheon, Nueva York, 1987.

19. La Iglesia calcula que el gobierno fue responsable de la muerte de unos 900 civiles durante los tres primeros meses de 1980, cifra que sobrepasa el total de víctimas de 1979; un informe de Amnistía Internacional fechado el 21 de marzo de 1980 contiene siete páginas de incidentes en los que las fuerzas de seguridad, unidades armadas o grupos paramilitares bajo control militar asesinaron a civiles desarmados, en su mayoría campesinos (citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 172).

un mito, que «ni la Junta ni los demócratacristianos gobernaban el país», sino que más bien el poder estaba en manos del ejército, al servicio de sus propios intereses y de los de la oligarquía.²⁰

Lo que daba cierta credibilidad a las declaraciones de Bushnell era que jóvenes oficiales habían dado un «golpe reformista» en octubre de 1979, y que liberales y progresistas formaron parte de la primera Junta. Sin embargo, como señala Raymond Bonner:

Los oficiales jóvenes y progresistas que planearon cuidadosamente el golpe perdieron el control del mismo inmediatamente después de haberlo ejecutado. Sus ideales y sus objetivos fueron subvertidos por los oficiales más antiguos y conservadores que contaban con el respaldo de Devine [embajador de los Estados Unidos] y de la embajada de ese país en El Salvador, así como de funcionarios clave de la administración Carter en Washington.²¹

Los elementos progresistas de la Junta se encontraron totalmente privados de poder y paulatinamente se marcharon o fueron obligados a hacerlo, junto a otros miembros del consejo de ministros y de la administración. José Napoleón Duarte se unió a la Junta en marzo para «cubrir su desnudez» y actuar como agente de relaciones públicas del ejército, pero todos aquellos que no se sintieron satisfechos jugando ese papel se apartaron de ella.²²

Una vez la vieja guardia militar controló a los oficiales progresistas, en octubre de 1979, empezó una guerra general de exterminio contra todos los individuos y organizaciones progresistas de El Salvador. A finales de mayo fuentes de la Iglesia habían contabilizado la muerte de 1.844 civiles en el transcurso de 1980; a finales de año la cifra aumentó a 10.000 muertes, casi todas a manos del gobierno. La abierta violencia del gobierno apoyado por Carter abocó al centro y a la izquierda a la guerra de guerrillas. El gobierno no era centrista y reformista, era un régimen militar de derechas estrechamente vinculado al grupo terrorista ORDEN y a los escuadrones de la muerte, a los que utilizaban regularmente para sus

20. El propio Duarte reconoció esta situación, admitiendo en una entrevista con Raymond Bonner que el ejército gobernaba El Salvador, pero que esperaba poder asumir el mando *en el futuro* (véase *New York Times*, 1 de marzo de 1982).

21. *Weakness and Deceit*, p. 146.

22. Véase capítulo 3, pp. 175-176.

propósitos. Los grupos paramilitares no eran incontrolables, sino que estaban haciendo lo que el ejército les pedía que hiciesen. Tanto esas fuerzas paramilitares como los escuadrones de la muerte salvadoreños mantenían una relación continuada con los oficiales militares y las fuerzas de seguridad, así como con sus homólogos de los Estados Unidos. Se daba un continuo flujo de personal, una estrecha colaboración a la hora de intercambiar informaciones, financiación de los grupos paramilitares por parte de las fuerzas oficiales y una división del trabajo entre ellos. Los grupos paramilitares se encargaban de ejecutar las misiones de las cuales no querían responsabilizarse las fuerzas oficiales.²³

Aunque el grupo paramilitar ORDEN fue formalmente abolido cuando se produjo el golpe de octubre de 1979, fue secretamente mantenido y sostuvo una estrecha relación con el *establishment* militar regular. Según un detallado relato,

Oficialmente los reformistas habían suprimido el grupo ORDEN, la antigua red de información. Pero... funcionarios militares recelosos de los jóvenes reformistas reestablecieron en secreto e incluso ampliaron el antiguo sistema de inteligencia, convirtiéndolo en una red básica que proporcionaba los nombres de presuntos elementos subversivos a los escuadrones de la muerte militares y paramilitares. A los cuatro días del golpe, D'Aubuisson declaraba en una entrevista que los miembros del alto mando le habían destinado a colaborar en la reorganización de ANSESAL [una red de transmisión de información], dentro de un recinto militar bajo el despacho del jefe del Estado Mayor, fuera del alcance de los civiles de la nueva Junta.²⁴

La misión secreta de D'Aubuisson fue confirmada por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta, y por el coronel Nicolás Carranza, viceministro de Defensa.²⁵

23. Una prueba del hecho de que fuerzas paramilitares asesinan bajo protección oficial es que, año tras año, los asesinatos paramilitares nunca conllevan arrestos (véase Herman, *Real Terror Network*, pp. 115-119). En cuanto a las fuerzas regulares, a lo largo de 1986 «no hay casos conocidos de castigos a soldados u oficiales militares por violaciones de los derechos humanos cometidos contra civiles salvadoreños» (*The Reagan Administration's Record on Human Rights in 1986*, The Watch Committees and Lawyers Committee for Human Rights, Nueva York, febrero de 1987, p. 46).

24. Laurie Becklund, «Death squads: Deadly "Other War"», *Los Angeles Times* (18 de diciembre de 1983).

25. Michael McClintock, *The American Connection*, vol. I, Zed, Londres, 1985, p. 221.

Pese a ello los medios de comunicación de los Estados Unidos siguieron la fórmula de Bushnell prácticamente al pie de la letra: en El Salvador había una «guerra civil entre grupos de extrema derecha y de extrema izquierda» (*New York Times*, 25 de febrero de 1980); la Junta, «al parecer bien intencionada pero débil», estaba ocupándose de las reformas, pero era incapaz de controlar el terror (*Time*, 7 de abril de 1980). Los medios de comunicación estadounidenses destacaron el carácter reformista de la Junta revolucionaria, pero coincidieron en suprimir cualquier prueba de la falta de poder, las frustraciones y la pronta dimisión de los progresistas y de la sustitución de éstos por civiles deseosos de actuar como «pantallas» para el Estado del terror. Román Mayorga, ingeniero y profesor universitario al que habían elegido por unanimidad todos los que planearon el complot, dimitió el 3 de enero de 1980, junto a Guillermo Manuel Ungo «y por lo menos 37 altos funcionarios del gobierno, incluyendo los jefes de todos los organismos especializados». ²⁶ Pero para los medios de comunicación esas dimisiones no tuvieron lugar, y la Junta continuó siendo «un gobierno centrista débil ... acosado por dos extremos implacables» (editorial del *New York Times* del 28 de abril de 1980), no un gobierno derechista responsable de las matanzas. Robin K. Andersen señalaba que

ningún medio de comunicación informó ... de la dimisión final de los miembros de la Junta. Ni siquiera la CBS, que había tratado extensamente el nombramiento de Román Mayorga, se dignó informar acerca de la dimisión de éste o la de los demás. Para los espectadores de los noticiarios de televisión, estos sucesos políticos jamás sucedieron; las noticias de televisión omitieron cualquier referencia a esta importante lucha por el poder político que podía explicar los abusos que se sucedieron ... La pérdida del control por parte de los civiles, e incluso su dimisión, no tuvieron efecto alguno en la forma en que las noticias caracterizaban a la Junta, y ésta continuó recibiendo el calificativo de moderada. ²⁷

26. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 162.

27. «United States Network Coverage of El Salvador: The Law and Order Frame», 1986 (manuscrito), pp. 17-18. Andersen proporciona varios ejemplos de cómo los medios de comunicación continuaron etiquetando de «moderada» a la Junta a lo largo de 1980, mientras las atrocidades aumentaban en lo que el sucesor del arzobispo Romero, el obispo Rivera y Damas, describió en octubre de 1980 como «guerra de exterminación y genocidio contra una población civil indefensa» (Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 207).

Y el gobierno salvadoreño ha continuado siendo «moderado» y «centrista» hasta hoy.

Otras omisiones de los medios de comunicación colaboraron a reforzar el mito de una Junta neutral situada entre la extrema derecha y la extrema izquierda. El 29 de marzo de 1980 el *New York Times* publicó un despacho de la agencia Reuter comunicando la dimisión de tres altos funcionarios salvadoreños, quienes, según el comunicado, «habían dimitido la noche anterior en protesta por la incapacidad de la Junta para detener la violencia de las fuerzas derechistas e izquierdistas». ²⁸ Un día antes otro despacho de la AP recogía las mismas dimisiones, pero sin dar ninguna explicación del motivo de las mismas. Uno de los funcionarios dimisionarios, el subsecretario de Agricultura Jorge Alberto Villacorta, emitió un comunicado público en el que afirmaba que:

He dimitido porque creo que no tenía sentido continuar en un gobierno no sólo incapaz de poner fin a la violencia, sino que es el propio gobierno el que genera esta violencia política mediante la represión ... No hace mucho, en una de las grandes fincas expropiadas por la reforma agraria, miembros uniformados de las fuerzas de seguridad, acompañados por una persona enmascarada que señaló a los directores del grupo autogestionario, mataron a tiros a estos últimos delante de los otros cooperantes. ²⁹

De este comunicado se desprende que la referencia que el despacho de la agencia Reuter hacía de la protesta «contra la incapacidad de la Junta para poner fin a la violencia de las fuerzas derechistas e izquierdistas» era una grave tergiversación, y es evidente que una transmisión honesta de las declaraciones de Villacorta hubiese contradicho los argumentos de la propaganda.

Durante el funeral del arzobispo Romero, celebrado el 30 de marzo de 1980, y en el que se reunieron varios miles de personas para rendirle homenaje, explosiones de bomba y disparos causaron la muerte a unas cuarenta personas e hirieron a varios centenares más. La versión que del hecho dieron el embajador de los Estados

28. «23 Die in El Salvador As Clashes Continue; 3 Officials Step Down», *New York Times* (29 de marzo de 1980).

29. Citado en Robert Armstrong y Janet Shenk, *El Salvador: The Face of Revolution*, South End Press, Boston, 1982, p. 146.

Unidos Robert White y el gobierno salvadoreño fue que «terroristas de extrema izquierda armados sembraron el pánico entre la multitud e hicieron todo lo posible para provocar la respuesta de las fuerzas de seguridad, aunque éstas mantuvieron la disciplina».³⁰ La narración de los hechos efectuada por Joseph Treaster y publicada en el *New York Times* afirmaba que Duarte había declarado que la violencia procedía de la izquierda. Citaba también una declaración de la Junta según la cual el ejército estaba rigurosamente confinado en sus cuarteles; Treaster comentaba que «no había ningún rastro de fuerzas gubernamentales uniformadas en la plaza antes o durante el tiroteo». No mencionaba ninguna otra versión de los hechos. Sin embargo, un comunicado difundido el 30 de marzo y firmado por veintidós dirigentes eclesiásticos presentes en el funeral, afirmaba que el pánico había comenzado cuando fue arrojada una bomba desde el palacio nacional, a la que siguió el fuego de ametralladoras y otros disparos procedentes del segundo piso del mismo.³¹ Treaster hizo caso omiso de este comunicado y el *New York Times* jamás habló de él.

En un artículo complementario fechado el 7 de abril de 1980, Treaster repetía que el 30 de marzo la Junta había ordenado a todas las fuerzas militares que permaneciesen en sus cuarteles, y que éstas obedecieron «pese a que sabían que izquierdistas armados estaban entrando a raudales en la plaza central». Treaster presentó esta afirmación del gobierno como la realidad, y continuó descartando otras fuentes de información y otras pruebas que contradecían la versión del gobierno. Tampoco explicó la razón por la cual los izquierdistas habrían disparado indiscriminadamente sobre su propia gente mientras ésta rendía homenaje al arzobispo.³²

El título del artículo de Treaster del 7 de abril de 1980 rezaba

30. Del telegrama de White al Departamento de Estado, citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 184.

31. Esta afirmación se cita en Armstrong y Shenk, *El Salvador*, p. 152. Otros declaran que las tropas participaron en los acontecimientos, contradiciendo las afirmaciones de Duarte, la Junta y Treaster. Phillip Berryman, que asistió al funeral, dijo a los autores que vio con bastante claridad dos camiones de tropas en las inmediaciones. Sin embargo, Treaster es cauteloso —sólo habla de tropas en la plaza, no cerca de la plaza o en el Palacio Nacional u otros edificios.

32. La opinión expresada en los telegramas del embajador White fue que los izquierdistas actuaron para provocar la respuesta de las fuerzas de seguridad, una táctica autodestructiva que no se basa en ninguna evidencia.

así: «Slaying in El Salvador backfires on rebels» (El asesinato en El Salvador perjudica a los rebeldes). Y en él podía leerse que:

Varios diplomáticos, empresarios y funcionarios del gobierno coinciden en afirmar que el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ocurrido hace dos semanas, así como el asesinato de treinta personas en el funeral puede haber beneficiado, más que perjudicado, a la Junta civico-militar en el poder.

Se acusa a la extrema derecha del asesinato del arzobispo y a la extrema izquierda de los disparos y las bombas que convirtieron la plaza central en un caos mientras se celebraban las honras fúnebres del arzobispo Romero.

«No es mucho lo que la Junta ha ganado —declaró Robert E. White, embajador de los Estados Unidos en El Salvador—, pero sus oponentes de extrema derecha y extrema izquierda han perdido prestigio. Todo ello redundará en un aumento del prestigio de la Junta.»

Podemos constatar cómo el título del artículo transforma el asesinato del líder de las fuerzas disidentes (y el de sus partidarios durante el funeral) de una cuestión moral que merecía repulsa en una cuestión de beneficios políticos que se vuelven contra los rebeldes. Sería difícil imaginar que el *New York Times* publicase un artículo sobre Popieluszko con el titular «Slaying in Poland Backfires on Solidarity Movement» (El asesinato en Polonia perjudica al movimiento Solidaridad), presentando quizás como demostración de violencia o agresividad la versión de la prensa oficial. También puede observarse cómo la identificación del asesino de Romero y la obligación del gobierno de hacer justicia habían quedado relegadas a un segundo plano. Finalmente, tenemos la afirmación de que «se acusa a la extrema izquierda» de las muertes en la plaza. La utilización del impersonal permite a Treaster no decir quién acusa a la extrema izquierda. Como fuentes de información para su artículo Treaster alude a «diversos diplomáticos, empresarios y funcionarios del gobierno» —ni siquiera pretende haber hablado con los salvadoreños de a pie o con representantes de la Iglesia— pero la única cita explícita respecto de su afirmación de que «se acusa a la extrema izquierda» era el entonces embajador de los Estados Unidos, Robert White. Al contar únicamente con las notas de prensa del gobierno, y evitar cuidadosamente cualquier prueba o versión alternativa que pudiese resultar conflictiva, el *New York Times* encontró una vez

más la manera de aplicar la fórmula habitual de una derecha mortífera que contrarrestaba a una también mortífera izquierda, situando una vez más en el medio a la Junta auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, ¡y además con un prestigio reforzado!

2.3.3. *La tergiversación de la postura de Romero*

Como hemos comentado anteriormente, Romero atribuía inequívocamente la culpa de la violencia en El Salvador al ejército y a las fuerzas de seguridad, y consideraba a la izquierda y a las agrupaciones populares como víctimas a las que la violencia y la injusticia había conducido a tomar medidas en defensa propia. Las organizaciones del pueblo, dijo Romero a Carter, están «luchando para defender sus más fundamentales derechos humanos» contra un *establishment* militar que «sólo sabe reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña». En su diario Romero rechazaba totalmente la idea de que el ejército actuase en respuesta a la violencia de otros; para él, las fuerzas de seguridad eran instrumentos «de un programa general de aniquilación de la izquierda, de una izquierda que por sí misma no se habría involucrado en acciones violentas de no ser por la injusticia social con la que quería acabar». ³³ Así, la afirmación de Joseph Treaster en la portada del *New York Times* del 31 de marzo de 1980, según la cual Romero «había criticado tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda por extender las matanzas y las torturas en El Salvador» era pura y simplemente una mentira: Romero jamás acusó a la izquierda de cometer torturas o de propagar los asesinatos, jamás comparó derechas e izquierdas y además estaba bastante convencido de que el gobierno (un agente de la derecha) era el principal asesino. A este respecto, las apreciaciones de Romero, esencialmente las mismas que de manera *confidencial* el gobierno de los Estados Unidos había transmitido a la prensa, fueron burdamente falsificadas en público por unos y otros. ³⁴

33. Citado en Brockman, *The Word Remains*, p. 212.

34. Véase nota 18. La revista *Time* tergiversó los hechos del mismo modo que Treaster, pero con más refinamiento: «Desde su púlpito, condenó reiteradamente la tiranía y el terrorismo que desgarran al pequeño y empobrecido El Salvador y que lo han llevado al borde de la guerra civil» (7 de abril de 1980).

Resulta interesante ver cómo un año más tarde, en un artículo que conmemoraba el aniversario del asesinato del arzobispo Romero, Edward Schumacher, del *New York Times*, señalaba que bajo el sucesor de Romero, el arzobispo Rivera y Damas, «la Iglesia se había desplazado hacia una posición más de centro por lo que se refería a la guerra civil entre el gobierno y la guerrilla». ³⁵ Evidentemente, si la Iglesia tomaba ahora una posición de centro, opuesta a la que manifestaba bajo el arzobispo Romero, tal cosa significaba admitir que el enfoque con el que Treaster y el *New York Times* habían presentado a un Romero imparcial no respondía a la realidad (y así era). ¿Es posible que el *New York Times* encuentre siempre a la Iglesia en el medio y que mienta también un año después? La cuestión puede quedar abierta, ya que el sucesor de Romero es bastante más circunspecto que aquél. Quizás la voluntad de las derechas y del ejército de asesinar a personas como Romero pueda haber condicionado la capacidad del arzobispo Rivera y Damas para expresar su opinión con total libertad, forzándolo a una postura cautelosa en público. Pero ni Schumacher ni el *New York Times* tuvieron en cuenta esta posibilidad. ³⁶

2.3.4. *La pérdida de interés por las responsabilidades de las altas esferas*

Con el caso Popieluszko, los medios de comunicación trataron incansablemente de demostrar que las altas esferas del gobierno polaco sabían del crimen y eran responsables de él. También solían aludir al interés de los soviéticos y a su posible vinculación con el crimen. Por el contrario, en el caso de Romero no plantearon preguntas semejantes.

Estos medios de comunicación señalaron que Romero se oponía a la ayuda a la Junta salvadoreña (que pese a todo Carter siguió proporcionando), pero omitieron constatar su profunda hostilidad hacia la política de los Estados Unidos y la importancia de su papel

35. «Church in Salvador Now Follows the Middle Path», *New York Path* (22 de marzo de 1981).

36. Para una discusión más detallada sobre la manipulación de las cautas observaciones del arzobispo con propósitos apologéticos por parte de Schumacher, véase Herman, *Real Terror Network*, pp. 178-179.

como opositor (aunque éste era bastante más amenazador para la política de los Estados Unidos que el de Popieluszko con respecto a la Unión Soviética). La prensa jamás hizo mención al emisario especial que Carter envió al Papa en un intento de llamar al orden a Romero, o al hecho de que el superior de los jesuitas en América Central fuese llamado a Roma, probablemente en respuesta a las presiones de los Estados Unidos.³⁷ Los medios de comunicación suprimieron también el llamamiento que hizo Romero a los militares para que se negasen a asesinar, lo cual hubiese dejado bastante más claro hasta qué punto éste se oponía a la política oficial, y cuánto convenía su asesinato a los gobernantes de El Salvador.

Aunque Romero era con mucho el personaje más importante del *establishment* alineado con los movimientos populares, en un principio los medios de comunicación pretendieron que la filiación política de sus asesinos era un misterio indescifrable. El *Washington Post* estimaba que la probabilidad de que fuesen de izquierdas o de derechas era igual, y el *Miami Herald* publicó el 27 de marzo que «ambas salían beneficiadas por el caos que esta muerte pudo haber ocasionado». (Ningún periódico estadounidense sugirió que Popieluszko pudo haber sido asesinado por simpatizantes de Solidaridad para desacreditar al gobierno polaco.) Esta necedad era una postura minoritaria, el grueso de la prensa sostenía que el asesino probablemente era de derechas, aunque sus relaciones eran confusas. Duarte, persona de toda confianza, sugirió que el asesino era demasiado profesional como para ser del país; necesariamente había tenido que ser contratado en el exterior. Obedientemente, el *New York Times*, *Time*, *Newsweek* y el programa *CBS News* repitieron esta opinión hasta la saciedad.³⁸

Si como parece altamente probable, el asesino era un derechista salvadoreño o alguien a su servicio, ¿cuál era su relación, caso de haberla, con el ejército y las fuerzas de seguridad? Anteriormente hemos constatado las estrechas relaciones existentes entre los escuadrones de la muerte y el ejército: cuando menos, hasta cierto nivel

37. Es posible que este error se debiera a un honesto desconocimiento del acontecimiento. El desconocimiento, de todos modos, refleja en parte una falta de compromiso y una perspectiva distorsionada que elimina algunas preguntas del meollo de la investigación.

38. En realidad, esto podría ser cierto. El asesino podría haber sido un miembro de la contra contratado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

tenían un mando común, compartían operaciones y se protegían mutuamente. ¿Pudo el asesino haber sido un miembro de las fuerzas armadas? Dados los vínculos del ejército con las fuerzas paramilitares ¿no es harto probable que éste conociese la identidad del asesino de Romero? Exceptuando a la prensa, los otros medios de comunicación estadounidenses no formularon estas preguntas. Cuando la relación de D'Aubuisson con el asesinato fue del dominio público, los medios evitaron prestar a este tema la debida atención, y no comentaron las estrechas relaciones de éste con las fuerzas oficiales. He aquí una prueba de cómo trabaja un sistema de propaganda.

Por supuesto, cualquier posible relación de los Estados Unidos con el crimen era «muy remota» y los medios de comunicación no se hicieron eco de la misma. Una de las premisas ideológicas de la prensa patriótica es que los Estados Unidos no hacen ese tipo de cosas, sin tener en cuenta la información fáctica que la historia nos proporciona sobre el particular.³⁹ Pero aún así se pudo haber planteado la cuestión: el ambiente que los Estados Unidos estaban ayudando a crear en El Salvador, entrenando y ayudando a un ejército sanguinario cuya violencia había llevado a Romero a una vehemente oposición, ¿no hacía a los Estados Unidos culpables, al menos de una manera indirecta, del asesinato? Pero la prensa tampoco se ocupó de este punto. El *New York Times* citó las declaraciones de Cyrus Vance, Secretario de Estado, acerca del crimen: «Hace dos semanas escribí al arzobispo diciéndole: "compartimos la repugnancia por la violencia provocada por ambos lados y que se cobra vidas de personas inocentes. Deploramos los esfuerzos de aquellos que pretenden silenciar las voces de la razón y la moderación con explosivos, intimidaciones y asesinatos"».⁴⁰ El periódico informaba de que esta carta de Vance era la respuesta al llamamiento efectuado por Romero para que cesase el suministro de armas. El artículo omitió señalar lo más esencial de la argumentación de Ro-

39. Sobre los numerosos intentos *reconocidos* de asesinato contra Fidel Castro, y el asesinato de Patrice Lumumba organizado por la CIA, véase *Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders*, Senate Select Committee to Study Government Operations, 94 Congreso, 1.ª sesión, 20 de noviembre de 1975, S. Rep. 94-465, pp. 13-180.

40. Graham Hovey, «Salvador's Prelate's Death Heightens Fear of War», *New York Times* (26 de marzo de 1980).

mero, y tampoco citaba el párrafo de la carta de Vance en el que éste rechazaba el llamamiento de Romero. Dicho informe tampoco tomó nota de la grave tergiversación que Vance efectuaba respecto a la postura del arzobispo cuando afirmaba que «Compartimos la repugnancia [por] ... ambos lados». También podemos señalar que mientras Romero fue la víctima de las mismas fuerzas a las que Vance daba su apoyo, así como que las previsiones de Romero parecieron confirmarse con su propio asesinato, en el artículo no había ningún deje de ironía o de crítica con respecto a Vance y a sus asociados. Y aquí la prensa no podía alegar desconocimiento alguno. Como más tarde admitieron, los medios de comunicación sabían muy bien que las fuerzas de seguridad eran las causantes de la violencia.

2.3.5. *Asesinatos impunes o triunfantes*

Los asesinos del arzobispo Romero nunca fueron descubiertos o perseguidos «oficialmente», y el caso compartió la suerte del de decenas de miles de salvadoreños asesinados sin que se hiciese justicia. Pero al contrario de lo que sucedió con Popieluszko, a los medios de comunicación de los Estados Unidos les preocupó bien poco quién fue el culpable o pedir su justo castigo.

Posteriormente se recogieron un gran número de pruebas que mostraban que Roberto D'Aubuisson estaba en el centro de la conspiración para asesinar a Romero. A partir de numerosas entrevistas con activistas del partido ARENA y funcionarios de los Estados Unidos, y del examen de los cablegramas del Departamento de Estado, Craig Pyes y Laurie Becklund, periodistas e investigadores, afirmaron en 1983 que D'Aubuisson había planeado el asesinato con un grupo de oficiales militares en activo, quienes echaron a suertes el honor de llevarlo a cabo.⁴¹ El antiguo embajador Robert White, quien tuvo acceso a los cablegramas del Departamento de Estado y a otra información interna mientras desempeñó dicho cargo, declaró también en febrero de 1984 ante un comité del congreso que «más allá de cualquier duda razonable» D'Aubuisson había «planeado y ordenado el asesinato» del arzobispo Rome-

41. Véase Craig Pyes, «Who killed Archbishop Romero?», *The Nation* (13 de octubre de 1984).

ro, y asimismo dio detalles de la reunión de planificación y de la posterior ejecución del francotirador para asegurar así su silencio.⁴² Por otra parte, la confesión de Roberto Santiváñez, antiguo alto funcionario del servicio de inteligencia salvadoreño, aportó más pruebas de la vinculación de D'Aubuisson con el crimen. Según Santiváñez, el asesinato de Romero fue planificado y llevado a cabo por D'Aubuisson con la ayuda de otros antiguos miembros de la Guardia Nacional de Somoza, aunque «bajo la protección del general García y del coronel Carranza».⁴³ Los informantes de Pyes y Becklund indicaron también que D'Aubuisson era un subordinado y aliado político de Carranza, el número dos del ejército salvadoreño hasta su renuncia en diciembre de 1980, forzada por las presiones de los Estados Unidos, y tras la cual se le encargó dirigir la Policía del Tesoro. D'Aubuisson había trabajado también con la oficina central de los servicios de inteligencia de la Guardia Nacional, la G-2, mientras ésta estaba bajo el mando del general Eugenio Vides Casanova. Pyes y Becklund afirmaron que «durante el tiempo en que Vides estuvo al mando de la Guardia, funcionarios militares en servicio activo para la G-2 estuvieron relacionados —según cablegramas del Departamento de Estado— con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, cometido en marzo de 1980 ...».⁴⁴ Cabe señalar que Vides Casanova acabó siendo ministro de Defensa, puesto que siguió desempeñando bajo el gobierno de Duarte.

En resumen, existen suficientes pruebas de la identidad de los asesinos de Romero, y de que éstos estaban relacionados de manera hartamente significativa con los más altos funcionarios del *establishment* militar salvadoreño. De hecho, una investigación judicial que se realizó en El Salvador dirigida por el juez Atilio Ramírez, no tardó

42. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 178.

43. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads», *New York Times* (3 de marzo de 1984).

44. Craig Pyes, «Dirty War in the Name of Freedom», *Albuquerque Journal* (18 de diciembre de 1983). En noviembre de 1987, Duarte anunció nuevas (y bastante insustanciales) evidencias que implicaban a D'Aubuisson en el asesinato, pero a nadie de las reinantes fuerzas de seguridad. El anuncio fue un esfuerzo transparente para mantener su imagen de «moderado», manteniéndose en un terreno intermedio entre los extremistas de derecha y de izquierda. Fue cuidadosamente programado para que coincidiera con la atrevida visita a El Salvador de dos auténticos «moderados», los líderes del FDR Rubén Zamora y Guillermo Ungo, que han vivido en el exilio al estar amenazados de muerte en este Estado terrorista.

mucho en señalar a D'Aubuisson y al general Medrano, protegido de los Estados Unidos en dicho país. Pero Ramírez pronto tuvo que huir del país, tras varias amenazas y un atentado fallido contra su vida, lo que puso fin a la persecución activa del crimen en El Salvador. En el exilio el juez Ramírez afirmó que el grupo de investigación criminal de la policía no llegó al escenario del crimen hasta cuatro días después de cometido, y que ni la policía ni el fiscal general proporcionaron ninguna prueba a su tribunal. Ramírez concluyó que «sin duda alguna» desde el principio había «algún tipo de conspiración para echar tierra sobre el asesinato».⁴⁵

No hace falta decir que el testimonio del juez Ramírez no fue recogido por los medios de comunicación estadounidenses, que tampoco prestaron mucha atención a las sucesivas pruebas de la vinculación de D'Aubuisson con el asesinato. En el mejor de los casos esta información fue publicada en la última página, tratada de manera escueta y nunca situada en un marco de indignación y condena mediante el uso de un lenguaje emotivo o solicitando a los partidarios de Romero que enjuiciasen las pruebas; tampoco suscitó jamás estridentes peticiones de justicia. Hasta la fecha no hemos podido encontrar mención alguna del hecho que los verdaderos gobernantes de esa «democracia incipiente» son oficiales militares que están estrechamente asociados con D'Aubuisson y su camarilla y que bien pueden haber estado implicados en el asesinato.

Tras la detención de D'Aubuisson en una redada del 8 de mayo de 1980, con documentos que mostraban que estaba planificando un golpe de Estado y con pruebas de su vinculación con el asesinato de Romero, fue arrestado y se encontró ante la amenaza de un juicio y posterior encarcelamiento. Se convocó rápidamente una asamblea de todo el cuerpo de oficiales del ejército salvadoreño —unas setecientas personas— que pidieron su liberación: poco después fue puesto en libertad, con la aquiescencia del ministro de Defensa.⁴⁶ Los documentos que se encontraron en su poder desaparecieron del mapa. Las fuerzas de seguridad efectuaron también una redada en las oficinas de asistencia legal del arzobispado, llevándose todos los archivos relacionados con el asesinato. Durante

45. Noam Chomsky, *Turnig the Tide*, South End Press, 1985, p. 103 (hay trad. cast.: *La quinta libertad*, Crítica, Barcelona, 1988).

46. Armstrong y Shenk, *El Salvador*, pp. 160-161.

la reunión del cuerpo de oficiales salvadoreños que antes hemos mencionado el coronel Adolfo Majano, el último de los reformistas en la «reformista» Junta de 1979 fue denunciado y rápidamente expulsado de ésta, siendo sustituido por otro miembro de la línea dura. El ejército expresó su solidaridad con la ultraderecha de los escuadrones de la muerte, y la Junta se reajustó para enfrentarse a esta nueva amenaza contra la imagen de Junta reformista poniendo a Duarte como presidente, que actuaba de figura decorativa en beneficio del Congreso y de los medios de comunicación, asegurando así que las armas llegasen a los asesinos.

Los medios de comunicación estadounidenses prestaron poca atención a esta importante demostración y consolidación del poder de la extrema derecha, y a la vinculación semiformal de los asesinatos del arzobispo Romero. Esta era una clara prueba acerca de la naturaleza del poder en El Salvador y del carácter ficticio de la afirmación de que el gobierno era centrista o reformista. Unos medios de comunicación imparciales hubiesen podido dar a conocer y explicar el significado de esta información. Pero estos hechos contradecían la mitología de Carter y Reagan, de manera que como era de prever los medios guardaron silencio acerca de estos hechos y continuaron perpetuando el mito. El 29 de noviembre de 1980, tras la masacre de los líderes de la oposición en San Salvador, el *New York Times* aventuró que esto significaba «un grave reto a la credibilidad» del gobierno, pero no hay ningún indicio de que la sublevación de mayo de 1980 hubiese modificado su visión del 28 de abril de que éste era «un gobierno centrista pero débil».

Tanto entonces como después los medios de comunicación se avinieron amablemente a la rehabilitación del probable asesino de Romero y a su reintegración dentro de la estructura de poder oficial. Como D'Aubuisson ambicionaba un alto cargo y finalmente podía convertirse en el presidente del cuerpo legislativo salvadoreño, los medios de comunicación no hicieron referencia de sus antecedentes como probable organizador del asesinato del arzobispo Romero y reconocido líder de los escuadrones de la muerte y de los asesinatos masivos. Incluso escondieron bajo la alfombra el abierto antisemitismo de ese fascista.⁴⁷ Nos permitimos sugerir que si un

47. En un artículo del 11 de febrero de 1982, fechado en San Salvador, el periódico mexicano *El Día* citaba a D'Aubuisson diciendo a dos reporteros europeos,

antisemita y asesino profesional, sospechoso de haber organizado el asesinato de Popieluszko en Polonia, fuese candidato y se convirtiese en cabeza del legislativo polaco, tal cosa hubiera suscitado más de una sorpresa en los medios de comunicación estadounidenses.

Durante este período las informaciones de los medios de comunicación se atuvieron al mito central inventado por el gobierno, y los artículos e interpretaciones se cifieron a las premisas básicas del mismo: el «gobierno moderado» al que apoyamos está acosado por el terrorismo de los extremistas de izquierdas y de derechas, y es incapaz de mantenerlos bajo control. El gobierno y los medios de comunicación de los Estados Unidos sabían muy bien que la violencia era fundamentalmente responsabilidad de las fuerzas de seguridad a las que respaldaban, que eran, y siguen siendo, el verdadero poder del país, y de la red paramilitar que dichas fuerzas de seguridad crearon para aterrorizar a la población. Pero se trata de una verdad inexpressada. Hasta ahora los medios de comunicación han mantenido el mito central de los primeros años, aún mucho tiempo después de haber admitido discretamente que éste era una absoluta invención. En un informe acerca de las perspectivas de paz en El Salvador, Lindsey Gruson afirmaba que «hoy, los escuadrones de la muerte de derechas e izquierdas ya no aterrorizan a la población llevándola a la sumisión y al silencio», gracias al éxito del presidente Duarte y de sus ayudantes en los Estados Unidos en conducir al país hacia la democracia, exactamente como predecía el modelo de propaganda.⁴⁸

2.4. COBERTURA INFORMATIVA Y SEGUIMIENTO DEL ASESINATO DE CUATRO RELIGIOSAS ESTADOUNIDENSES A MANOS DE LA GUARDIA NACIONAL SALVADOREÑA

El 2 de diciembre de 1980 cuatro religiosas norteamericanas que trabajaban en El Salvador —Maura Clarke, Jean Donovan, Ita

uno de ellos alemán, que «Uds. los alemanes son muy inteligentes; se dieron cuenta de que los judíos eran responsables de la propagación del comunismo y empezaron a matarlos». Mientras la prensa estadounidense hinchaba falsas declaraciones antisemitas de los sandinistas, esta manifiesta aprobación del Holocausto no fue recogida por la elite de los medios de comunicación.

48. «Peace Is Still a Long Shot in El Salvador», *New York Times* (27 de septiembre de 1987), Suplemento semanal.

Ford y Dorothy Kazel— fueron secuestradas, violadas y asesinadas por miembros de la Guardia Nacional salvadoreña. Este crimen resultó tremendamente inoportuno para la administración Carter, que apoyaba a la Junta salvadoreña como presunto gobierno «reformista» y trataba de convencer a la opinión pública y al Congreso de que dicho gobierno era merecedor de ayuda. Al tiempo que suspendía temporalmente la ayuda militar a El Salvador, la administración Carter buscaba una rápida y sigilosa resolución del caso. Con el pretexto del anuncio de una ofensiva de los rebeldes reanudó la ayuda y, contraviniendo sus promesas, antes de que el gobierno salvadoreño hubiese emprendido cualquier investigación. Rápidamente fue enviada a El Salvador una comisión encabezada por William P. Rogers, con la misión de indagar los hechos y de ofrecer la ayuda de los Estados Unidos para llevar a cabo la investigación. El informe de la comisión indicaba que «no hay ninguna prueba que indique que altas autoridades salvadoreñas hayan estado implicadas en el asesinato», aunque no mencionaron que el procedimiento seguido para averiguar tal cosa no fue otro que preguntar a las propias autoridades si estaban o no implicadas. La comisión reconoció que la justicia no florecía en El Salvador,⁴⁹ pese a lo cual no propuso ninguna investigación independiente y se limitó a solicitar a la Junta salvadoreña que prosiguiese las pesquisas con toda energía. Señaló que la Junta había prometido buscar la verdad «dondequiera que estuviese, en cualquier parte del país y a cualquier nivel».⁵⁰ Rogers tardó demasiado en admitir que quizás había sido un poco optimista al esperar que la Junta salvadoreña se ocupase del caso con seriedad.⁵¹

Con la llegada de la administración Reagan, la ya escasa preocupación por encontrar a los culpables disminuyó aún más, y el predominio del interés en defender el régimen cliente de El Salvador fue aún más contundente. Pronto quedó claro que el tema se podía relegar al olvido —junto a los otros miles de salvadoreños muertos— excepto en lo que hacía referencia a las exigencias de las relaciones públicas. También era bastante evidente el deseo de apoyar cualquier

49. Esta afirmación fue omitida de la edición del informe que llegó hasta el público.

50. Informe, p. 8.

51. Ana Carrigan, *Salvador Witness*, Simon & Schuster, Nueva York, 1984, p. 271.

posible explicación plausible. Alexander Haig, secretario de Estado, declaró ante un comité del Congreso para Asuntos Exteriores que las pruebas «hacían creer» que las cuatro mujeres fueron asesinadas mientras trataban de organizar una barricada, mentira descartada que pronto fue reconocida como tal por el Departamento de Estado.⁵² Jean Kirkpatrick, embajadora de Reagan en las Naciones Unidas, lo hizo aún mejor que Haig al sugerir que las cuatro mujeres eran activistas políticas del «Frente» (otra clara mentira, como las declaraciones de Haig), e insinuó claramente que eran un blanco legítimo.⁵³

Pese a que Kirkpatrick afirmó también que «sin lugar a dudas» el gobierno salvadoreño «no era responsable» de los asesinatos, pronto surgieron pruebas que mostraron que las cuatro mujeres habían sido asesinadas por miembros de la Guardia Nacional. Entonces la administración se apresuró a manifestar que estaba claro que los guardias locales habían «actuado por su cuenta». Esta explicación fue repetida una y otra vez pese a que no había ninguna investigación que la respaldase y a que no se tuvo en cuenta la existencia de importantes pruebas que indicaban lo contrario. Un modelo de propaganda puede esperar que los medios de comunicación hagan los honores a la explicación predilecta del gobierno, y

52. *Foreign Assistance Legislation for Fiscal Year 1982*, parte 1, Hearings before the House Committee on Foreign Affairs, 97 congreso, 1.ª sesión, marzo de 1981, p. 163. Carta de David E. Simcox, del Departamento de Estado, a William P. Ford, fechada el 16 de abril de 1981. Cuando Haig hizo esta declaración, ya era bastante evidente que las mujeres habían sido violadas y asesinadas por disparos a quemarropa por la espalda. Haig nunca se disculpó por esta insultante mentira, ni sufrió por ello ningún ataque serio en los medios de comunicación, con la honorable excepción de Anthony Lewis. Este episodio tampoco parece haber tenido ningún efecto noticiable sobre la reputación de Haig.

53. «Tenemos que ser más claros sobre esto de lo que estamos siendo [sic]. Se trataba de activistas políticas que actuaban en nombre del Frente y alguien que está usando la violencia para oponerse al Frente mató a esas mujeres» (entrevista en *Tampa Tribune*, 16 de diciembre de 1980, citada en Carrigan, *Salvador Witness*, p. 279). El ex embajador Robert White señaló que observaciones como estas de Kirkpatrick, en el contexto de El Salvador eran «una incitación al asesinato» (T. D. Allman, *Unmanifest Destiny*, Doubleday, Nueva York, 1984, p. 17).

Jean Donovan preguntó al embajador Robert White, «¿Qué hacen ustedes cuando incluso ayudar a los pobres, ocuparse de los huérfanos, está considerado como un acto de subversión por el gobierno?» (citado en Allman, p. 3). Ayudar a los huérfanos en el campo salvadoreño también era visto como un acto subversivo por los funcionarios de la administración Reagan.

que, a diferencia de lo que sucedió en el caso Popieluszko, en el que algunos puntos importantes podían sumarse a la búsqueda de culpabilidad en las altas esferas, los medios de comunicación se muestren en este caso menos impacientes por encontrar aquello que su gobierno desea ocultar.

La diferencia entre los asesinatos de las cuatro mujeres y otros varios miles pendientes de investigación y resolución en El Salvador estribaba en que las familias de esas víctimas eran ciudadanos estadounidenses, y presionaron hasta que finalmente lograron que el Congreso considerase esos crímenes en particular como piedra de toque y símbolo político, con lo que pasaron a formar parte del orden del día político. Finalmente se exigieron juicio y condenas como condición para la ratificación y ayuda al gobierno militar de El Salvador. Así, en ese caso, tanto la administración Reagan como los militares salvadoreños fueron obligados a «ver cómo se hacía justicia». Para ello tuvieron que transcurrir tres años y medio, y ni aun así se destaparon las responsabilidades a alto nivel. Para los medios de comunicación debió ser todo un reto presentar estos asesinatos y el aplazado y obstacufizado resultado de tal manera que se mantuviesen bajos los niveles de indignación; quitar hierro a las características del sistema que asesinó a las mujeres y al que hubo que *forzar* a que encontrase a los hombres de baja graduación culpables del crimen (tarea que les costó años realizar). Pero al final estos medios de comunicación salieron airosos del trance.

2.4.1. *Detalles de las salvajadas*

El hallazgo del cadáver de Popieluszko fue noticia de portada en el *New York Times* —en realidad, la noticia de portada fue el fracaso inicial en encontrar su cuerpo— y en todos los medios de comunicación analizados aquí los detalles de su rapto, el estado de su cadáver y la naturaleza de sus heridas fueron pormenorizadamente narrados con una delectación apenas contenida (véase cuadro 2.2). Estos detalles se repetían a la menor oportunidad (y principalmente durante el juicio). Por el contrario, el hallazgo de los cuerpos de las cuatro mujeres mereció un espacio en la última página del *New York Times*, en los otros cuatro medios que hemos tomado como muestra, los relatos de las violencias cometidas sobre las

mujeres asesinadas fueron muy escuetos, se omitieron muchos detalles y tras la revelación inicial no se volvieron a publicar más. No se hizo ningún intento para reconstruir el escenario de su agonía y de la brutal violencia que sufrieron, de manera que el efecto dramático presente en los relatos acerca del asesinato de Popieluszko desapareció aquí por completo. El asesinato de las cuatro religiosas se trató como algo remoto e impersonal.

La información del *Time*, por ejemplo, después de dar el nombre de las cuatro víctimas, decía: «Dos de las mujeres fueron violadas antes de recibir un tiro en la parte posterior de su cabeza». También el relato del *New York Times*, que figura en el cuadro 2.2, fue bastante sucinto. El informe de la Comisión Rogers señalaba que una de las víctimas había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza, y que «las heridas causadas por la salida del proyectil habían destrozado su cara». El informe Rogers indicaba también que las personas presentes en la exhumación habían encontrado «grandes» heridas y que los cadáveres «presentaban también contusiones». En su informe *Weakness and Deceit* (Debilidad y Engaño), Raymond Bonner afirmaba:

Los cadáveres estaban hacinados uno sobre el otro en la tosca sepultura. El primero que fue extraído del agujero era el de Jean Donovan, misionera seglar de Cleveland que contaba veintisiete años de edad. Su cara había sido destrozada por una bala de gran calibre que le habían disparado en la parte posterior de la cabeza. Sus pantalones estaban desabrochados y su ropa interior enrollada alrededor de los tobillos. Los campesinos de la zona la encontraron desnuda de cintura para abajo, y trataron de colocarle de nuevo sus prendas antes de enterrarla. A continuación salió el cadáver de Dorothy Kazel, monja ursulina de cuarenta años, también de Cleveland. En el fondo del hoyo estaban dos monjas de Maryknoll, Ita Ford, de cuarenta años, y Maura Clarke, de cuarenta y nueve, ambas de Nueva York. Todas las mujeres habían sido ejecutadas a quemarropa. Los campesinos que las encontraron dijeron que una de ellas tenía la boca atiborrada con su ropa interior, otra la tenía enrollada alrededor de sus ojos. Todas ellas habían sido violadas.

Podemos observar que tanto el *Time* como el *New York Times* olvidaron mencionar las contusiones (cuestión en la que abundaron repetidamente en el caso Popieluszko), la destrucción de la cara de

Jean Donovan, suprimieron también el degradante y degradado uso de la ropa interior de las religiosas,⁵⁴ así como el relato de los campesinos que encontraron los cadáveres. Estos detalles y otros proporcionados por Bonner y suprimidos por el *Time* y el *New York Times* (y también por *Newsweek* y el programa *CBS News*) añadían patetismo y fuerza emocional al cuadro. Se echó mano a tales cosas por un Popieluszko, pero no para cuatro mujeres estadounidenses asesinadas por un Estado cliente de los Estados Unidos. El informe Rogers señalaba también que los cirujanos forenses enviados al lugar del crimen por la Junta, a instancias del embajador Robert White, rehusaron efectuar las autopsias alegando que no disponían de mascarillas quirúrgicas. Este aspecto, que hubiera podido mostrar el lado oscuro de la Junta y de sus agentes, también fue suprimido en los relatos de los medios de comunicación de Estados Unidos.

En el caso Popieluszko, tanto el hallazgo del cuerpo como el juicio motivaron una agresiva descripción de los detalles del asesinato y del estado en que se encontró el cadáver. La reticencia de los medios de comunicación con respecto a estos temas cuando se hallaron los cadáveres de las cuatro mujeres fue superada por su reserva durante el juicio. Lidia Chávez, del *New York Times*, que asistió al mismo, informó de que tras ocho horas de testimonios y las siete horas de discusión se centraron en las actividades de las mujeres en El Salvador, «y en los detalles de sus raptos y muertes», pero su artículo no daba ningún dato acerca de las pruebas médicas.

2.4.2. Falta de indignación y de las insistentes demandas de justicia

En el caso Popieluszko la prensa transmitió la sensación de que se trataba de una atrocidad intolerable que exigía una reparación inmediata. En el caso del asesinato de las cuatro mujeres estadounidenses, aunque los medios afirmaban y citaban a funcionarios del gobierno que consideraban que era un acto brutal y terrible, nadie lo consideró intolerable, y tampoco insistieron (o mencionaron a personas que sí lo hacían) en pedir justicia. Se limitaron a confiar

54. La versión del *New York Times*, que aparece en el cuadro 2.2, es una versión sucinta e inexacta del uso de la ropa interior.

totalmente en los «altos oficiales» de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, que daban una versión más resignada de la situación y que estaban dispuestos a permitir que el sistema salvadoreño de justicia solucionase el tema. Así pues, los medios de comunicación adoptaron también esa vena filosófica: las mujeres, como señalaba el *New York Times*, fueron «víctimas de la estúpida y creciente violencia» de El Salvador (15 de diciembre de 1980). Con Popieluszko, eran auténticos funcionarios del gobierno los que cometieron el crimen, no oscuras fuerzas (a las que resulta más difícil pedir cuentas).

Ni siquiera los funerales y las misas en memoria de las mujeres que se celebraron en los Estados Unidos sirvieron a los medios de comunicación para condenar el hecho y pedir justicia; en su mayoría pasaron desapercibidas o fueron suprimidas. El *New York Times* (8 de diciembre de 1981) publicó en su última página un minúsculo despacho de la UPI acerca de las honras fúnebres de la hermana Dorothy Kazel, reproduciendo la apolítica afirmación del obispo Anthony M. Pilla según la cual «la vida de un misionero nunca ha sido fácil ni agradable».

Debemos tener en cuenta también que, como indicaba la embajadora Kirkpatrick, las víctimas quizá se habían buscado su suerte. El 15 de diciembre de 1980 la revista *Newsweek* publicaba que «Probablemente la violencia en El Salvador se cernirá con creciente ferocidad sobre la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y monjas están a favor de las reformas, y algunos de ellos son militantes izquierdistas. Estas opiniones causan problemas, incluso para los miembros del clero más moderados». (Es de destacar aquí el uso impersonal de «la violencia»; en ningún momento, el artículo sugiere que fue el gobierno apoyado por los Estados Unidos el que inició los asesinatos y el responsable de la mayoría de ellos.) Por el contrario, en el caso Popieluszko los medios de comunicación se cuidaron muy bien de sugerir que éste había sido una lamentable víctima del creciente conflicto entre el Estado y las fuerzas rebeldes (o entre el Este y el Oeste). Esa situación era mucho más sencilla que la de El Salvador: Popieluszko fue asesinado por funcionarios del Estado, y esto era algo intolerable. Las complicaciones y el recurso a las necedades filosóficas acerca de la «violencia» inlocalizable quedaban reservados a las muertes en las provincias.

2.4.3. *La falta de entusiasmo por la búsqueda de responsabilidades en las altas esferas*

Como hemos visto anteriormente, en el caso Popieluszko los medios de comunicación se mostraron día a día ansiosos y agresivos para buscar y mostrar las pruebas de la participación de las altas esferas en el asesinato. En este otro caso tuvieron inmensas dificultades para encontrar cualquier vinculación del gobierno salvadoreño con los asesinatos, pese a que las pruebas estaban delante de sus ojos. Su celo investigador fue más bien modesto y siguieron gustosos las indicaciones de («confiad en mí») Duarte y de los funcionarios del gobierno estadounidense cuando el caso salió a la luz, sin decir esta boca es mía. El ejército y las fuerzas de seguridad de El Salvador habían asesinado *salvadoreños* de la misma manera que habían asesinado a las cuatro mujeres. Por si fuese poco, las iglesias a las que las mujeres estaban vinculadas habían recibido hacía poco las amenazas del ejército. Una prueba aún más evidente es que los militares locales habían obligado a los campesinos del lugar a que enterrasen los cadáveres. Pero los medios de comunicación no utilizaron esta información para ayudar a encontrar el escenario de los crímenes.

La argumentación inicial de los gobiernos de los Estados Unidos y de El Salvador era que no había ninguna prueba de la vinculación de los militares con el crimen, si bien el que hubieran encubierto los cadáveres no había sido correcto. El 8 de diciembre la Junta emitió un comunicado en el que afirmaba que los asesinos habían sido «terroristas de extrema derecha»,⁵⁵ y Duarte reiteró dicha opinión a la prensa, que hizo caso omiso de ella. De acuerdo con la versión del gobierno, el *New York Times*, a los veinte días del asesinato, hablaba todavía de «asaltantes no identificados» pese a que las pistas que apuntaban hacia la Guardia Nacional eran prácticamente abrumadoras, y repitió el descubrimiento del informe Rogers acerca de que las fuerzas de seguridad pudieron haber intentado «ocultar las muertes» tras el hallazgo de los cadáveres.⁵⁶

55. «Statement by Revolutionary Governing Junta», 8 de diciembre de 1980. El comunicado señalaba también que «el gobierno revolucionario repudia y condena la violencia y los crímenes irracionales que ésta genera».

56. Juan de Onís, 24 de diciembre. Para el *New York Times* no se plantea la pregunta de por qué las fuerzas de seguridad querían ocultar los cuerpos si no estaban involucrados en los asesinatos.

Paulatinamente se filtraron gran número de pruebas que indicaban que las mujeres habían sido asesinadas por miembros de la Guardia Nacional, de manera que no fue posible eludir por más tiempo la vinculación de las fuerzas gubernamentales. A consecuencia de ello se realizó un proceso en dos partes a fin de «delimitar los daños y perjuicios», expuesto por funcionarios salvadoreños y estadounidenses y fielmente recogido por los medios de comunicación. Una de las partes de ese proceso fue la distinción entre el gobierno y la Guardia Nacional. En el caso Popieluszko, el lector jamás pudo dejar de tener presente que la policía asesina formaba parte del gobierno polaco. En el caso de las cuatro mujeres estadounidenses, los medios de comunicación apenas se hicieron eco de que los asesinos tenían alguna conexión con el gobierno salvadoreño. Esto seguía las directrices del mito fundamental, reflejado al pie de la letra por la prensa, según el cual el gobierno salvadoreño era centrista y reformista e intentaba controlar los asesinatos cometidos por extremistas de derechas e izquierdas.⁵⁷ Esta invención propiciaba un sistema de doble vía: por una parte los asesinatos masivos del ejército y sus afiliados y por otra las lamentaciones simultáneas de los reformistas, incapaces de controlar a los extremistas. Esto recordaba el apogeo de los asesinatos masivos en Argentina, época en la que el *New York Times* acostumbraba a calificar a la Junta y a gentes como el recientemente condenado general Videla como moderados «incapaces de controlar a los extremistas de derechas» que asesinaban a la población.⁵⁸

El objetivo fundamental del primer proceso fue la eliminación de cualquier investigación seria acerca de la responsabilidad de los funcionarios del gobierno salvadoreño. Desde el principio hasta el final la estrategia salvadoreña fue dilatoria, puesto que la idea de condenar a soldados por haber matado a alguien era contraria a su práctica habitual y, además, habían pocas dudas de que las responsabilidades por el crimen apuntaban más alto. La estrategia oficial de los Estados Unidos, una vez quedó claro que la Guardia Nacional era la responsable del asesinato, fue la de juzgar y condenar a los asesinos de baja graduación —lo que era imprescindible para

57. Hemos discutido este mito en «El arzobispo Óscar Romero» (p. 95).

58. Juan de Onis, «Rightist Terror Stirs Argentina», *New York Times* (29 de agosto de 1976).

vindicar el sistema de justicia en El Salvador, por lo menos para que el Congreso mantuviera el envío de dólares— al tiempo que protegían a los «reformistas» en el gobierno. El 30 de septiembre de 1981 el embajador Deane Hinton declaró con aplomo que los guardias nacionales del lugar «habían actuado por su propia cuenta», pese a que documentos internos del Departamento de Estado reconocían en aquel momento que la investigación salvadoreña había sido una burla, y que existían pruebas adicionales que indicaban la complicidad a alto nivel en el asesinato.⁵⁹ Con todo, la postura oficial estaba clara. Y para acompañarse a la versión oficial, los medios de comunicación tuvieron que dejar de investigar las vinculaciones de las altas esferas e incluso suprimir las pruebas procedentes de otras fuentes. Y así lo hicieron.

El periodista John Dinges, después de investigar durante dos meses los asesinatos, presentó a través de la Pacific News Service un informe en el que mostraba que éstos habían sido planificados hasta el último detalle.⁶⁰ En primer lugar, se habían interceptado comunicaciones por radio en las que los militares comentaban la llegada de las mujeres al aeropuerto, y otras pruebas de la estrecha vigilancia de sus planes de vuelo que sugerían una operación militar extensa y coordinada. En segundo lugar, un antiguo viceministro de planificación relató a Dinges que tan sólo dos semanas antes del asesinato, Guillermo García, ministro de Defensa salvadoreño, realizó durante media hora una exposición en la que denunció a los sacerdotes y monjas que se encontraban en la misma zona de los asesinatos, afirmando que era necesario hacer algo al respecto.

En una notable hazaña de autocensura, la mayoría de medios de comunicación ignoraron completamente los descubrimientos de Dinges, cuyo informe fue publicado en el *Washington Post*, *Los Angeles Times* y en otros quince periódicos, pero del que ni una sola línea llegó al *New York Times*, *Time*, *Newsweek* o al programa *CBS News*, y ninguno de ellos se ocupó de seguir las pistas que se daban en él. En cambio, continuaron repitiendo las afirmaciones de Duarte y de los funcionarios estadounidenses en las que manifestaban su satisfacción porque los asesinatos no habían trascendido el

59. Véase *infra*, nota 67.

60. John Dinges, «Evidence Indicates Military Planned Missionaries' Deaths», *National Catholic Reporter* (17 de julio de 1981).

ámbito de los guardias nacionales, y que los oportunos canales legales salvadoreños se ocuparían con toda diligencia del asunto.

En marzo de 1984 el coronel Roberto Santiváñez, alto oficial del servicio de información salvadoreño, accedió a «hablar» de la red de escuadrones de la muerte en El Salvador, y sus declaraciones hallaron eco en el programa *CBS News* y en la portada del *New York Times*.⁶¹ Santiváñez proporcionó una serie de detalles fiables acerca del asesinato de las cuatro mujeres, indicando que éste había sido realizado por orden directa del coronel Óscar Edgardo Casanova, responsable de la zona en que ocurrieron. Dos semanas más tarde el coronel Casanova fue asignado a otro destino, como parte del encubrimiento oficial. Su primo hermano Eugenio Vides Casanova, ministro de Defensa elegido por Duarte y jefe de la Guardia Nacional en diciembre de 1980, conocía la orden de asesinato dada por su primo, al igual que Duarte. Pese a que esto era una abrumadora prueba de la implicación de altos oficiales en los asesinatos, no se efectuó seguimiento alguno de la historia ni se estableció ninguna relación con el relato de Dinges acerca de las discusiones de alto nivel sobre la necesidad de tomar alguna determinación con respecto a los trabajadores religiosos. Ni editoriales, ni indignación, ni ninguna presión para tomar cartas en el asunto.

En resumen, las pistas proporcionadas por Dinges y el testimonio de Santiváñez indicaban claramente que el asesinato de las cuatro mujeres tuvo su origen en una decisión de alto nivel. Aun estaba más claro que oficiales de rango medio del gobierno habían

61. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads» (3 de marzo de 1984). Adviértase la «suavidad» del titular. El *New York Times* desperdió la oportunidad de un titular como: «Duarte and Defense Minister Accused of Cover-up of Murder of Four American Women». Santiváñez cobró 50.000 dólares por declarar como testigo, suma que solicitó a causa del riesgo que corría y de la probabilidad de un futuro con escasos ingresos como resultado de su confesión. Este pago recibió una publicidad desacostumbrada que ponía en duda la honestidad de su testimonio, y el *New York Times* despachó su testimonio por esta cuestión de principios, algo que nunca aplican a los desertores soviéticos, los cuales necesitan menos protección. La revelación de que los «dirigentes demócratas» que la CIA organizó como frente civil para la Contra recibieran durante años unos 80.000 dólares anuales, libres de impuestos, de manos de la CIA, nunca comprometió su integridad como fuentes de información para los medios de comunicación. El desertor nicaragüense Miranda cobró 800.000 dólares por sus servicios sin ser desacreditado.

ordenado el asesinato, y que los oficiales de alto nivel estaban comprometidos en una continua y sistemática ocultación de los hechos. En el caso polaco, nunca se encontraron pruebas de la vinculación de las altas esferas, pero los medios de comunicación estadounidenses incidieron en el tema de una manera implacable. En el caso de las cuatro religiosas, en el que habían abundantes pruebas de las implicaciones de alto nivel, dichos medios de comunicación eludieron hacer presión sobre el tema y no se preocuparon por seguir investigando las pistas, por otra parte evidentes.

No podemos describir aquí con todo detalle el fiasco del proceso judicial salvadoreño, que nunca hubiese avanzado de no ser por las presiones y amenazas de los Estados Unidos.⁶² En algún momento los medios de comunicación censuraron al gobierno salvadoreño por «eludir» la investigación,⁶³ pero por otra parte omitieron captar la profundidad y el alcance del proceso dilatorio y no analizaron lo que esto significaba para esa «incipiente democracia». Se limitaron a transmitir las declaraciones de los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos, sobre la situación del juicio sin ningún tipo de sarcasmo y sin dar muestras de escandalizarse. Si *hubiesen* dado todos los detalles, el gobierno salvadoreño habría quedado totalmente desacreditado. Así pues, las claras evidencias del rechazo de los oficiales salvadoreños a emprender alguna acción o a interrogar a los testigos pertinentes, y de las amenazas a testigos, abogados y jueces —que hubiesen sido aireadas con fruición en el caso de la investigación polaca—, no fueron tenidas en cuenta.

62. Las investigaciones de Michael Posner y del Lawyers' Committee for International Human Rights dieron como resultado una serie de informes excelentes, fechados en septiembre de 1981, el 20 de julio de 1982 y el 1 de febrero de 1983, que contenían evidencias detalladas y aplastantes de un proceso judicial completamente mediatizado y encubierto oficialmente. Una vez más, al igual que con el informe Dinges, estos documentos fueron ignorados de plano por los medios de comunicación estadounidenses, suprimiendo así los hechos y pistas que contenían. La cobertura informativa de los documentos del comité de abogados fue insignificante. Michael Posner y Scott Greathead consiguieron colocar un artículo de opinión en el *New York Times* del 6 de diciembre de 1983 titulado «3 Years After the Killings, No Justice in Salvador».

63. Tanto el *Time* como el *Newsweek* publicaron artículos sobre el obstruccionismo en febrero de 1981 —el artículo del *Time* del 23 de febrero se titulaba «Stonewalling» (Obstruccionismo)—, pero aunque el obstruccionismo continuó durante años, ahí terminó el interés de esas revistas por la cuestión.

Bastan algunas pinceladas acerca del modo de proceder de los salvadoreños. Por ejemplo, dos años después del crimen,

... los fiscales manifestaron desconocer el testimonio [que constaba en los archivos del juzgado] del antiguo guardia César Valle Espinosa, fechado el 9 de agosto de 1982, que hacía referencia a las declaraciones del suboficial Colindres Alemán según la cual existían «órdenes de la superioridad» para prender a las mujeres. Los fiscales tampoco conocían las declaraciones que el sargento Dagoberto Martínez, antiguo guardia nacional, había efectuado al FBI en Los Ángeles —California— en las que afirmaba la existencia de una operación para el encubrimiento del crimen ya desde diciembre de 1980.⁶⁴

Y otro detalle ilustrativo del proceso es que dos de los tres jueces a los que se les asignó el caso dimitieron por considerar que sus vidas corrían peligro. Como ya hemos visto, el juez Ramírez, que investigaba el asesinato de Romero, tuvo que huir por la misma razón. La acumulación de estas pruebas revestía una importancia significativa, pero no fue nunca tratada globalmente por la prensa (apenas fueron tratadas individualmente en las últimas páginas de los periódicos). Un tercer ejemplo: según el antiguo embajador Robert White, dos de los guardias nacionales que hubiesen podido establecer la relación de los oficiales de alto rango con los asesinatos fueron muertos a su vez por los escuadrones de la muerte, si bien constaban como caídos en acción.⁶⁵ Y un último ejemplo: cuando finalmente se designaron abogados para que defendiesen a los hombres que efectuaron los disparos, uno de ellos, Salvador Antonio Ibarra, estaba dispuesto a defenderlos con seriedad. Sus colegas presionaron a Ibarra para que desistiera de su propósito, afirmando que «la posibilidad de un encubrimiento había sido investigada exhaustivamente», pero Ibarra no cedió. A consecuencia de su rechazo a acceder a sus pretensiones el 30 de octubre de 1983 Ibarra fue secuestrado y torturado en los cuarteles generales de la Guardia Nacional.⁶⁶ Liberado gracias a las presiones de los Estados Unidos, Ibarra abandonó el país, dejando campo libre a un equipo legal

64. Lawyer's Committee for International Human Rights, *Update: Justice in El Salvador: A Case Study*, 1 de febrero de 1983, p. 17.

65. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 80.

66. Larry Rother, «Salvador Defense Lawyer Charges Cover-Up in Slaying of U.S. Nuns», *New York Times*, 6 de mayo de 1985.

dispuesto a aceptar que se había producido una «investigación exhaustiva» de las posibles implicaciones de alto nivel. Los medios de comunicación se ocuparon escuetamente de este incidente aislado, pero la prensa libre no hizo mención de todos los demás.

También el gobierno de los Estados Unidos estaba comprometido en el encubrimiento sistemático tanto de la ocultación salvadoreña como de lo que sucedió en realidad. Los medios de comunicación estadounidenses, si bien mencionaron brevemente las evasivas del gobierno salvadoreño, eludieron llamar la atención sobre las igualmente importantes mentiras y omisiones de su propio gobierno. Como ya hemos señalado, las administraciones de Carter y de Reagan priorizaron la protección a su cliente por encima de las peticiones de justicia respecto de cuatro ciudadanas estadounidenses asesinadas por agentes del gobierno salvadoreño. La protección del gobierno de los Estados Unidos a su cliente adoptó diversas formas. Una de ellas era la colaboración activa en el encubrimiento salvadoreño. El sargento Dagoberto Martínez obtuvo permiso para emigrar a los Estados Unidos en diciembre de 1980, y pese a que el posterior interrogatorio al que le sometió el FBI indicaba que Martínez admitió conocer a los autores del crimen y que ocultó tal información —violando la ley salvadoreña—, no se efectuó ninguna acusación en su contra. Los funcionarios estadounidenses afirmaron una y otra vez que no habían razones para creer que los oficiales de alto rango supiesen algo del crimen o hubiesen participado en él, cuando en realidad sabían sin lugar a dudas que lo estaban encubriendo y que se habían negado a investigarlo.⁶⁷ También el Departamento de Estado mintió sistemáticamente acerca de la minuciosidad con la que se había llevado a cabo la investigación. El embajador Hinton declaró públicamente que el guardia nacional Pérez Nieto «había sido interrogado concienzudamente y siempre negó que cualquiera de sus superiores le hubiese ordenado vigilar a las mujeres». Sin embargo un cablegrama del propio Departamento de Estado descri-

67. El mismo mes en que Hinton mantenía con toda seguridad que los guardias nacionales de grado inferior habían actuado por cuenta propia, memorándums internos del Departamento de Estado consignaban que «la lectura de los documentos planteó varias preguntas que creemos que deberían habersele ocurrido a un investigador cuyo propósito real hubiese sido determinar quién había cometido el crimen» (citado en *Update*, p. 31).

bía el testimonio de Pérez Nieto como «incompleto, evasivo y poco dispuesto a cooperar».⁶⁸

Otra de las formas de la participación oficial de los Estados Unidos en el encubrimiento del crimen fue su rechazo a divulgar información sobre la investigación salvadoreña y de las pruebas que ellos mismos habían descubierto. El informe Rogers dio a conocer tardíamente y en una versión que omitía una de las afirmaciones del informe original con respecto a la lamentable situación del sistema de justicia salvadoreño. En respuesta al aumento de voces que criticaban los retrasos, el gobierno de los Estados Unidos encargó al juez Harold R. Tyler que llevase a cabo una nueva investigación. Una vez más, dicho informe fue puesto en cuarentena durante mucho tiempo, al parecer porque en él constaban algunas serias críticas al proceso judicial salvadoreño, que hubiesen podido entorpecer los planes de la administración Reagan, deseosa de hacer constar los progresos cada vez que ello fuese necesario.⁶⁹ Las familias y los abogados de las víctimas se encontraron sistemáticamente con la poca disposición del gobierno estadounidense para proporcionarles información del caso. Las razones aducidas para ello es que se trataba de información delicada cuya divulgación podía interferir el proceso legal en El Salvador. Dado que dicho proceso era una broma macabra, que avanzaba sólo en función de las amenazas estadounidenses, parece claro que dichas razones eran claramente fraudulentas. Además, Duarte no se cansaba de repetir que con toda seguridad los guardias arrestados eran culpables, y que ninguna persona de mayor graduación estaba relacionada con el caso, prejuzgándolo así de manera descarada. La única razón pausable del encubrimiento estadounidense es que la administración deseaba minimizar la publicidad adversa con respecto a la actuación de su sanguinario cliente. La información sobre lo que sucedía en realidad, o sus propios análisis internos o valoraciones del proceso legal salvadoreño hubieran dado una mala imagen de su cliente. La administración esperaba que el caso «perdiere actualidad», pero mientras tal cosa sucedía deseaba tener bajo su control la publicidad del mismo.

68. Citado en *Update*, pp. 30-31.

69. Sobre la investigación de Tyler, véase Bonner, *Weakness and Deceit*, pp. 78-80.

En parte las razones de la administración para anhelar ese control eran que éste les permitía hablar de un progreso razonable en el seguimiento del caso cada vez que el gobierno militar necesitase dinero. Como sucede con países satélites derechistas, la «mejoría» se produce siempre en momentos de crisis financiera. En su informe de julio de 1982 el Departamento de Estado consideró que se había realizado un «progreso sustancial» en el caso, y aseguró que habría juicio para finales de 1982. El informe de principios de 1983 reflejaba los «avances significativos» del caso. Esta manipulación de las pruebas para proteger el envío de armas y dinero al régimen no hubiera sido fácil de publicarse todas las informaciones o de contar con una prensa crítica y honesta.

Este encubrimiento del proceso judicial salvadoreño, pese a que se trataba del asesinato de cuatro mujeres estadounidenses, no suscitó en la prensa ni indignación ni comentarios sarcásticos, ni logró que ésta ofreciese otra cosa que una mínima información de la investigación.

2.4.4. *El juicio: cinco guardias nacionales a cambio de 19,4 millones de dólares*

El juicio de los cinco principales asesinos de las cuatro mujeres mereció haber sido narrado con tintes kafkianos, pero los medios de comunicación estadounidenses se ocuparon de él de forma muy directa. El juicio se celebró tres años y medio después de cometidos los asesinatos, pese a que los tiradores fueron identificados inmediatamente y a las enormes presiones de los Estados Unidos. Dos de los tres jueces a los que se les asignó el caso dimitieron al temer por sus vidas, y el único abogado defensor independiente abandonó el país después de una sesión de torturas en los cuarteles generales de la Guardia Nacional. Durante el juicio los defensores no realizaron esfuerzo alguno por exculpar a sus clientes basándose en que éstos habían recibido «ordenes de la superioridad», aunque ese es el tipo de defensa habitual en tales casos, y además disponían de pruebas significativas para corroborarlo. Los medios de comunicación se abstuvieron de comentar estos aspectos, pese a que hacían pensar en temores, acuerdos o en ambas cosas a la vez, y a que en ocasiones, como hemos visto en el caso Popieluszko, estos medios están

absolutamente alerta ante posibles encubrimientos. En marzo de 1984 Santiváñez, antiguo funcionario del servicio de información, declaró que los guardias sabían que «si no mencionaban el nombre de Casanova, saldrían de la prisión tan pronto como ello fuese factible».⁷⁰ En el contexto del juicio no se hizo referencia a estas declaraciones, y los medios de comunicación tampoco.

Como había sucedido en las elecciones salvadoreñas de 1982 y 1984, tanto la puesta en escena como la motivación del juicio eran totalmente estadounidenses. En palabras de Ana Carrigan:

En el juzgado la seguridad estaba en manos de una unidad especial de Protección Judicial, formada y entrenada en Glencoe, Alabama; los miembros del jurado fueron conducidos al juzgado por la mañana y devueltos a sus hogares tras el veredicto en vehículos blindados de la embajada estadounidense, que asimismo había proporcionado la comida y camas de campaña por si fuese necesario que los jurados y el personal del juzgado pasaran la noche bajo la protección de los custodios del mismo, y cuando se fue la luz, en el preciso momento en que los fiscales empezaban su exposición, se pudo restablecer gracias a la iluminación de emergencia enviada por el personal de la embajada.⁷¹

Lo que estaba en juego eran los dólares estadounidenses. El Congreso había congelado el envío de 19,4 millones de dólares a la espera del resultado favorable del caso. Durante las veinticuatro horas siguientes al juicio, el Departamento de Estado anunció que se había hecho justicia y envió el dinero a la cuenta del ministro de Defensa Vides Casanova, que era el jefe de la Guardia Nacional el día 4 de diciembre de 1980, fecha en que se habían cometido los asesinatos, y cuyo primo carnal, según el coronel Santiváñez, había dado la orden de matar. Vides Casanova fue también el eficiente protector de su primo y el que retrasó el procesamiento de sus subordinados durante tres años y medio.

Ateniéndose a los presupuestos de un modelo de propaganda, los medios de comunicación fracasaron totalmente a la hora de captar las características de la situación, a saber: la omnipresencia

70. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads», *New York Times* (3 de marzo de 1984).

71. Carrigan, *Salvador Witness*, p. 265.

estadounidense, la seguridad del juzgado, el fallo de la defensa al no señalar la responsabilidad de las altas autoridades, el papel de Vides Casanova, la literal transacción de dinero por justicia en *este caso concreto*, que se prolongó durante tres años y medio. Para *Newsweek*, el resultado fue «un éxito notable», según un artículo del 4 de junio de 1984 titulado «A Defeat for a Dead Squad» (Una derrota para un escuadrón de la muerte), aunque en realidad quien asesinó a las mujeres fue la Guardia Nacional. El artículo resaltaba las dificultades de plantear y de ganar el caso, y la posibilidad de un encubrimiento por parte de personal de alto nivel, pero no utilizó esta información para mostrar la naturaleza del sistema apoyado por los Estados Unidos. El artículo cerraba asimismo la discusión referente al informe Tyler dejando a un lado las vinculaciones de las altas esferas, y sin citar las afirmaciones del informe, según las cuales «algunas pruebas dan testimonio de la vinculación de las altas esferas» ni mencionar que dicho informe admitía las limitaciones de su información. No se hizo referencia alguna a Santiváñez o al informe de Dinges: el *Newsweek* recurrió a una fuente oficial, y la leyó mal.

2.5. VEINTITRÉS VÍCTIMAS RELIGIOSAS EN GUATEMALA DE 1980 A 1985

La historia moderna de Guatemala quedó conformada decisivamente por la invasión organizada por los Estados Unidos y por el derrocamiento del régimen democráticamente elegido de Jacobo Arbenz, en junio de 1954. Desde aquel momento, si bien Guatemala ha permanecido segura dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos, las muy necesarias reformas económicas y sociales fueron postergadas de la agenda indefinidamente, se suprimió la democracia política y quedó institucionalizado el Estado del terror, que alcanzó unos niveles catastróficos a finales de la década de los setenta y a principios de la de los ochenta. Dado el status de Estado cliente de Guatemala, y de que la contrarrevolución democrática servía a los importantes intereses de las elites, el modelo de propaganda propone que sus víctimas sean «indignas», lo que queda reflejado tanto en la cantidad como en la calidad de la atención que les dispensan los medios de comunicación. Además, mientras las persecuciones en los estados clientes de la Unión Soviética como Polonia

y Checoslovaquia se remiten sistemáticamente a la ocupación soviética, el modelo de propaganda se ocupará de que los medios de comunicación de los Estados Unidos no expliquen la situación actual de Guatemala, sometida al terror de Estado como el producto natural de la intervención estadounidense de 1954 (y posterior). Por el contrario, lo que cabe esperar es que los Estados Unidos sean descritos como espectadores preocupados y benevolentes, que tratan de hacer todo cuanto está en sus manos para refrenar los abusos de los extremistas de derecha y de izquierda.

Antes de analizar cómo tratan los medios de comunicación la situación guatemalteca, permítasenos volver atrás para efectuar una somera revisión del crucial período del 1945 al 1954 y sus secuelas, para situar la cuestión y proceder al examen del papel de los medios de comunicación en los años ochenta. Arbenz y su predecesor, Juan Arévalo, encabezaron el primer sistema democrático de la historia guatemalteca. Durante la década de su gobierno los periódicos, los grupos sociales, sindicatos, campesinos y partidos políticos pudieron organizarse sin temor a la represión y a los asesinatos.⁷² Pero esta frágil democracia reposaba sobre la base de la concentración de la propiedad de las tierras, el control extranjero sobre éstas y sobre las instalaciones estratégicas, lo cual representaba una constante amenaza a su independencia y a su libertad política, así como un desastre humano. La lucha por la sindicalización y la reforma agraria durante la década democrática estuvo motivada en parte por el deseo de lograr un electorado masivo que proporcionase la base institucional para la democracia.⁷³ Todo cambio progresista efectuado tanto por Arévalo como por Arbenz fue recibido con la feroz hostilidad de la oligarquía local y de la comunidad empresarial multinacional, así como la del gobierno de los Estados Unidos.⁷⁴ A partir de 1947, época en la que se autorizó la organización de los sindicatos, se pensó en la necesidad de tener bajo control el «comunismo» o la amenaza de éste, y la modesta y efectiva refor-

72. Véase Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, *Bitter Fruit*, Doubleday, Nueva York, 1982, pp. 32-47 y 54-63.

73. Prácticamente todos los observadores independientes eran del parecer que la reforma agraria era muy deseable tanto en nombre de la equidad como de la eficacia. Véase, especialmente, José M. Aybar de Soto, *Dependency and Intervention: The Case of Guatemala in 1954*, Westview, Boulder, 1978, capítulo 6.

74. *Op. cit.* Véase también Richard H. Immerman, *The CIA in Guatemala*, University of Texas Press, Austin, 1982.

ma agraria de Arbenz fue la gota que colmó el vaso.⁷⁵ Con la iniciativa, organización, financiación de los Estados Unidos, y mediante una abierta guerra psicológica y acciones terroristas, un minúsculo ejército mercenario expulsó a Arbenz e instauró el régimen «anticomunista».

Desde 1954 hasta nuestros días, ni reformas ni democracia, por no hablar de ningún cambio radical, han sido posibles en Guatemala. La razón principal de ello es que las fuerzas en cuyas manos pusieron el país los Estados Unidos en 1954 «se oponen tajantemente a cualquier cambio que pueda afectar, por poco que sea, su atrincherada posición».⁷⁶ Asimismo éstas han aprendido la lección de los años 1945 al 1954, y saben que la democracia lleva inexorablemente hacia las reformas, y amenaza los privilegios en un sistema de desigualdades extremas. Los realmente escasos intervalos de relativa apertura posteriores a 1954 fueron testigos del rápido surgimiento de organizaciones que protegían a los trabajadores urbanos y a los campesinos, de huelgas y de partidos y organizaciones reformistas y radicales. Según Piero Gleijeses, «en los últimos meses del período Arana (1970-1974), la represión había adquirido un carácter más selectivo y en varias ocasiones Lugerud (sucesor de Arana, 1974-1978) se abstuvo de «liquidar» las huelgas por la fuerza».⁷⁷ Pero la debilidad de las reformas y de las esperanzas que despertaron, unida a las presiones, forzaron una nueva opción, y «dada la naturaleza del régimen» la ola de terror que siguió fue, para la clase dirigente guatemalteca, «la única opción lógica».⁷⁸

Otra de las razones del fracaso de las reformas y de la democracia ha sido la continua influencia de los Estados Unidos. Para su *establishment* el pluralismo y la democracia de los años 1945 al 1954 eran intolerables, y finalmente abortaron el experimento.⁷⁹ En

75. Véase Blanche Wiessen Cook, *The Declassified Eisenhower*, Doubleday, Nueva York, 1981, p. 222.

76. Piero Gleijeses, «Guatemala: Crisis and Response», en Richard B. Fagen y Olga Pellicer, *The Future of Central America: Policy Choices for the U.S. and Mexico*, Stanford University Press, Stanford, California, 1983, p. 188.

77. *Op. cit.*, pp. 191-192.

78. *Ibid.*, p. 192.

79. Los funcionarios estadounidenses a menudo han presionado para conseguir reformas democráticas puramente formales y reducciones de los índices de asesinato, pero han prestado su firme apoyo y ayudado a organizar la *estructura* que ha corroído las reformas democráticas y *aumentado* los índices de asesinatos. En Gua-

los treinta y dos años siguientes bajo el control de los Estados Unidos, Guatemala no sólo se ha convertido en un Estado terrorista raras veces igualado en la escala del asesinato sistemático de civiles, sino que sus inclinaciones terroristas se han incrementado notablemente en los momentos estratégicos de creciente intervención estadounidense. El primero de ellos fue la invasión y la contrarrevolución de 1954, que reimplantó en Guatemala los asesinatos políticos y la represión a gran escala tras la década de democracia. El segundo siguió al surgimiento de un pequeño movimiento de guerrillas a principios de la década de los sesenta, cuando los Estados Unidos iniciaron el adiestramiento formal para cometidos de contrainsurgencia (CI) del ejército guatemalteco. En 1966, un nuevo y reducido movimiento de guerrillas desencadenó una guerra en la que los «boinas verdes» y un contingente de contrainsurgentes ocasionaron la muerte de 10.000 personas como resultado de la persecución de unos trescientos o cuatrocientos guerrilleros. Fue en este momento cuando hicieron su aparición en Guatemala los «escuadrones de la muerte» y las desapariciones. La política de entrenamiento de los Estados Unidos empezó en la década de los setenta, y a ella le siguió una nueva institucionalización de la violencia. La «solución» a los problemas sociales de Guatemala, atribuible específicamente a la intervención de 1954 y al tipo de ayuda proporcionada por los Estados Unidos desde entonces, ha sido la instauración de un terror de Estado permanente. Con Guatemala, los Estados Unidos inventaron el «Estado contrainsurgente».

temala (y en otros lugares), las razones para el apoyo regular a instituciones antidemocráticas han sido el temor a la izquierda y la hostilidad crónica de los funcionarios y hombres de negocios estadounidenses hacia las organizaciones populares (sindicatos, organizaciones de campesinos, partidos políticos de masas), por razones económicas y políticas. De esta manera, el apoyo periódico a formas liberales pasa a ser irrelevante a causa del sistemático refuerzo de instituciones que socavan con regularidad la esencia del liberalismo. Tal como señala Lars Schoultz, la función del «autoritarismo militar», empezando por el golpe brasileño de 1964 respaldado por los Estados Unidos, y que prevalece en América Latina y otros lugares del área de influencia estadounidense, ha sido «destruir las amenazas que se perciben para la estructura existente de privilegio socioeconómico eliminando la participación de la mayoría numérica ...» (*Human Rights and United States Policy toward Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 7). No obstante, tal vez les dejemos «participar» mediante elecciones celebradas tras largos períodos de pacificación militar y el desmantelamiento de las organizaciones populares. Véase capítulo 3.

El papel especial del ejército en este Estado contrainsurgente fue elevando paulatinamente su status y poder, y finalmente le dio la capacidad institucional para gobernar Guatemala. Como sucede en otros estados clientes de los Estados Unidos, los militares utilizan su poder para hacer suyas oportunidades económicas y para robar, directa o indirectamente.⁸⁰ El terrorismo, el latrocinio y la autonomía de los militares guatemaltecos alcanzó un apogeo provisional —superado más tarde por Ríos Montt— durante el período de gobierno de Lucas García (1978-1982). Éste coincidió con el breve intervalo de la política de derechos humanos de Carter, durante el cual se produjeron abiertas críticas al gobierno guatemalteco y una breve y parcial interrupción del suministro de armas de los Estados Unidos, debido a las presiones del Congreso.⁸¹ Sin embargo, ni siquiera durante la época de Carter las relaciones fueron hostiles; se parecían más a lo que sucede cuando un niño de la familia se porta mal y se le castiga un rato de cara a la pared. En parte el deseo de Carter de no proporcionar nuevos suministros de armas se debía a que aquel niño malo no estaba en peligro. Por el contrario, el año 1980 en El Salvador, donde la administración Carter contemplaba la posible victoria de la izquierda, el régimen de terror derechista recibió el rápido apoyo de los Estados Unidos.

Durante la época de Reagan el número de civiles asesinados en Guatemala alcanzó la cifra de varias decenas de miles, y las desapariciones o el hallazgo de cadáveres mutilados se sucedían cotidianamente.⁸² Los estudios realizados por Amnistía Internacional (AI), Americas Watch (AW) y otros grupos en pro de los derechos huma-

80. Véase «Counterrevolution and the "Shakedown States"», en Noam Chomsky y Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism*, South End Press, Boston, 1979, pp. 61-66.

81. Desde 1977, Guatemala recurrió a la ayuda de Israel, Estado que presta estos servicios regularmente al gobierno norteamericano. Para más detalles, véanse Bishara Bahbah, *Israel and Latin America: The Military Connection*, St. Martin's, Nueva York, 1986; Benjamin Beit-Hallami, *The Israeli Connection*, Pantheon, Nueva York, 1987; y Jane Hunter, *Israeli Foreign Policy*, South End Press, Boston, 1987. Sobre el constante flujo de armas de los Estados Unidos a Guatemala durante los años de Carter, véase Lars Schoultz, «Guatemala», en Marin Diskin, ed., *Trouble in our Backyard*, Pantheon, Nueva York, 1983, pp. 187 y ss.

82. Piero Gleijeses estima que «el ejército guatemalteco ha matado a unas 100.000 personas desde 1979» («The Reagan Doctrine and Latin America», *Current History* (diciembre de 1986).

nos certificaron que la máquina militar había enloquecido, con el asesinato indiscriminado de campesinos (entre los que se incluían gran número de mujeres y niños), el traslado forzoso de cientos de miles de campesinos y de aldeanos a virtuales campos de concentración y el alistamiento obligatorio de otros tantos cientos de miles de hombres en patrullas civiles.⁸³ Sin embargo cuando Reagan visitó Guatemala en diciembre de 1982, comentó que el jefe de Estado Ríos Montt estaba «totalmente comprometido con la democracia» y que estaba recibiendo «acusaciones injustas» acerca de los abusos cometidos en materia de derechos humanos. Dos meses antes Amnistía Internacional (AI) había presentado su informe, en el que describía cómo en un período de tres meses se habían efectuado matanzas de civiles en sesenta aldeas indias diferentes y que el número total de muertos superaba los dos mil quinientos.⁸⁴

La política de Reagan con respecto a Guatemala era, como en el caso de Sudáfrica, de «compromiso constructivo».⁸⁵ Desde el principio la administración se apresuró a aceptar y a proporcionar armas a los gobiernos militares. Las ininterrumpidas y masivas matanzas eran tan sólo un estorbo. Uno de los métodos mediante los cuales la administración procuró rehabilitar nuestras relaciones con los regímenes guatemaltecos fue el de mentir continuamente con respecto a su historial en derechos humanos (y el propio Reagan se encargó de marcar las pautas). Stephen Bosworth, del Departamento de Estado, aseguró a un comité del Congreso en julio de 1981 que el gobierno de Lucas García había atacado con éxito a la guerrilla «pero ocupándose de proteger a los espectadores inocen-

83. Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, *Guatemala: A Government Program of Political Murder*, AI, Londres, 1981; Grupo de Derechos Humanos del Parlamento, «Bitter and Cruel...», Informe sobre una misión en Guatemala del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico, octubre de 1984; Americas Watch, *Civil Patrols in Guatemala*, AW, Nueva York, 1986.

84. Amnistía Internacional, *Guatemala: Massive Extrajudicial Executions in Rural Areas under the Government of General Efraín Ríos Montt* (11 de octubre de 1982).

85. Según una declaración del Departamento de Estado del 20 de julio de 1981, «necesitamos intentar una nueva, constructiva política de acercamiento a Guatemala ...» (citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala*, AW, Nueva York, 1985, p. 4).

tes».⁸⁶ Por otra parte el informe sobre la situación de los derechos humanos en dicho país elaborado por el Departamento de Estado en 1981 consideraba que era imposible determinar quién cometía los asesinatos en Guatemala: las desapariciones se atribuían a la «derecha» y a la «izquierda», pero no al gobierno. Por el contrario en febrero de 1981 Amnistía Internacional proporcionó detalladas pruebas de que prácticamente todos los miles de asesinatos tenían su origen en el gobierno, incluyendo entre ellos los efectuados por los escuadrones de la muerte, cuyas víctimas se decidían en un anexo del palacio nacional de Guatemala bajo la supervisión directa del presidente Lucas García.⁸⁷

Con el derrocamiento de Lucas García, repentinamente, como por arte de magia, la línea de la administración Reagan sufrió un cambio y Stephen Bosworth «no encontraba palabras para expresar con justeza el favorable contraste entre la actual situación de los derechos humanos en Guatemala y la situación del pasado mes de diciembre ...». Melvyn Levitsky, subsecretario de Estado para los derechos humanos, declaró ante otro comité del Congreso que «los Estados Unidos no pueden mantener sin dificultades la relación con un gobierno comprometido en el ejercicio de la violencia contra su propio pueblo», como era el caso del régimen de Lucas García.⁸⁸

Cuando éste estaba en el poder, Bosworth sostenía que si bien el de García era un régimen solícito que protegía a los inocentes, y el Departamento de Estado era incapaz de determinar quién realizaba los asesinatos. Cuando Lucas García fue expulsado, el Departamento de Estado descubrió que se trataba de alguien que asesinaba indiscriminadamente, y usó un elevado tono moral al aludir a su conducta. Esto significa que el Departamento de Estado admitía implícitamente sus mentiras anteriores, y contaba con la prensa para que no se hablase de ello. Evidentemente, la razón del cambio no era otra que ayudar a crear un ambiente favorable para el sucesor de Lucas García, Ríos Montt. Según declaraciones efectuadas por John Hughes, portavoz del Departamento de Estado en

86. Citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 6.

87. Véase Amnistía Internacional, *Guatemala: A Government Program of Political Murder*, p. 8.

88. Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 6.

enero de 1983, bajo el gobierno de Ríos Montt se estaba produciendo un «declive espectacular» de los abusos en materia de derechos humanos. Ríos Montt era el hombre a quien Reagan consideró que se acusaba injustamente. Pero como ya hemos visto, Amnistía Internacional consideraba que Ríos Montt era otro de los asesinos de alto nivel, que al parecer había superado a su predecesor por lo que se refería a las matanzas de civiles.

Cuando Ríos Montt fue derrocado a su vez, cambió de nuevo la argumentación del Departamento de Estado. Éste reconoció que en 1982, bajo el gobierno de Ríos Montt las cosas habían sido terribles, pero que *ahora* se estaba produciendo una mejora espectacular y el gobierno manifestaba «una creciente sensibilidad para las cuestiones relacionadas con los derechos humanos».⁸⁹ Está claro que tenemos aquí un modelo que se repite y que casi puede ser formulado en términos de ley: en el caso de un Estado terrorista con el que la administración desea mantener una «vinculación constructiva», las cosas están en orden y mejoran; pero cuando este régimen es derrocado, su historial se deteriora *ex post facto* y su imagen es muy desfavorable con el régimen humanitario y sensible instaurado en el poder. Se trata de un curioso modelo de idénticas disculpas para cada sucesor de un terrorista, y de denigración *ex post* del derrocado. O sea, de un procedimiento, orwelliano que la prensa occidental asocia con los estados totalitarios, pero que sucede aquí, en nuestra casa, y que sólo puede triunfar con la colaboración de los medios de comunicación. Éstos deben estar dispuestos a minimizar o a ignorar los asesinatos a gran escala que suceden en Guatemala. En este contexto las disculpas consecutivas, las mentiras en defensa de cada asesino y la inconcebible hipocresía apenas resultan dignas de mención.

Dado el papel de los Estados Unidos en los orígenes y en el mantenimiento del Estado contrainsurgente guatemalteco, y el hecho de que dicho Estado se dedica a obstaculizar el crecimiento de las organizaciones populares (a saber, «anticomunista» en la retórica orwelliana), y dada la poderosa presencia comercial estadounidense, un modelo de propaganda preveerá la falta de interés de los medios de comunicación por las víctimas «indignas» de tal gobier-

89. 1984 Human Rights Country Report del Departamento de Estado, citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 15.

no, y eludió ocuparse del papel de los Estados Unidos en su evolución y sus prácticas. Podemos anticipar que los informes sobre Guatemala realizados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos serán minimizados o ignorados, pese a los espectaculares datos y horripilantes historias que reúnen. Esta es una fuerte prueba para el modelo, dado que la cifra de civiles asesinados entre 1978 y 1985 pudo haber alcanzado las 100.000 personas, con un estilo cruel y macabro que recuerda al de Pol Pot. Amnistía Internacional señalaba en 1981 que:

los cuerpos de las víctimas habían sido encontrados apilados en barrancos, amontonados en las cunetas o enterrados en fosas comunes. Cientos de ellos mostraban las huellas de la tortura y a la mayoría la muerte les había sobrevenido por estrangulamiento por el procedimiento del garrote, por asfixia con capirotos de plástico o por un tiro en la cabeza.⁹⁰

En este caso se cumplen totalmente las expectativas del modelo de propaganda. Si observamos el cuadro 2.1, en el que se compara el tratamiento informativo que los medios de comunicación dispensaron a veintitrés víctimas religiosas en Guatemala con el que dedicaron al caso Popieluszko, veremos que sólo una de estas veintitrés víctimas aparece mencionada por su nombre en las publicaciones objeto de nuestro estudio, y que veintitrés personas juntas ocupan en el *New York Times* una veinteava parte del espacio que este periódico dedicó a Popieluszko. Por lo que se refiere al asesinato en Guatemala de un sacerdote estadounidense, el reverendo Stanley Rother, el *New York Times* publicó el 5 de agosto de 1981 una escueta referencia en la última página en el que informaba que tres hombres habían sido detenidos para interrogarles por el tiroteo. ¿Cuál fue el resultado de las detenciones? ¿Fueron juzgados esos hombres? Los lectores del *New York Times* nunca lo sabrán, y el gobierno guatemalteco no tendrá que pasar apuros ni sufrir las presiones de las preguntas de la prensa acerca de este caso o de los veintidós restantes.

Además de la escasa atención por el asesinato de los sacerdotes salvadoreños, los detalles que se dieron del caso fueron muy escue-

90. *Guatemala: A Government Program for Political Murder*, p. 5.

tos y no generaron ningún tipo de condena.⁹¹ Los pocos artículos algo más extensos sobre el tema nunca trataron el papel del golpe de 1954 y la prolongada relación en materia de entrenamiento y de suministros de los Estados Unidos con la policía y el ejército guatemaltecos,⁹² sino que invariablemente situaban los asesinatos en el marco de una guerra civil con inexplicadas atrocidades por cuenta de los extremistas de derecha y de izquierda (véase «El arzobispo Óscar Arnulfo Romero», p. 95). Un despacho de la AP publicado el 16 de mayo de 1981 en el *New York Times* recibió el título de «Four Guatemalans Slain in Leftist-Rightist Rivalry» (Cuatro guatemaltecos asesinados a consecuencia de la rivalidad entre derechistas e izquierdistas). El artículo, que informa del asesinato de uno de los veintitrés sacerdotes, el reverendo Carlos Gálvez Galindo, dice que: «Al parecer los ataques están relacionados con la larga lucha por el poder que mantienen izquierdistas y derechistas». Un despacho de la UPI publicado en el *New York Times* del 29 de julio de 1981 en el que se da cuenta del asesinato del reverendo Stanley Rother, relaciona también al ataque con los «extremistas de derechas», no con el gobierno guatemalteco.

Para el *Time*, Rother y sus aldeanos guatemaltecos «se habían visto apresados en medio de una guerra civil no declarada ...».⁹³ El *Time* no explicó jamás las raíces de esa guerra civil, ni el papel crucial de los Estados Unidos al negarse a permitir cualquier cambio social pacífico e instaurar las instituciones de contrarrevolución permanente. Sin embargo el *Time* señalaba, de manera hartó inusual, que el gobierno era el responsable de la «abrumadora mayoría» de asesinatos y, aun más excepcionalmente, citaba las pruebas de Amnistía Internacional de que los escuadrones de la muerte paramilitares eran un brazo armado del gobierno. Pero el artículo no llegaba a explicar el alcance y la naturaleza de los asesinatos, remitiéndose al argumento de la guerra civil. Más comprometido

91. Mientras esto es cierto casi sin excepción para los artículos periodísticos, hubo tal vez una docena de columnas de opinión en el *New York Times* y el *Washington Post*, y algunas cartas, en el período 1980-1986, que criticaron el terrorismo de Estado guatemalteco; algunas de ellas criticaban duramente la política estadounidense.

92. Algunas de las columnas de opinión citadas en la nota anterior discutían el papel de los Estados Unidos.

93. «Requiem for a Missionary», 10 de agosto de 1981.

resultaba su análisis del debate político en los Estados Unidos. Para el *Time*, «Guatemala enfrenta a la administración Reagan con uno de sus retos más difíciles en política exterior: por una parte, el gobierno es contemplado como una víctima de la insurgencia patrocinada por Cuba y por ello necesitado de la ayuda estadounidense; por otra, dicho gobierno viola claramente los derechos humanos». La dicotomía que el *Time* efectúa es un tanto desigual: la ayuda cubana es una estratagema de la guerra fría de la que jamás se han encontrado pruebas, aunque proporciona un marco de propaganda adecuado al que el Departamento de Estado suele recurrir para distraer la atención de su propio apoyo a los asesinos de masas. El *Time* equipara en tratamiento una realidad y una acusación extremadamente grave, sin citar siquiera a un solo comentarista político. El «por otra parte» es, a pesar del «claramente», una descripción bastante insuficiente. La administración Reagan optó por apoyar y disculpar regularmente a un gobierno genocida que empleaba una política de masacre para destruir una revuelta exclusivamente autóctona. El «reto» para la administración Reagan —bastante diferente al descrito por el *Time*— estaba en saber cómo *vender* su apoyo a los asesinos de masas. El *Time* puso su granito de arena con la incondicional transmisión de la afirmación de una insurgencia sustentada por Cuba que representaba un grave dilema para los políticos.

Los años de holocausto entre 1978 y 1985 dejaron tras sí una ininterrumpida afluencia de documentos elaborados por los grupos de derechos humanos que proporcionaban espectaculares pruebas de que el terrorismo de Estado en Guatemala estaba a punto de alcanzar niveles de genocidio. Muchos de esos documentos tenían un enorme potencial para educar y despertar a la opinión pública, pero, como preveía el modelo de propaganda, los medios de comunicación de los que nos ocupamos en nuestro estudio los trataron de manera que su valor informativo quedaba minimizado, al igual que su capacidad para crear y movilizar la indignación pública. De una selección de diez importantes informes sobre Guatemala procedentes de Amnistía Internacional y de Americas Watch, sólo cuatro fueron mencionados en los medios de comunicación que estudiamos.⁹⁴ Ninguno de ellos mereció ser destacado en primera página,

94. Entre estos documentos se cuentan los cuatro siguientes informes publicados por Amnesty International: *Guatemala: A Government Program of Political*

ni tampoco sirvieron como base para un editorial o para montar una campaña de prensa prolongada e indignada. El dramático informe publicado en marzo de 1985 por Amnistía Internacional, titulado *Disappearances: A Workbook* (Desapariciones: un libro de trabajo) describía el estremecedor avance del terrorismo de Estado a la manera nazi, y pasó totalmente desapercibido para nuestros medios de comunicación, al igual que el informe, también de Amnistía Internacional, de marzo de 1985 cuyo título era «*Disappearances*»... *under the Government of General Oscar Humberto Mejía Víctores* (Desaparecidos... bajo el gobierno del general Óscar Humberto Mejías Víctores), cuya divulgación hubiese interferido la descripción que estos medios de comunicación hacían de las elecciones guatemaltecas de 1984 y 1985, a las que calificaban de ejercicios de legitimación (como veremos en el siguiente capítulo). También fue ignorado el informe de 1985 de Americas Watch sobre los Grupos de Apoyo Mutuo, así como el estudio fechado en 1987 sobre los derechos humanos en Guatemala durante el primer año de Cerezo, y en la próxima sección volveremos a tratar de los Grupos de Apoyo Mutuo. En el próximo capítulo veremos también cómo los medios de comunicación informaron de la elección de Cerezo en un marco de esperanza y de optimismo, pese a la anterior experiencia electoral guatemalteca y a que el propio Cerezo había expresado sus dudas acerca de su propia capacidad para gobernar. El que los medios de comunicación hayan pasado por alto el informe de Americas Watch donde se describen los verdaderos resultados de la presidencia de Cerezo refleja su incapacidad general para hacer un seguimiento de los efectos de las elecciones en los estados clientes (como veremos en el capítulo 3 con relación a El Salvador).

Murder (febrero de 1981); «*Disappearances*»: *A Workbook* (1981); *Guatemala: Massive Extrajudicial Executions in Rural Areas under the Government of General Efraín Ríos Montt* (octubre de 1982); «*Disappearances*» *in Guatemala under the Government of General Óscar Humberto Mejía Víctores* (marzo de 1985). También incluimos seis estudios de Americas Watch: *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (noviembre de 1982); *Guatemala Revisited: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala* (septiembre de 1985); *Little Hope: Human Rights in Guatemala, January 1984-January 1985* (febrero de 1985); *Guatemala: The Group for Mutual Support* (1985); *Civil Patrols in Guatemala* (agosto de 1986); *Human Rights in Guatemala during President Cerezo's First Year* (1987).

Hemos mencionado ya el importante estudio de Americas Watch *Guatemala Revised: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala* (Nuevo informe sobre Guatemala: De como la administración Reagan encuentra «mejoras» en derechos humanos en Guatemala) cuyo tema más chocante e impresionante es la admisión *ex post facto* por parte del Departamento de Estado de que su apología del anterior general no respondía a la realidad. Este esclarecedor documento no fue tenido en cuenta por los medios de comunicación que estudiamos aquí a excepción del *New York Times*, que le dedicó un espacio de siete centímetros y medio en la página 7, con el benévolo título «Rights Group Faults U.S. on Guatemala Situation» (Grupo de derechos humanos culpa a los Estados Unidos de la situación en Guatemala) (24 de septiembre de 1985). El artículo mencionaba que según dicho informe la administración se había negado a admitir los principales abusos contra los derechos humanos en Guatemala, pero se cuidó muy bien de mencionar la confesión *ex post facto* de que había mentido. Evidentemente tal cosa equivaldría a reconocer que la principal fuente de «noticias» del *New York Times* no es fidedigna en absoluto. El último párrafo del artículo, que ocupa una cuarta parte de los siete centímetros y medio dedicados al documento en cuestión, da la respuesta del Departamento de Estado al informe de Americas Watch. Para dicho departamento, Americas Watch «no es tanto una organización de derechos humanos como una organización política». La cínica hipocresía contenida en esta réplica hubiese quedado nítidamente clara si el artículo hubiese mencionado lo esencial de las pruebas de Americas Watch: que la administración no se limitaba a disculpar el terrorismo de Estado en Guatemala, sino que además demostraban que actuaba de manera deshonesto.

En su compromiso de proteger a los generales guatemaltecos en su ataque terrorista contra la población, la administración Reagan empezó a mostrar su resentimiento por las organizaciones como Amnistía Internacional y Americas Watch y en 1981 y 1982 emprendió una campaña sistemática para desacreditarlas, acusándolas de izquierdistas y de ser políticamente tendenciosas. En una carta fechada el 15 de septiembre de 1982 y dirigida a la oficina en Washington de Amnistía Internacional sobre América Latina, el subsecretario de Estado Thomas Enders atacó los informes de dichas orga-

nizaciones por su unilateralidad y defensa de la «ferocidad» y de los «ataques terroristas» de la guerrilla. Enders escribió que:

nadie negaría la posibilidad [*sic*] de que unidades militares, contraviniendo la política marcada, se hayan visto envueltas en violaciones de los derechos humanos. Pero lo importante es que desde el 23 de marzo el gobierno de Guatemala se ha comprometido a tomar un nuevo rumbo y ha realizado progresos significativos.⁹⁵

Esta asombrosa muestra de justificación de un ejército que estaba en el centro de los asesinatos de miles de civiles fue distribuida por toda Guatemala como un documento oficial de los Estados Unidos, y el texto en su totalidad fue publicado por la prensa guatemalteca. Americas Watch declaró:

Consideramos que esta utilización de la carta es poco razonable en vista de los riesgos que corren los investigadores de los derechos humanos en un clima político como el de Guatemala. Para nosotros esto significa una prueba más de que el Departamento de Estado, así como el gobierno guatemalteco, admiten que no son neutrales en el conflicto que sufre ese país; el portador de malas noticias se convierte, en virtud de este razonamiento, en una parte del enemigo a la que hay que desacreditar públicamente si es posible.

Dicha organización declaró también que las principales críticas del Departamento de Estado a Americas Watch y a Amnistía Internacional no sólo no eran de recibo, sino que —y esto era lo más importante— se basaban casi totalmente en la presunta veracidad de las declaraciones del ejército guatemalteco (un tipo de credulidad que había quedado claramente de manifiesto en las declaraciones de Enders que hemos mencionado antes).

Como ya hemos visto en el capítulo primero, el gobierno es el principal productor de respuestas a las críticas, a la vez que la principal fuente de información. Este episodio de Guatemala es una importante muestra de los esfuerzos del gobierno para silenciar otras fuentes de información. Es interesante ver como el *New York Times* nunca mencionó ni criticó esta siniestra campaña, pese a que

95. Esta carta está reproducida en Americas Watch, *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (noviembre de 1982).

ésta se llevaba a cabo en el contexto de una política de protección a los asesinos de masas. En el siguiente capítulo mostraremos cómo la revista *Time* colaboró en la campaña, citando sólo una vez a Americas Watch en relación a Guatemala, pero con la descalificadora explicación de que se trata de «un grupo controvertido al que con frecuencia se ha acusado de simpatizar demasiado con la izquierda» (el Departamento de Estado, en el que *Time* deposita toda su confianza, nunca se ve sometido a un adjetivo que sugiera su tendenciosidad). El 4 de diciembre de 1982 el *Washington Post* publicó en la última página un artículo de Terri Shaw sobre la carta de Enders, cuyo título especificaba las acusaciones del Departamento de Defensa: «Embassy Sees “Disinformation” on Guatemala: U.S. Report Says Rights Groups are Used» (La embajada ha observado «desinformación» sobre Guatemala: un informe estadounidense afirma que los grupos de derechos humanos están siendo utilizados). El texto del artículo corroboraba tales acusaciones, pues el autor se limitaba a repetir, sin cuestionarlas en absoluto, las declaraciones de la embajada según las cuales «nunca se pensó que el informe sería hecho público», y tampoco mencionó la amenaza que la divulgación de las acusaciones del Departamento de Estado significaba para los vigilantes de los derechos humanos. A esos grupos se les ha permitido insinuar que el Departamento de Estado trataba de desacreditarles, pero la palabra «desinformación» no se aplica jamás a las declaraciones del Departamento de Estado, y tampoco se realizó un examen serio del contenido de dichas acusaciones. Este superficial artículo puso fin a la información que los medios de comunicación que estudiamos proporcionaron acerca de la campaña del Departamento de Estado. Y el informe de Americas Watch *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (Los derechos humanos en Guatemala: no se permite la neutralidad), que trataba de la campaña y de la carta de Enders, jamás fue mencionado.

2.6. LOS ASESINATOS DE MIEMBROS DEL GRUPO DE APOYO MUTUO EN GUATEMALA

Los organismos de vigilancia y protección de los derechos humanos tuvieron muchas dificultades para organizarse y sobrevivir en la «democracia de los escuadrones de la muerte» de El Salvador

o Guatemala. Entre octubre de 1980 y marzo de 1983, cinco funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador fueron raptados y asesinados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el modelo de propaganda, tales asesinatos no debían despertar mucho interés en los medios de comunicación estadounidenses, presunción que quedó confirmada por la evidencia. A modo de ejemplo, podemos comparar la gran cifra de cuatro artículos en la última página que el *New York Times* publicó sobre estos cinco asesinatos,⁹⁶ con los treinta y cinco artículos que este periódico dedicó a Natan Sharansky, activista soviético en favor de los derechos humanos. Por supuesto, ninguno de estos artículos estaba en la última página. La proporcionalidad de atención se ajusta perfectamente al análisis general que el modelo de propaganda hace acerca del tratamiento en los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas.

Guatemala ha resultado aún menos hospitalaria que El Salvador para las organizaciones de derechos humanos. El arzobispo guatemalteco, monseñor Próspero Penados del Barrio, declaró en 1984 que «actualmente resulta imposible la existencia de una oficina de derechos humanos en Guatemala».⁹⁷ La institucionalización de las «desapariciones» en Guatemala dio comienzo a mediados de la década de los sesenta, y alcanzó finalmente unos niveles inigualados en el hemisferio occidental, con una cifra que rondaba las 40.000 personas.⁹⁸ Los grupos de protesta que se constituyeron para buscar información y una solución legal fueron repetidamente puestos fuera de circulación mediante los crímenes organizados por el Estado. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) buscó información de los desaparecidos en los juzgados, durante un breve período de apertura en 1966, pero después del sensacional descubrimiento de que la policía había asesinado a veintiocho izquierdistas, el sistema se volvió a cerrar. Como señala McClintock, «durante los años

96. Para una discusión completa sobre el último de estos asesinatos, el de Marianela García Villas, el 15 de marzo de 1983, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S.-Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam, and El Salvador*, South End Press, Boston, 1984, pp. 10-11.

97. Citado en Americas Watch, *Guatemala: The Group for Mutual Support, 1984-1985*, p. 2 (a partir de ahora, AW, *Mutual Support*).

98. Council of Hemispheric Affairs, *News and Analysis* (26 de abril de 1986), p. 222.

siguientes muchos líderes y estudiantes de derecho de la AEU fueron perseguidos y asesinados».⁹⁹ En los años setenta, la AEU organizó un Comité de Familiares de los Desaparecidos, cuya oficina principal se encontraba en la Universidad Nacional de San Carlos. Americas Watch informó que «dicho Comité se disolvió después de que el 10 de marzo de 1974 un policía vestido de paisano entrase en el centro de ayuda legal de la Universidad y matase de un disparo a su principal organizador y director del centro, el abogado Edmundo Guerra Theilheimer».¹⁰⁰ Otro de estos grupos, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, fue creado a finales de los setenta por Irma Flaquer, psicóloga y periodista. Su hijo fue asesinado y ella misma «desapareció» el 16 de octubre de 1980.

Según el Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico, sólo en el año 1984 en Guatemala se alcanzó un promedio de cien asesinatos políticos y más de cuarenta desapariciones al mes.¹⁰¹ Seguramente estas cifras están por debajo de la realidad, ya que sólo se contabilizan y se da publicidad a las desapariciones que tienen lugar en Guatemala capital y sus alrededores. El mayor número de asesinatos y desapariciones se produce entre las familias rurales e indias que no disponen de recursos para quejarse y están más expuestas a las represalias.

En este contexto de asesinatos, temores y con el anterior fracaso de todas las organizaciones de derechos humanos se formó en junio de 1984 el Grupo de Apoyo Mutuo o GAM. Éste era un producto de la desesperación de la gente que buscaba información del paradero de sus parientes desaparecidos y estaba dispuesta a correr graves riesgos para conseguirla. Muchos de ellos habían padecido un inmenso dolor en frustrantes búsquedas y pesquisas que en ningún caso habían dado fruto. En Guatemala no existe ningún tipo de satisfacción legal y no se puede obtener nada de provecho con interpelaciones o demandas a la policía o a los juzgados. El señor Hicho, que buscaba a su hija desaparecida, vio unos cien cadáveres durante los meses que acudió al depósito de cadáveres, de los cuales «de un 70 a un 75 por 100 de ellos habían sido

99. McClintock, *American Connection*, vol. 2, p. 83.

100. AW, *Mutual Support*, p. 3.

101. «Bitter and Cruel», Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico (octubre de 1984).

torturados». ¹⁰² Otros emprendieron en su búsqueda diferentes y angustiosos caminos. A principios de 1985 un oficial del ejército dijo a una mujer que su marido aún vivía y que podía ocuparse de que regresara si ella se acostaba con él. Ella accedió y su marido apareció muerto poco tiempo después. ¹⁰³

La intención de los organizadores del GAM era la de lograr más fuerza mediante las acciones colectivas, utilizarla para recoger información y lograr una respuesta legal a base de suplicatorios y de publicidad. En parte su esperanza de supervivencia y de éxito residía en el hecho de que el jefe del Estado, Mejía Vítores, había sido calificado por la administración Reagan como otro «reformista», así como en que el equipo Reagan-Mejía Vítores trataba de establecer una «imagen» apropiada para inducir al Congreso a «aflojar el cierre del monedero». El GAM también contaba con el apoyo en Guatemala del arzobispo Penados del Barrio y de otros grupos eclesiásticos y seculares, si bien muy pocos se sentían capaces de levantar la voz en un sistema de libre terror de Estado. A nivel internacional el GAM recibió significativos apoyos políticos de partidos políticos humanitarios y progresistas y de los grupos de derechos humanos.

En junio de 1984 treinta miembros del recién organizado GAM celebraron una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, en la que denunciaron las desapariciones e hicieron un llamamiento al gobierno para que «interviniese inmediatamente para encontrar a nuestros seres queridos». A finales de junio y de nuevo a principios de agosto se celebraron misas en la catedral metropolitana para expresar la preocupación por el destino de los desaparecidos. Las primeras misas fueron oficiadas por el rector de la universidad, Meyer Maldonado, y por el arzobispo Penados. Mil personas asistieron a la misa de agosto. El día 1 de ese mismo mes el grupo se entrevistó por primera vez con el general Mejía Vítores, quien en aquella ocasión les prometió investigar las desapariciones. Los días 8 y 9 de agosto el GAM publicó anuncios en los principales periódicos haciendo públicas tales promesas. Posteriormente el grupo empezó a llamar la atención acerca del incumplimiento gubernamental de las promesas efectuadas el primero de agosto, y poco a poco empen-

102. AW, *Mutual Support*, p. 8.

103. *Op. cit.*, p. 7.

dió otras acciones. En octubre de 1984 promovió una marcha y una misa en la catedral por los desaparecidos, que fue la primera manifestación masiva en Guatemala desde el 1 de mayo de 1980 (los participantes fueron secuestrados por las calles y se estima que cien de ellos fueron asesinados o desaparecieron).

La organización continuó creciendo: las pocas familias iniciales se habían convertido en 225 en noviembre de 1984; en 1.300 en la primavera de 1986. La mayoría de sus miembros eran mujeres, entre las que se encontraban muchas campesinas de las zonas rurales. Eran persistentes. Tras las peticiones, interpelaciones, mítines y marchas iniciales empezaron a efectuar acusaciones explícitas y a «acusar públicamente a elementos de las fuerzas de seguridad nacional como directamente responsables de la captura y posterior desaparición de nuestros familiares». ¹⁰⁴ Pidieron una investigación, una relación y, sobre todo, justicia. Apelaron a la asamblea constituyente e iniciaron protestas regulares en el centro de Ciudad de Guatemala, golpeando ollas y sartenes y, algunas veces, ocuparon edificios pacíficamente.

Como era de esperar no se hizo nada en respuesta a las peticiones del GAM. La asamblea no tenía poderes, pero por otra parte estaba demasiado asustada como para emitir una declaración de apoyo. Los militares en el gobierno jugaron con el GAM. En público y ante la prensa, Mejía Vítores decía «no quiero eludir responsabilidades y hay que hacer algo al respecto». Pero cuando la prensa no estaba presente sus palabras eran otras: «parece como si me estuviesen acusando a mí, y nosotros no los tenemos [los desaparecidos]». «Sí los tienen», replicó el GAM. «No los tenemos», repitió él. ¹⁰⁵ Los militares gobernantes empezaron a sentirse molestos; se intensificaron las amenazas telefónicas, las cartas de advertencia y la vigilancia explícita. Dos días después de la entrevista entre Mejía Vítores y el GAM, aparecieron los cuerpos torturados de dos desaparecidos relacionados con miembros del grupo. Uno de ellos enfrente de su casa, con los ojos arrancados de las órbitas y con la cara apenas reconocible.

En una entrevista de televisión emitida el 14 de marzo de 1985,

104. Carta abierta del 15 de noviembre de 1984, citada en AW, *Mutual Support*, p. 24.

105. AW, *Mutual Support*, pp. 24-25.

Mejía Vítores afirmó que el GAM «estaba siendo utilizado por la subversión, porque si tienen problemas estamos buscando soluciones y les hemos dado todos los medios [para resolver esos problemas]». ¹⁰⁶ A esta entrevista siguieron un torrente de titulares en los periódicos, haciendo hincapié en las advertencias y afirmaciones del gobierno de que el GAM estaba manipulado por fuerzas subversivas. A mediados de marzo el general Mejía Vítores compareció de nuevo ante las cámaras de televisión: a la pregunta ¿qué acción piensa emprender el gobierno contra el GAM?, respondió «ya lo sabrán cuando lo vean». ¹⁰⁷

El 30 de marzo de 1985 el dirigente del GAM Héctor Gómez Calito fue secuestrado, torturado y asesinado. (Los seis policías que lo habían ido a buscar fueron asesinados a su vez pocos días después de la muerte de Gómez.) ¹⁰⁸ Su vientre y otras partes de su cuerpo habían sido quemadas con un soplete, le habían pegado con tanta fuerza en la cara que sus labios estaban reventados, y su lengua estaba cortada. Después, el 4 de abril, otra dirigente del GAM, María Rosario Godoy de Cuevas, su hermano de veintidós años de edad y su hijo de dos años fueron detenidos, torturados y asesinados. Los pechos de María Rosario Godoy mostraban las huellas de los golpes y su ropa interior estaba ensangrentada. A su hijo de dos años le habían arrancado las uñas de los dedos.

Si nos atenemos a lo periodístico de la noticia, los asesinatos de dos dirigentes del GAM, junto al del hermano y al hijo de uno de ellos, hubiera debido merecer una atención de primer orden. Su valentía era excepcional, la maldad a la que hacían frente era extraordinaria, la justicia de su empeño era incuestionable, y las muertes que sufrieron eran más salvajes aún que la que sufrió Popieluszko. Pero lo más importante de todo es que se trataba de crímenes cuya responsabilidad recaía bastante sobre nosotros, puesto que habían sido perpetrados por clientes que dependían de nuestro apoyo, de manera que su desenmascaramiento y nuestras presiones hubiesen tenido un efecto significativo en la salvaguarda de los

106. *Op. cit.*, p. 36. Por supuesto, esto era mentira. Mejía Vítores se refiere a un cuerpo de investigación establecido por él mismo, enteramente regido por personal del gobierno, incluido el ministro de Defensa, y eso, predeciblemente, dio al gobierno una patente de sanidad sin tacha.

107. *Op. cit.*, p. 38.

108. *Op. cit.*, p. 41.

derechos humanos. Por otra parte, la administración Reagan trataba afanosamente de establecer unas relaciones más cordiales y de mayor apoyo al régimen militar guatemalteco y, como hemos descrito antes, tuvo que batallar mucho para poder dar una imagen favorable del mismo. Pero un modelo de propaganda prevé que incluso esos dramáticos y horripilantes crímenes sean tratados por los medios de comunicación en un tono menor, y que pronto quedarán en el olvido. Al contrario de lo que sucedió con Popieluszko, no suscitarán interés ni indignación capaz de soliviantar a la opinión pública (y de entorpecer los planes de la administración). La historia ha demostrado cuán acertadas son esas previsiones.

El cuadro 2.3 compara la información que los medios dedicaron al caso Popieluszko con la de los asesinatos de los dirigentes del GAM, y en él queda palpablemente claro que el tratamiento es radicalmente diferente en los dos casos. Los asesinatos de los dirigentes del GAM nunca fueron «noticia» para el *Time*, *Newsweek* o el *CBS News*. El *New York Times* nunca consideró que esos asesinatos fuesen merecedores de la portada o de un comentario editorial, y podemos ver que la información que dio fue muy escueta. El primer informe del cuádruple asesinato apareció el 7 de abril de 1985, en un pequeño suelto en la página cinco del periódico en la que se mencionaba que el cadáver de María Rosario Godoy de Cuevas había sido hallado en su coche, en un barranco, junto a los cadáveres de su hermano y de su hijo pequeño. Ni en esa noticia ni en los artículos que siguieron el *New York Times* mencionó detalle alguno acerca del estado en que se encontraron los cadáveres, ni que el niño de dos años tuviese las uñas arrancadas. ¹⁰⁹

Por lo demás, los artículos del *New York Times*, escritos todos ellos por Stephen Kinzer, utilizaron generalmente un esquema plagado de disculpas. Es decir, no hicieron hincapié en los asesinatos —quiénes eran las víctimas, detalles de la violencia cometida contra ellas, quién los cometió, por qué— y en las estructuras institucionales y las raíces de los asesinatos organizados de los que obviamente éstos formaban parte. En el caso Popieluszko, estos *eran* los temas.

109. Deben tenerse en cuenta dos excepciones muy concisas: el 13 de abril, un artículo sobre el caso menciona que Gómez fue torturado; y uno del 19 de abril señala que le cortaron la lengua. No se proporcionó absolutamente ningún detalle acerca de los asesinatos de Godoy de Cuevas, su hermano y su hijo.

CUADRO 2.3

*Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 2:
El asesinato de un sacerdote polaco frente al asesinato de dos funcionarios del Grupo de Apoyo Mutuo guatemalteco*

	NEW YORK TIMES				TIME y NEWSWEEK				CBS NEWS							
	Artículos ¹		Medición en pulgadas		Artículos en portada		Editoriales		Artículos ¹		Medición en pulgadas		N.º de programas informativos		N.º de programas mas informativos	
	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1	N.º	% de la línea 1
1. Jerzy Popiełuszko, asesinado el 19 de octubre de 1984	78	(100)	1.183,0	(100)	10	(100)	3	(100)	16	(100)	313,0	(100)	46	(100)	23	(100)
2. Héctor Orlando Gómez y María del Rosario Godoy de Cuevas, asesinados entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 1985 (junto a su hijo, que fue torturado).	5	(6,4)	80,0	(6,8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Víctimas

1. La cobertura informativa se refiere a un período de 18 meses a partir del primer informe sobre la desaparición o asesinato de la víctima.

Kinzer dijo poco o nada de los asesinatos de los miembros del GAM, y muy poco acerca de las víctimas y de las experiencias que les habían hecho acercarse a ese grupo, así como de la cuestión de quién lo hizo y qué se estaba haciendo (o no) para llevar a los asesinos ante la justicia. Kinzer daba por hecho que los asesinos habían sido detenidos por agentes del Estado, aunque no lo afirmó explícitamente, ni comentó los antecedentes de la cuestión ni dio ningún argumento que permitiese valorar el caso. Kinzer contemplaba el asunto de manera «objetiva», e hizo algunas breves y retóricas referencias a los supervivientes del GAM, que quedaron contrarrestadas por las referencias a los generales: éstos habían aprobado la formación del GAM (una ambigua verdad a medias), habían nombrado un comité investigador que «no había encontrado ninguna prueba de la existencia en Guatemala de centros de detención secretos» (sin mencionar para nada la composición del comité, ninguna prueba en contra, ni tampoco los temas que éste había podido pasar por alto, como los desaparecidos que habían sido asesinados). Los generales rechazaban también cualquier responsabilidad en el asesinato de Godoy, su hermano y su hijo, que según afirmaron habían sido víctimas de un accidente de coche. Si Kinzer hubiera dado algún detalle de las heridas que presentaban las víctimas, esta mentira hubiese quedado al descubierto y las demás preguntas se hubiesen planteado por añadidura.

Artículo tras artículo Kinzer repetía que el gobierno de Mejía Víctores había prometido que en breve se volvería a instaurar un gobierno de civiles, lo cual ayudaba a distraer la atención de los asesinatos que se sucedían y de las causas de éstos, así como de los comentarios sobre los asesinatos de los miembros del GAM. Tampoco nos decía nada de lo que significaba un «gobierno civil» en un Estado terrorista en el que, como sabía muy bien, los auténticos gobernantes serían las mismas fuerzas militares.¹¹⁰ En el caso Popiełuszko, una vez establecido que la policía había cometido el asesinato, los medios de comunicación dedicaron abundante espacio acerca del aparato policial y sus métodos, así como a prestar aten-

110. Tal y como veremos en el próximo capítulo, el nuevo gobierno civil no hizo nada para terminar con los ataques del ejército contra la población civil; pero tal como cabía esperar, el optimismo de la prensa ante la promesa de una nueva administración civil no profundizó en la cuestión con informes sobre lo que ocurría en realidad.

ción a la responsabilidad de las personalidades de alto nivel en el asesinato. Kinzer no se ocupó en absoluto de estas cuestiones. La estructura de la máquina asesina guatemalteca y su forma de actuar hubiera sido una buena historia, y se podían conseguir muchos detalles acerca de sus operaciones, pero tal cosa no se ajustaba a la agenda del gobierno ni al formato del *New York Times*. De igual manera se ignoró el papel jugado por Mejía Víctores en el asesinato de los líderes del GAM —recordemos sus advertencias inmediatamente antes de que se cometieran los asesinatos y consideremos su prácticamente ilimitado y discrecional poder para asesinar o proteger a los ciudadanos—. Pero una vez más las vinculaciones de las altas esferas cuando se trata de víctimas indignas no son algo que al modelo de propaganda le interese comentar. Kinzer realizó un buen trabajo al hacer que los asesinatos de los miembros del GAM parecieran algo natural dada la situación, lamentable pero inevitable, parte de la compleja herencia de un país agitado; algo que presumiblemente quedaría resuelto cuando el nuevo gobierno de civiles asumiese el poder.

En un intento de conseguir apoyo exterior, dos de los dirigentes del GAM que quedaban, Nineth de García y Herlindo Hideo de Aquino, viajaron a Europa en marzo y abril de 1986, tras la toma de posesión del presidente civil electo, el demócratacristiano Vinicio Cerezo. Uno de sus mensajes más importantes era que los asesinatos y las desapariciones no habían quedado abolidos durante los tres primeros meses de la presidencia de Cerezo, y que los escuadrones de la muerte habían reaparecido de nuevo y actuaban en Ciudad de Guatemala. Por problemas de salud, Nineth de García anuló su visita a Washington D.C., y voló directamente de Europa a Chicago, donde estaba previsto que recibiese la llave de la ciudad de manos de su alcalde, Harold Washington. Sin embargo, al llegar a las aduanas de Chicago los funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización la registraron, la interrogaron y la acosaron durante dos horas, y uno de los funcionarios la llamó subversiva y comunista. Asimismo confiscaron las publicaciones que llevaba y la amenazaron con deportarla, pese a la prevista brevedad de su estancia y a que su visado estaba en vigor. Esta intimidación surtió efecto y Nineth de García voló directamente a Guatemala. Un amigo acudió al banquete en su lugar para aceptar la llave ofrecida por el alcalde Washington.

Este incidente es bastante revelador. No es probable que Sharransky o Walesa hubiesen recibido este trato por parte del Servicio de Inmigración y Naturalización, pero si por casualidad tal cosa hubiese ocurrido, las protestas de la prensa habrían sido enormes.¹¹¹ Cuando partidarios del GAM celebraron en Chicago una rueda de prensa para protestar por este ultraje, los medios de comunicación más importantes no acudieron, y ni las notas de prensa ni la carta sobre el tema de un grupo del Congreso y firmada por el senador Patrick Moynihan pudieron romper el silencio. La convergencia entre la política de la administración Reagan para Guatemala y las prioridades de los medios de comunicación fue total. (Según dos de los organizadores de la conferencia de prensa le habían dado toda la información relativa al acto a Steve Greenhouse, el periodista del *New York Times* en Chicago, pero dicho periódico no publicó ni una sola palabra sobre el tema.)

Una nota de prensa del ejército guatemalteco fechada el 17 de septiembre de 1986 acusaba al GAM de dirigir

... una funesta campaña de falsedades ... insultos e insolencias dirigidas a la institución militar que supera [los límites] de la libertad y la tolerancia debidas a la libertad de expresión. El ejército no puede permitir la insidia y la truculencia de las maniobras del GAM ... de este intento que compromete a nivel internacional la imagen democrática de Guatemala.¹¹²

Aunque amenazas muy similares a estas precedieron el asesinato de los dos dirigentes del GAM en marzo y abril de 1984, los medios de comunicación estadounidenses ignoraron totalmente esta nueva información —pese a los tenaces esfuerzos del GAM, de la Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala, y de sus aliados para darle publicidad—. Como en el pasado, la indignidad de estas víctimas continuó siendo un ingrediente esencial para que el ejército guatemalteco conservase su libertad para asesinar.

111. Tal como hemos dicho antes, la prensa estadounidense ignoró por completo la negativa de la administración de permitir venir a hablar a los Estados Unidos a una de las «Madres de los Desaparecidos».

112. Esta nota de prensa fue presentada en un memorándum de «Acción Urgente» de la Comisión pro Derechos Humanos en Guatemala/EE.UU., fechada el 3 de octubre de 1986.